



FLACSO
MEXICO
30 AÑOS

**LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL PERIODO
DEMOCRÁTICO Y NEOLIBERAL EN BOLIVIA
EN EL ORDEN MUNDIAL**

**TESIS PRESENTADA PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN CIENCIAS SOCIALES**

MARIO ALEJANDRO TORRICO TERÁN

Director de Tesis: Dr. Benjamín Temkin



Esta tesis corresponde a los estudios realizados con una beca otorgada por la
Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México

México D.F., Julio de 2006



70009

Para Mabelita, por su infinito amor y sus constantes regaños

ÍNDICE

Página

INTRODUCCIÓN.....	1
--------------------------	----------

CAPÍTULO I	
ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS.....	5

1.1	Paradigmas y Enfoques Teóricos en las Relaciones Internacionales	5
1.1.1	El Paradigma del Conflicto.....	6
1.1.1.1	El Realismo.....	7
1.1.1.2	El Neorrealismo.....	9
1.1.1.3	El reconocimiento de la importancia de la Economía: el Enfoque Estructuralista, las Teorías Hegemónicas y la Economía-mundo.....	9
1.1.1.3.1	El Estructuralismo.....	10
1.1.1.3.2	Las Teorías Hegemónicas y de la Economía-mundo.....	11
1.1.1.4	El Enfoque de la Interdependencia.....	12
1.1.1.5	El Enfoque Neomarxista de las Relaciones Internacionales.....	13
1.2	Hacia una doble integración: Relaciones Internacionales-Política Doméstica y Economía-Política.....	15
1.3	Modelización del Enfoque de Análisis.....	19

CAPITULO II	
EL DISCURSO DEL ORDEN MUNDIAL EN EL PERIODO PREVIO A LA APLICACIÓN DE LAS REFORMAS EN BOLIVIA.....	27

2.1.	El componente político del discurso del Orden Mundial: de los Derechos Humanos a la promoción de la Democracia. La ONU y la OEA a partir de la presidencia de Carter.....	28
2.1.1	La defensa de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas	30
2.1.2	El papel de la OEA en el respeto a los derechos humanos y el restablecimiento de la democracia.....	33
2.2	El Componente económico del discurso del Orden Mundial y el rol del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.....	35
2.2.1	Condiciones previas a la crisis de los ochenta en América Latina.....	36
2.2.2	El Fondo Monetario Internacional.....	37
2.2.2.1	El planteamiento del Fondo Monetario Internacional de la complementariedad entre el Ajuste y el crecimiento económico.....	38
2.2.3	El Banco Mundial.....	40
2.2.3.1	El Banco Mundial y el ajuste al contexto internacional.....	41
2.3	Las drogas y el narcotráfico en el discurso del orden mundial.....	45

CAPITULO III	
ANTECEDENTES AL RESTABLECIMIENTO DEMOCRÁTICO Y AL	
NEOLIBERALISMO EN BOLIVIA Y EXPOSICIÓN DEL COMPONENTE	
DISCURSIVO DE LOS ACTORES POLÍTICOS RELEVANTES EN DICHO	
PERIODO.....	48
3.1 La Revolución de 1952 y la Construcción Nacional.....	48
3.2 Pensamiento y Acción de la COB en el Periodo Posrevolucionario.....	50
3.3 El Movimiento Campesino: de la subordinación a la autonomía.....	57
3.4 Los Partidos Políticos en el nuevo contexto democrático.....	61
 CAPÍTULO IV	
UN NUEVO ORDENAMIENTO: NEOLIBERALISMO Y	
DEMOCRACIA PACTADA. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, LOS	
ACTORES POLÍTICOS Y SU DISCURSO EN EL PERIODO NEOLIBERAL.....	65
4.1 La COB y la CSUTCB en el nuevo contexto democrático y neoliberal.....	69
4.2 Partidos Políticos y Democracia Pactada.....	76
 CAPITULO V	
LOS CAMBIOS EN EL DISCURSO DEL ORDEN MUNDIAL	
EN LOS NOVENTA Y SU ESTADO ACTUAL.....	98
5.1 Los cambios en el componente político del discurso del Orden Mundial.....	99
5.1.1 La promoción y consolidación de la Democracia en las Naciones Unidas.....	99
5.1.2 La Democracia como prioridad fundamental de la OEA.....	101
5.1.3 La consideración de los pueblos indígenas en la ONU y la OEA.....	103
5.2 Los cambios en el componente económico del discurso del Orden Mundial.....	105
5.2.1 La centralidad de la disciplina fiscal en los planteamientos del FMI.....	106
5.2.2 Las nuevas preocupaciones del Banco Mundial.....	107
5.3 La persistencia de la lucha contra las drogas.....	110
 CAPITULO VI	
ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS POLÍTICOS EN BOLIVIA.....	112
 CONCLUSIONES.....	123
 BIBLIOGRAFÍA.....	125

INTRODUCCIÓN

El título de la presente tesis probablemente parecerá confuso a los lectores que se aventuren a leerla. Si bien economistas y politólogos han ido reconociendo en las últimas décadas la necesidad de traspasar las fronteras disciplinarias que cada una de estas ciencias sociales se ha impuesto con el objetivo de realizar análisis explicativos más enriquecedores que los que elaboraban separadamente, no es frecuente observar análisis que pretendan vincular los estudios de relaciones internacionales con los de política interna nacional, o lo que en inglés se denomina *domestic politics*. “La Economía Política del Periodo Democrático y Neoliberal en Bolivia en el Orden Mundial” es por un tanto un título que nos sugiere, por un lado, un análisis integrado de los procesos políticos y económicos que se produjeron en Bolivia durante el periodo caracterizado por la aplicación de políticas de mercado y por la vigencia democrática más prolongada de la historia boliviana, y por otro, un estudio que vincula dos tradiciones teóricas que han tendido a estar separadas: las relaciones internacionales y la política doméstica, lo que implica reconocer que los procesos económicos y políticos internos se encuentran vinculados a un contexto internacional que influye sobre ellos pero que no los determina completamente. Así, este trabajo pretende ser al mismo tiempo unificador (en cuanto a las perspectivas teóricas asumidas) y coherente (en lo relativo a la vinculación de las mismas).

Desde la revolución marginalista del siglo XIX, la economía, con el fin de depurarse de normativismos, ha renegado del nombre que le dieron sus fundadores: *economía política*. Así, en el *mainstream economics* es muy raro encontrar autores que aun hablen o se refieran a la economía política. Paradójicamente, el término economía política ha sido reinstalado en las ciencias sociales por la Ciencia Política, sin embargo el uso que se le ha dado está lejos del que le dieron Smith o Ricardo. Los estudios de economía política en la ciencia política norteamericana se han enfocado en estudiar de qué manera la situación de la economía de un país constituye un determinante importante de los problemas políticos que enfrenta el mismo, así como también cómo influye el desempeño económico en los resultados electorales.

El proceso de doble transición de la década del ochenta en América Latina en el que los regímenes autoritarios (muchos de ellos dictaduras militares) fueron sucedidos por gobiernos democráticos, a nivel político, y en el que las economías orientadas hacia el mercado interno y fuertemente influenciadas por el accionar estatal fueron abiertas y orientadas hacia el exterior, a nivel económico, fue objeto de múltiples estudios desde la óptica de la economía política.¹ La pregunta de investigación general de estos análisis era cómo el desempeño económico influye en la duración o quiebre de los regímenes democráticos.² El patrón común de estos trabajos es ofrecer explicaciones a partir de una serie de supuestos (por ejemplo, que existe una relación positiva entre desempeño económico y mantenimiento del régimen de gobierno) y una excelente colección de datos dejando, sin embargo, la sensación de un vacío teórico en sus análisis. Así, el proyecto de investigación que se ha venido a denominar como la *economía política de las reformas en América Latina* parece facilitar su estudio asumiendo un modelo simplista en el que el desempeño económico de los países es la variable independiente y la duración de la democracia es la variable dependiente. Estos modelos, si bien resultan útiles, se toman limitados a la hora de explicar la organización de los grupos, la formación de coaliciones, su interacción y la influencia que ejercen sobre las políticas públicas.³ En este sentido, la principal preocupación de estos investigadores es si las democracias podrán sobrevivir a las crisis económicas que enfrentan y qué condiciones económicas se requieren para que las democracias latinoamericanas se consoliden.

En vista de la evolución democrática de los países en nuestra región, tal parece que hoy en día la preocupación principal ya no debería ser si la democracia va a sobrevivir a las crisis económicas. En América Latina la democracia ha sobrevivido a estas crisis y aun la caída

¹ Una excelente colección de trabajos que asumen este enfoque se encuentra en William Smith et.al (ed) (1994), Federico Sturzenegger y Mariano Tomassi (ed) (1998) y Jonathan Hartlyn y Samuel Morley (ed) (1986).

² Esta pregunta nos recuerda mucho a la que se planteó Lipset en 1959 en su libro *Political Man, the social bases of politics*. Doubleday ed., New York.

³ Si bien estos temas han sido abordados en la literatura de la economía política de las reformas en América Latina, estos estudios asumen que los grupos y coaliciones responden únicamente a objetivos de carácter económico, principalmente incrementar sus ingresos y rentas.

de presidentes electos democráticamente en países como Ecuador, Argentina y Bolivia ha tenido un desenlace democrático y una sucesión constitucional.⁴

La doble integración, Economía-Política y Relaciones Internacionales-Política Doméstica, que nuestro estudio pretende realizar, asume que los actores políticos al interior de los Estados (partidos u organizaciones sociales) son conscientes que para impulsar las políticas que satisfagan sus intereses deben llegar al poder (constituyéndose en gobierno) o influir en él, en función de lo cual requieren articular un discurso que tenga la capacidad de interpelar a la sociedad. Junto a este discurso, dichos actores toman en cuenta tanto variables internas (el contexto económico, el sistema político y la capacidad de presión que poseen) como externas (que tienen que ver con el orden mundial imperante) al propio Estado, para desarrollar las estrategias con las que logren sus objetivos.

Reconocer que los procesos económicos y políticos internos a un Estado se encuentran vinculados a un contexto internacional que influye sobre ellos pero que no los determina completamente, implica analizar el carácter que asumen las relaciones internacionales. Las Teorías de las Relaciones Internacionales suelen señalar que, en determinados periodos, un Estado en particular asume, en virtud de su mayor capacidad militar, económica y/o ideológica, la supremacía a nivel internacional, misma que le permite establecer un ordenamiento que garantice la perpetuación de su posición, un Orden Mundial consistente en reglas de juego universales que discursivamente son presentadas como la realización del interés general. Sin lugar a dudas, este *Discurso del Orden Mundial* no es estático puesto que sufre variaciones y se actualiza a lo largo del tiempo. En este trabajo, planteo que se pueden establecer correspondencias entre los cambios que ocurren en el discurso del orden mundial y las alteraciones discursivas que suceden al interior de los Estados (en este caso de Bolivia) como consecuencia de las estrategias que los actores políticos diseñan para interpelar a la población y llegar al poder o influir en él.

En Bolivia, a partir de mediados de la década del ochenta, en la que se produjo el restablecimiento democrático (en 1982) y el inicio de las reformas económicas neoliberales

⁴ En algunos casos en que la Constitución no preveía estas sucesiones, han prevalecido acuerdos políticos para dar a la situación una salida democrática.

(en 1985), se observa una continuidad en la política, en la economía y en el discurso que los actores políticos despliegan en su lucha por el poder. Dicha continuidad permitió el mantenimiento de una estabilidad económica y política inédita en la historia boliviana, la misma que, sin embargo, fue interrumpida a partir de 2000. Desde ese año se precipitaron una serie de acontecimientos que tomaron por sorpresa a los partidos políticos y que derivaría en el colapso del sistema político boliviano y en el inicio de un nuevo periodo que recién comienza. Considero que la complejidad del proceso que culminó con el triunfo electoral de Evo Morales en diciembre de 2005 exige establecer las relaciones teóricas que propongo en este trabajo. No obstante, debo señalar que no pretendo estudiar las implicaciones de la victoria del Movimiento al Socialismo (MAS), sino, analizando los procesos económicos y políticos que se produjeron en Bolivia, a partir de los cuáles se podrán establecer las estrategias que los distintos actores políticos bolivianos despliegan para acceder al poder o influir en él, determinar los cambios discursivos producidos en este país desde mediados de los ochenta y su correspondencia con las variaciones que el Discurso del Orden Mundial ha sufrido en este mismo periodo.

Para iniciar este recorrido, debo realizar una breve exposición de los principales enfoques teóricos de las Relaciones Internacionales con el fin de definir qué elementos de este análisis serán de utilidad a nuestro estudio. Posteriormente, se establecerá metodológicamente la vinculación Economía-Política y Relaciones Internacionales-Política Doméstica que planteo.

CAPÍTULO I

ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS

El presente capítulo sentará las bases teóricas y metodológicas que guiarán este trabajo de investigación. Inicialmente se expondrán los diversos paradigmas y enfoques teóricos de las Relaciones Internacionales con el fin de dejar claramente establecido bajo qué criterios estableceremos el vínculo Relaciones Internacionales-Política Doméstica. Posteriormente se desarrollará un modelo de análisis que pretende exponer las variables que los actores políticos toman en cuenta para desarrollar sus estrategias dirigidas a acceder al poder o influir en él. Este modelo nos permitirá establecer la relación Economía-Política.

1.1 Paradigmas y Enfoques Teóricos en las Relaciones Internacionales

En el análisis de las Relaciones Internacionales pueden contraponerse, a nivel ontológico, dos paradigmas teóricos. El primero concibe el ámbito internacional como esencialmente conflictivo debido, fundamentalmente, a la ausencia de una autoridad supra-estatal que regule las relaciones interestatales, de lo cual se desprende que en la esfera internacional los Estados soberanos son los principales actores y sujetos del estudio de las Relaciones Internacionales. Así, este campo consistiría en la interacción de Estados iguales en términos de soberanía pero desiguales en términos de poder, diferencia que determinaría las reglas y las instituciones de la política internacional, es decir, la organización del sistema internacional. El segundo paradigma considera que las relaciones entre los Estados (concebidos también como los principales actores de las relaciones internacionales) son de cooperación y de igualdad. Esta postura emerge del razonamiento de que los Estados se guían por principios sociales y morales comunes que posibilitan un volumen considerable de interacciones e intercambios que, a su vez, permiten el surgimiento del derecho internacional y su aceptación general.

Dentro de ambos paradigmas se ubican distintos y muy disímiles enfoques teóricos, mismos que, partiendo de diferentes presupuestos epistemológicos, adoptan una variedad de enfoques metodológicos. Entre las teorías pertenecientes al paradigma del conflicto, pueden mencionarse al realismo, al neorrealismo, a los enfoques de la economía-mundo, de

la interdependencia, a las teorías hegemónicas y al enfoque neomarxista. En el paradigma de la cooperación pueden ubicarse al idealismo y a las teorías pluralistas y globalistas.

En el presente trabajo se asume que a pesar de que a nivel internacional no existe una autoridad única que mantenga una organización de gobierno y regule las relaciones entre los Estados, éstos no interactúan en condiciones de absoluta libertad, es decir, sus comportamientos no son totalmente discrecionales debido a que existen reglas e instituciones que los regulan y limitan y que son expresión de una estructura de poder mundial. Sin embargo, debemos asumir que en este ordenamiento el conflicto está siempre latente debido a que en determinadas circunstancias pueden existir incentivos a no atenerse a dichas reglas y a que éstas y sus instituciones no son estáticas, sino que están en proceso de cambio continuo. Por ello, nos concentraremos en las teorías que se ubican en el paradigma del conflicto.

Dentro de los enfoques teóricos que asumen el conflicto pueden ubicarse dos perspectivas muy importantes. La primera, identificada con el realismo y el neorrealismo, analiza, en base a supuestos que posteriormente serán desarrollados, el comportamiento estratégico de los Estados desde una punto de vista de racionalidad económica. La segunda perspectiva corresponde a los análisis que postulan la existencia de una estructura jerárquica en el ámbito internacional, un orden mundial encabezado por una potencia hegemónica. Dicha hegemonía se construye en base a una primacía o superioridad que bien puede ser militar, económica o ideológica.

A continuación se expondrá de manera breve cada una de estas aproximaciones teóricas al estudio de las Relaciones Internacionales.

1.1.1 El Paradigma del Conflicto

La ausencia de una autoridad central en el campo internacional es la base sobre la que se establece las relaciones entre los Estados como esencialmente conflictiva. Así, la política internacional consistiría en la interacción de Estados soberanos (cada uno de los cuales disfruta de un monopolio de medios de coerción dentro de sus fronteras) no sometidos a autoridad superior alguna que regule las Relaciones Internacionales. Es decir, al no existir

lazos entre los actores internacionales, se presenta una propensión permanente al conflicto entre ellos. En consecuencia, y debido a la condición de inseguridad recíproca de los Estados, cada uno de ellos, librado a su propia suerte, persigue sus propios fines e intereses tendientes a asegurar su supervivencia y seguridad, por lo cual privilegiará incrementar su poder.

Al contrario que la sociedad humana, la sociedad de Estados presentaba una condición análoga a la que Hobbes denominó estado de naturaleza: entre los Estados, de hecho, no se produjo pacto social alguno destinado a la constitución de una autoridad superior. Los Estados no se podían basar en otra cosa que en sus propios medios y su fuerza para llevar a cabo sus intereses. Por eso mismo, el Estado debía tender a la acumulación de poder para sentirse seguro. (Attinà, 2001: 40).

Los diversos enfoques teóricos ubicados dentro de este paradigma han privilegiado distintos mecanismos de ampliación del poder de los Estados: militar, económico o ideológico. A pesar de estas diferencias, dichos análisis no asumen que la ausencia de una autoridad internacional impida la conformación de un poder superior, lo cual ocurre precisamente cuando un Estado, en virtud a una mayor acumulación de poder (sea por medios militares, económicos o ideológicos) respecto a los demás, se halla en condición de imponerse a los otros y de hacer que estos participen en un esquema de orden que garantiza y reproduce su primacía mundial. El realismo, el neorrealismo, los enfoques de la economía-mundo, de la interdependencia, las teorías hegemónicas y la perspectiva neomarxista se inscriben dentro de este paradigma.

1.1.1.1 El Realismo

El Realismo fue la teoría predominante en el estudio de las Relaciones Internacionales en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, aunque sus principales presupuestos filosóficos pueden retrospectivamente ser ubicados en Maquiavelo y Hobbes. Sus exponentes más importantes son Hans Morgenthau y Raymond Aron.

Epistemológicamente este enfoque teórico concibe que los actores en el ámbito internacional son los Estados, de lo cual se desprende que la configuración de las Relaciones Internacionales dependerá de los objetivos y las acciones que emprendan éstos.

A nivel metodológico, el Realismo, con la pretensión de estudiar la política internacional “tal como es”, se basa en una serie de supuestos, derivados de una particular concepción sobre la naturaleza humana, acerca del comportamiento de los Estados que adquieren carácter universal y le permiten formular imperativos prácticos para el accionar político internacional. Este enfoque teórico parte de una premisa filosófico-antropológica pesimista, trágica e inmutable: “la naturaleza humana no es innatamente buena, la humanidad es mala, pecadora y busca el poder”,⁵ el hombre se caracteriza tanto por su poder creador como por su impotencia para el dominio de sí mismo, razón por la que el estadista debe diseñar un marco político que minimice la propensión humana al conflicto. Esta naturaleza del comportamiento humano configura también la conducta internacional de los Estados, por lo cual la política internacional se caracterizaría por la permanente búsqueda de poder de unidades políticas autónomas que interactúan en un medio en el que, debido a la ausencia de una autoridad supraestatal, existe una anarquía natural.

Según los Realistas, “sólo con el poder militar el Estado puede sobrevivir y realizar sus intereses nacionales”,⁶ lo que no implica que se haga uso permanente de la fuerza militar puesto que éste es un recurso al que se recurrirá sólo en última instancia. La paz entre los Estados, por tanto, sería producto de un mecanismo autoregulatorio denominado *balance de poder*, a través del cual las grandes potencias podrían gestionar sus conflictos de intereses lo más pacíficamente posible mediante reglas operativas acordadas que reflejarían una organización jerárquica de las relaciones internacionales.

Junto a la noción de poder, los realistas construyen la noción de influencia, distinguiendo que mientras el primero alude a la capacidad de mover a los demás por medio de la amenaza, el segundo lo hace a través de promesas o concesiones de beneficios. Al ampliar esta noción hacia la de *esfera de influencia* de una potencia, estos estudiosos asumen la pérdida de autonomía de los Estados sometidos a la misma. Así, en la medida en que los Estados amplíen su poder privilegiando los medios militares de que dispone irán extendiendo su esfera de influencia en detrimento de otros Estados, quienes de esta manera pierden su capacidad de decisión y autonomía en el sistema internacional.

⁵ Dougherty y Pfaltzgraff, 1993.

⁶ Attinà, 2001.

1.1.1.2. El Neorrealismo

Esta propuesta intenta reconciliar los principales supuestos teóricos del Realismo con las exigencias metodológicas que en la década del sesenta el avance de las ciencias sociales exigía. En el Neorrealismo, cuyo principal exponente es Kenneth Waltz, si bien los Estados continúan siendo los actores de la política internacional y el poder sigue siendo una variable clave, debe destacarse que se considera que las Relaciones Internacionales ya no dependen únicamente de las acciones de los Estados, sino de un sistema que ellos mismos en sus interacciones estructuran y que permite a los gobiernos sólo determinados comportamientos lo que, no obstante, no impide la construcción, en base a la fuerza militar, de una jerarquía a la cabeza de un Estado determinado.

1.1.1.3 El reconocimiento de la importancia de la Economía: el Enfoque Estructuralista, las Teorías Hegemónicas y la Economía-mundo

En el análisis de las Relaciones Internacionales la importancia de la Economía había sido subestimada y hasta la década del sesenta no había ocupado un lugar importante en la consideración de la política internacional. La atención central que recibió la noción de poder asentada sobre la capacidad militar de los Estados no podía monopolizar por más tiempo la atención de los estudiosos del ámbito internacional debido a que era claro que desde la segunda guerra mundial se producía un incremento acelerado de las transacciones económicas internacionales. El comercio de bienes y servicios, la movilidad de los flujos de capital, la aparición de empresas transnacionales y el impulso que la ciencia y el desarrollo tecnológico estaban dando a los procesos productivos no podían ser ignorados dado que era absolutamente evidente que las relaciones económicas internacionales se constituían en un componente vital de las relaciones entre los Estados.

Fruto de este reconocimiento surgieron distintas propuestas teóricas que incorporaban cada vez con mayor fuerza la dimensión económica al terreno de la política internacional. Entre ellas pueden mencionarse el estructuralismo, las teorías hegemónicas y de la economía-mundo y los enfoques de la interdependencia.

1.1.1.3.1. El Estructuralismo

Esta propuesta no aborda estrictamente las cuestiones principales que habían preocupado a los teóricos de las Relaciones Internacionales, a saber, la acumulación de poder, la guerra y la paz, la soberanía de los Estados, la fuerza militar, etc. Su preocupación se dirigía hacia los problemas relacionados con el desarrollo económico de los países del tercer mundo, especialmente de los latinoamericanos; de allí su visión heterodoxa y no estatocéntrica. Sin embargo, su importancia radica en haber inspirado un movimiento político a nivel global que “contribuyó a abrir camino a una serie de nociones que han alterado la visión clásica de las Relaciones Internacionales, como las que se refieren a la atenuación del rol protagónico del Estado y al reconocimiento del papel de otros actores, a la importancia de la economía en la política internacional y a la conflictiva dinámica que inspira las relaciones entre los países desarrollados y los subdesarrollados”.⁷

El estructuralismo tiene su origen en el pensamiento de la CEPAL que a principios de la década del cincuenta formuló, con el gran aporte de Raúl Prebisch, una explicación del subdesarrollo latinoamericano sobre la base de tres ideas principales:

- i) Las estructuras productivas de los países desarrollados (llamados del centro) y de los subdesarrollados (denominados periféricos) son distintas. Los primeros se caracterizan por su homegeneidad (en términos de alta productividad) y diversificación (en términos de producción y exportación de una amplia variedad de productos), en tanto que los segundos se caracterizan por poseer una estructura productiva heterogénea (unos pocos sectores productivos poseen una elevada productividad en tanto que el resto mantiene niveles muy bajos de productividad asociados principalmente con una agricultura de subsistencia) y especializada (referida a la concentración de la exportación en pocos productos, principalmente materias primas).
- ii) Dichas estructuras productivas se relacionan a través de la división internacional del trabajo en la que centro y periferia realizan funciones distintas y complementarias (el centro se especializa en la producción y exportación de manufacturas y la periferia lo

⁷ Tomassini, 1988: 45.

hace en la producción y exportación de productos primarios) mediante las cuales se conectan desarrollo y subdesarrollo en único sistema económico mundial.

- iii) Estas relaciones entre centro y periferia son asimétricas y reproducen la disparidad entre sus estructuras productivas reforzando el desarrollo en el primer caso y el subdesarrollo en el segundo. A esto se añade que a través del comercio internacional –vía el mecanismo de los precios– se transfieren los frutos del progreso técnico de la periferia al centro, originándose un deterioro de los términos de intercambio en el que la periferia se ve perjudicada.

Esta postura fue profundizada y radicalizada por los teóricos de la dependencia quienes empiezan a acuñar términos como intercambio desigual, desarrollo desigual y desarrollo dependiente, así como también, en algunos planteamientos como los de Frank, Amin y Dos Santos, a negar la posibilidad de desarrollo de la periferia capitalista bajo esta configuración económica internacional.

1.1.1.3.2. Las Teorías Hegemónicas y de la Economía-mundo

La perspectiva hegemónica, según Attinà (2001), interpreta la organización internacional a partir de modelos de hegemonía político-económica ejercida de manera estable por un solo Estado que controla las relaciones sistémicas (lo cual no significa que controla cada aspecto de la vida del sistema internacional), planteamiento que se deriva del reconocimiento de la existencia de una dimensión económica internacional que interactúa con la dimensión político-militar. Bajo este análisis, el Estado hegemónico, debido a su superioridad económica y militar, tiene el poder de hacer que las cosas marchen en la dirección que prefiere, para lo cual define las reglas del funcionamiento político y fija la división del trabajo en el campo económico. Sin embargo, al interior de este orden político y económico crece el poder económico y militar de otras potencias que desafiarán el rol hegemónico de la potencia dominante y reclamarán la instauración de un nuevo orden, con lo cual el sistema se precipita en una guerra de la cual emergerá un nuevo orden y, eventualmente, una nueva potencia hegemónica. Por tanto, si bien la estructura jerárquica del sistema internacional se define en una guerra que instaura a una potencia hegemónica, razón por la que, al igual que en los enfoques convencionales de las Relaciones Internacionales, las

variables militares continúan asumiendo gran importancia, “las variables económicas también resultan determinantes y la potencia hegemónica debe asegurar al sistema que dirige una organización económica”.⁸ Robert Gilpin es quien ha expuesto de forma más clara esta postura.

Otros enfoques teóricos asumen que la importancia de la economía es aun mayor, puesto “que el mundo no se puede entender si no se parte de la difusión del modo industrial de producción y de intercambio de la economía capitalista que modificó profundamente las bases de la vida material”⁹ y que traspasó las fronteras de los Estados dando lugar al surgimiento de una economía mundial capitalista. Esta postura, de evidente origen marxista, es defendida tanto por los teóricos del Imperialismo como por Immanuel Wallerstein, quien formuló su concepción de la economía-mundo capitalista en la que las relaciones políticas internacionales ejercen sólo una función auxiliar del sistema económico internacional.

1.1.1.4. El Enfoque de la Interdependencia

Este planteamiento introduce dos ideas que ya venían cobrando fuerza en el campo de las relaciones internacionales, a saber, que los Estados no son los únicos actores en la esfera internacional y que los momentos de debilitamiento de la hegemonía de una potencia no se resuelven exclusivamente a través de la guerra debido a la existencia de normas, reglas y procedimientos que constituyen un marco regulatorio orientado a regular el accionar político, económico y militar de los actores internacionales y que recibe el nombre de *régimen internacional*. La presencia de regímenes internacionales no involucra la negación de la existencia de un Estado hegemónico, puesto que se afirma que éste está presente pero no de manera esencial, lo cual sumado a la realidad de la dispersión del poder económico mundial, da fuerza a la idea de interdependencia económica. Robert Keohane y Joseph Nye son quienes inicialmente desarrollan esta propuesta.

⁸ Attinà, 2001: 53.

⁹ *Ibid.*

1.1.1.5 El Enfoque Neomarxista de las Relaciones Internacionales

Robert Cox (1993), uno de los principales exponentes de este enfoque, señala que para comprender las relaciones globales de poder se requiere observar el problema del orden mundial en su globalidad evitando reducirlo a un sistema mundial.¹⁰ Al respecto, es necesario dejar claro qué entiende este autor por Orden Mundial.

Utilizo el término "orden mundial" en preferencia al de "sistema interestatal", porque es relevante en todos los periodos históricos (y no sólo en aquellos en los cuales los Estados han sido las entidades componentes), y en preferencia a "sistema mundial" en la medida en que es más indicativo de una estructura que tiene sólo una cierta duración en el tiempo y supera las connotaciones de equilibrio de "sistema". "Mundo" designa la totalidad relevante, limitada geográficamente por la gama de probables interacciones (algunos "mundos" del pasado estaban limitados al Mediterráneo, a Europa, a China, etc.). "Orden" es utilizado en el sentido en que las cosas habitualmente suceden (no la ausencia de turbulencia); desorden es incluido en el concepto de orden. Un sistema interestatal es una forma histórica del orden mundial (Cox, 1993: 123).

Con el fin de determinar los probables escenarios futuros de los órdenes mundiales, Cox señala que la principal distinción entre estructuras del orden mundial radica en si éste es o no hegemónico. Para plantear esto, recurre a la noción gramsciana de hegemonía, misma que toma de Maquiavelo la imagen del poder como un centauro: mitad hombre mitad bestia, metáfora que muestra la combinación de consenso y coerción. Mientras el aspecto consensual del poder prevalezca, existirá hegemonía, por lo que la coerción, aunque siempre está latente, sólo es aplicada en casos extremos. De esta manera, la hegemonía es suficiente para asegurar un comportamiento adecuado de la mayoría de la gente.

Con el término hegemonía Cox refiere a un dominio en el que el Estado dominante crea un orden basado ideológicamente en un amplio grado de consenso y que funciona de acuerdo a principios generales de carácter universal que aseguran la continuación de la supremacía del Estado líder (y también de las clases sociales líderes) ofreciendo alguna expectativa de

¹⁰ Cox insiste bastante en evitar cualquier confusión que lo vincule con las posturas que plantean la existencia de un "sistema mundial" debido a la tendencia de éstas a subvaluar el Estado (considerándolo como meramente derivativo de su posición en el sistema mundo) y a su alegado sesgo de mantenimiento del sistema (producto del énfasis que realizan en la determinación de fuerzas que mantienen o restauran un equilibrio del sistema en detrimento de la identificación de contradicciones que puedan conducir a su transformación). Dicha crítica va dirigida principalmente al estructural-funcionalismo y a la propuesta desarrollada por Immanuel Wallerstein.

satisfacción a los menos poderosos. En base a esta línea teórica, Cox concluye por sugerir una sucesión de órdenes mundiales: mercantilista, liberal, neoimperialista y neoliberal, el segundo y el cuarto de los cuales habrían sido hegemónicos y corresponden a la *pax britannica* y a la *pax americana*, respectivamente. En estos órdenes mundiales hegemónicos se une un elemento ideológico e intersubjetivo a la relación de poder en bruto, es decir, “el poder dominante hace ciertas concesiones o compromisos para asegurarse la aquiescencia de poderes menores hasta un nivel que pueda ser expresado en términos de interés general”.¹¹ Por tanto, el elemento que distingue los órdenes mundiales hegemónicos de los no hegemónicos es el consensual.

Dentro de la misma tradición teórica, Arrighi y Silver (1999) afirman que la hegemonía es algo más y diferente que la dominación pura y simple: es el poder adicional que se añade a un grupo dominante en virtud de su capacidad de dirigir la sociedad en una dirección que no sólo sirve a sus propios intereses, sino que también es percibida por los grupos subordinados como la prosecución de un interés general. Así, señalan que la noción gramsciana de hegemonía remite a una “inflación del poder” que resulta de la capacidad de los grupos dominantes de presentar creíblemente su dominación como algo que sirve no sólo a sus intereses, sino también a los de los grupos subordinados. Cuando falta esa credibilidad se debe hablar de “dominación sin hegemonía”, puesto que si los grupos subordinados tienen confianza en sus gobernantes, los sistemas de dominación no requieren que se recurra a la fuerza, pero si esa confianza se desvanece, no les queda otra alternativa.

El análisis neomarxista, al trasladar al ámbito internacional la concepción gramsciana de liderazgo y hegemonía a nivel nacional, da cuenta de la existencia de un discurso expresado en términos universales en el que los intereses del Estado y las clases sociales que se encuentra a la cabeza del orden mundial aparentan coincidir con los de la sociedad mundial, un discurso que puede ser resistido y hasta rechazado, pero que no puede ser ignorado. Adicionalmente, el *Discurso del Orden Mundial* permite construir las instituciones encargadas de mantener y reforzar la estructura jerárquica mundial. En realidad, es a través de la institucionalización que se estabiliza y perpetúa un orden particular, es decir, las instituciones reflejan las relaciones de poder prevalecientes y tienden a apoyar imágenes

¹¹ Cox (1993) p, 193.

colectivas consistentes con esas relaciones de poder, con lo cual proveen maneras de enfrentar los conflictos y minimizar el uso de la fuerza.

1.2 Hacia una doble integración: Relaciones Internacionales-Política Doméstica y Economía-Política

Se ha hecho mención que el presente trabajo pretende integrar los estudios de Relaciones Internacionales con los de política interna de los Estados (o política doméstica), por un lado, y los análisis de los procesos económicos con los que examinan los fenómenos políticos, por otro. Para ello será necesario, en el primer caso, desligarnos de varios supuestos que imperan en las teorías de las Relaciones Internacionales y, en el segundo, diseñar un modelo teórico de economía política distinto al que impera en los estudios de *la economía política de las reformas en América Latina*.

Durante décadas las Relaciones Internacionales se han asumido como una disciplina separada y distinta de la Ciencia Política bajo el argumento de que la política a nivel internacional es radicalmente distinta de la política al interior de los Estados. La principal distinción entre ambos campos sería que la política internacional es anárquica (debido a la ausencia de una autoridad supraestatal que regule las relaciones entre los Estados) y la política doméstica es jerárquica (puesto que el Estado ejerce su poder al interior de las fronteras que demarcan su territorio y regula las relaciones entre los individuos). Realismo, neorrealismo y las teorías hegemónicas, a pesar de las diferencias expuestas anteriormente, concuerdan con este diagnóstico y asumen que las instituciones internacionales son sólo un reflejo de la estructura de poder mundial.

Tan sólo con una mirada a la política internacional y a la política doméstica de los Estados podemos observar que anarquía y jerarquía no son exclusivos de uno u otro ámbito. Si bien las instituciones internacionales no son campos neutrales y en efecto reflejan una estructura de poder económico y político mundial, el Estado que se encuentra a la cabeza del mismo no es libre de actuar como a él le plazca, es decir, no está exento de seguir las reglas que él mismo definió a través de estas instituciones, y por tanto mucho menos lo estarán los demás Estados. Con ello no se afirma que no se vulneren en ocasiones los principios que sostienen la estructura jerárquica mundial, sino que los Estados no pueden ignorar dichas

instituciones, y en consecuencia, ni son completamente libres para actuar ni están totalmente condicionados y sometidos a este ordenamiento.¹² Por otro lado, si bien el Estado dentro de sus fronteras nacionales ejerce el monopolio de la fuerza legítima, no puede afirmarse que las relaciones de éste con el resto de la sociedad sean estrictamente jerárquicas y verticales puesto que al interior de los Estados existen diversos actores políticos que influyen, se oponen e incluso fuerzan cambios en las reglas y decisiones públicas, por lo cual, en la política doméstica los actores tampoco están completamente subordinados al poder estatal. Con estas observaciones, tal parece que el análisis de las Relaciones Internacionales no es muy distinto al de la política doméstica de los Estados, con lo cual la justificación de la separación entre ambos empieza a debilitarse.

Existen dos supuestos que asumen los principales enfoques teóricos de las Relaciones Internacionales que han impedido el acercamiento entre esta disciplina y el estudio de la política doméstica: *i)* que el Estado es el único actor de la política internacional, y *ii)* que el Estado es un actor unitario. Si bien sólo el Realismo y el Idealismo planteaban en sentido estricto el primer supuesto, otras posturas como el neorrealismo, las teorías hegemónicas y el enfoque del sistema-mundo, a pesar de reconocer la existencia de otros actores a nivel internacional (instituciones, empresas transnacionales, etc.) asumen que los mismos no son tan importantes como los Estados y desarrollan sus estudios considerando a éstos como los únicos actores relevantes; es decir, los actores internacionales distintos a los Estados son vistos como epifenómenos que sólo reflejan la estructura de poder mundial y, por tanto, pueden ser ignorados en el análisis de las Relaciones Internacionales.

El segundo supuesto, referido a que el Estado es un actor unitario que busca la acumulación de poder con el fin de sobrevivir en un contexto caracterizado por la anarquía, implica que éste posee un conjunto de preferencias que intenta impulsar, lo que a su vez significa que se debe cumplir una de las siguientes condiciones: *i)* que existe un solo individuo (el estadista) que toma decisiones y cuyas preferencias son las que se quiere maximizar, *ii)* que todos los individuos en el país tienen el mismo conjunto de preferencias y por tanto todas ellas pueden expresarse como una misma e idéntica función, *iii)* que el conjunto de preferencias

¹² Con ello se debilita uno de los principales planteamientos de la teoría del sistema-mundo capitalista que asume que los Estados subordinados al sistema económico mundial están completamente sometidos a este esquema.

que se quiere maximizar no pertenece a ningún individuo en particular pero representa lo que resulta del juego político, es decir, toda la política nacional se resume en una función de utilidad. En síntesis, el Estado es un actor unitario y coherente que intenta maximizar un conjunto de preferencias que cumplen, al igual que las preferencias individuales asumidas en Economía, los axiomas de reflexividad, completitud y transitividad.

Al igual que Milner (1998) asumo que los dos supuestos expuestos son un tipo ideal extremo cuya utilidad heurística es casi nula. El primer supuesto prácticamente no deja lugar para un análisis institucional de la política internacional y aunque las instituciones internacionales son expresión de una estructura de poder mundial no se puede desconocer el hecho de que ellas existen no como simples epifenómenos puesto que proveen mecanismos para enfrentar los conflictos y preservar el Orden Mundial. El segundo supuesto no considera los procesos por medio de los cuales los distintos actores políticos influyen sobre el conjunto de políticas impulsadas desde el Estado. Con el supuesto de que el Estado es un actor unitario, los teóricos de las Relaciones Internacionales dan el salto mortal de asumir que éste cumple los supuestos de racionalidad del individuo sin considerar que a su interior no sólo confluyen muchos individuos sino, y esto es lo más importante, múltiples grupos que interactúan estratégicamente. Estos teóricos incluso van más allá al plantear, con ayuda del primer supuesto, que todos los Estados tienen el mismo conjunto de preferencias, con lo que ignoran los procesos políticos que suceden a su interior y consideran que dichas preferencias existen independientemente de los intereses de los actores políticos.

Considero que el Estado no puede ser pensado como un actor unitario puesto que incluso en las dictaduras más autoritarias existen distintos grupos que deben satisfacer sus intereses, y no se puede asumir que las preferencias del dictador son las que se intentan maximizar. Asimismo, asumo que los actores políticos están conscientes que para impulsar las políticas de su interés deben tener la capacidad de acceder al poder del Estado (constituyéndose en gobierno) o influir en él, en función de lo cual desarrollan diversas estrategias dirigidas a tal fin. Y este es el sentido que tomará el término *economía política* a lo largo del presente trabajo, a saber, que *las estrategias que despliegan los actores políticos en el ámbito nacional con el fin de tomar el poder o influir en él para impulsar las políticas que*

satisfagan sus intereses, toman en cuenta, dependiendo del tipo de actor en cuestión (partidos u organizaciones sociales), el contexto económico, el sistema político prevaleciente, el discurso del Orden Mundial y la capacidad de presión que poseen. Adicionalmente, un componente fundamental de la estrategia que desarrollan los actores políticos es el discurso que articulan con el fin de mostrarse como portadores del interés general y, de esta forma, interpelar a la sociedad. Con esta definición abandonamos los supuestos legalistas sobre el Estado que el análisis de las Relaciones Internacionales ha privilegiado (por ejemplo, que todos los Estados son iguales, que ejercen soberanía sobre su territorio, etc.) y asumimos que éste es ante todo una cristalización de relaciones de poder entre actores en pugna.

Así como se ha afirmado que las instituciones internacionales no son meros epifenómenos de la estructura jerárquica mundial, tampoco podemos admitir que el Orden Mundial se caracteriza por la pasividad de los Estados subordinados y de los distintos grupos sociales a su interior. Si bien la incorporación de la perspectiva gramsciana al análisis de las relaciones internacionales resulta útil porque nos permite detectar la existencia del componente discursivo del orden mundial, considero que este enfoque tiene una seria limitación al concebir la unidireccionalidad en el mantenimiento del mismo: de la potencia hegemónica al resto de los Estados, a través ya sea del liderazgo intelectual y moral o de la coerción, con lo que este tipo de análisis encuentra dificultades en explicar cómo se pueden producir cambios desde abajo de la estructura jerárquica mundial.

Considero que examinar cómo el Discurso del Orden Mundial ha ido variando y actualizándose como consecuencia de los cambios discursivos en los actores al interior de los Estados requeriría de un estudio amplio que abarque a distintos países, mismo que no se encuentra dentro de los alcances del presente trabajo de investigación. Sin embargo, si analizamos por un lado la evolución discursiva que dichos actores experimentan producto de las estrategias que desarrollan para llegar al poder o influir en él, y por otro, los cambios ocurridos en el Discurso del Orden Mundial, podremos tener alguna idea de si evidentemente existen correspondencias entre los cambios discursivos en ambos ámbitos. Considerando ello, es que se plantea el siguiente problema de investigación: *¿Existen correspondencias entre las variaciones ocurridas en el Discurso del Orden Mundial desde*

finales de los setenta hasta la actualidad y los cambios observados en el discurso que los actores políticos en Bolivia han desplegado con el fin de acceder al poder o influir en él a partir de la restablecimiento democrático y la aplicación de las reformas económicas de la década del ochenta?

Habiendo señalado el problema de investigación, a continuación se plantea la siguiente hipótesis: *Si existen correspondencias entre las variaciones ocurridas en el Discurso del Orden Mundial desde finales de los setenta hasta la actualidad y los cambios observados en el discurso que los actores políticos en Bolivia han desplegado con el fin de acceder al poder o influir en él a partir de la restablecimiento democrático y la aplicación de las reformas económicas de la década del ochenta.*

1.3 Modelización del Enfoque de Análisis

A continuación se establecerán una serie de relaciones lógicas entre distintas variables con el fin de sistematizar lo hasta aquí expuesto. En primer lugar, se asumirá que todos los actores políticos (partidos u organizaciones sociales) intentan llegar al poder (convirtiéndose en gobierno) o influir en él con el objetivo de impulsar las políticas que satisfagan sus intereses. Para ello, los partidos políticos desarrollan diversas estrategias electorales mientras que el resto de los actores relevantes despliegan otro tipo de prácticas que no necesariamente toman en cuenta los procedimientos electorales.

El partido político gobernante, con el fin de mantener el poder, desarrolla la siguiente estrategia intentando maximizar sus respectivas variables:¹³

Estrategia para mantener el Poder = $\Delta Y + \alpha_i + \beta + \gamma_i$

donde ΔY = Incremento del ingreso de la población

α_i = interpelación discursiva del partido gobernante ($0 < \alpha_i \leq 1$)

β = valoración social del sistema político ($0 < \beta \leq 1$)

γ_i = relación del discurso del partido con el discurso del Orden Mundial ($0 < \gamma_i \leq 1$)

¹³ No se pretende determinar los valores de cada uno de los parámetros que se muestran a continuación sino tan sólo establecer relaciones lógicas entre unas variables y otras. El rango de valores entre los que se hallan algunos parámetros obedece simplemente a un criterio de rigor técnico.

A su vez, $\alpha_1 = f(a_1, b_1)$

donde a_1 = contenido discursivo del partido

b_1 = estrategia de interpelación discursiva

$\beta = f(c, d)$

donde c = representatividad del sistema político,

d = desempeño socialmente percibido de las instituciones políticas

$\gamma_1 = f(e, f)$

donde e = importancia que tiene para el partido el reconocimiento y apoyo internacional,
 f = importancia socialmente percibida del apoyo internacional.

La razón por la que asumo estas variables son las siguientes: *i)* porque el partido gobernante está consciente que los electores tendrán incentivos a reelegir a un gobierno que tuvo un desempeño económico exitoso en términos de incrementar el ingreso de la población, lo cual se logra a través de políticas de incentivo al crecimiento y de políticas de redistribución; *ii)* porque mediante su retórica discursiva tienen la posibilidad de conseguir identificación y lealtad partidaria de parte de los electores, lo que puede ayudar a disminuir los riesgos de una drástica disminución de votos en caso de que su desempeño económico no haya sido muy favorable (a mayores valores de α_1 mayores niveles de interpelación discursiva); *iii)* porque al partido gobernante le interesa que se mantengan las reglas de juego del sistema político del cual él mismo es parte y que le garantizan que, en caso de no ganar las elecciones próximas, a futuro tiene la posibilidad de retornar al poder, motivo por el cual no considera conveniente que su retórica discursiva dañe la estabilidad de dicho sistema (mayores valores de β mostrarían una mayor valoración social del sistema político); *iv)* porque en la medida en que el discurso del partido se apegue al discurso del orden mundial (la relación entre ambos sea positiva y tienda a 1), éste se asegura el respaldo de las instituciones y gobiernos internacionales y la ayuda económica internacional (este último aspecto es de mucha importancia en Bolivia) o, al menos, no ser vetado internacionalmente.

Los partidos políticos de la oposición que, por las razones expuestas en el acápite *iii)* del párrafo anterior, forman parte del sistema político junto al partido gobernante, despliegan la

siguiente estrategia con el objeto de alcanzar el poder intentando maximizar también sus respectivas variables (nótese que estos partidos también intentan mantener una relación positiva entre el discurso que manejan y el discurso del orden mundial por las razones expuestas en el acápite iv):

Estrategia para alcanzar el Poder = $\alpha_2 + \beta + \gamma_2$

donde α_2 = interpelación discursiva del partido opositor ($0 < \alpha_2 \leq 1$),

β = valoración social del sistema político ($0 < \beta \leq 1$),

γ_2 = relación del discurso del partido con el discurso del Orden Mundial ($0 < \gamma_2 \leq 1$).

A su vez, $\alpha_2 = f(a_2, b_2)$

donde a_2 = contenido discursivo del partido

b_2 = estrategia de interpelación discursiva

$\gamma_2 = f(e_2, f_2)$

donde e_2 = importancia que tiene para el partido el reconocimiento y apoyo internacional,

f_2 = importancia socialmente percibida del apoyo internacional.

Finalmente, se asume la existencia de partidos opositores anti-sistema, quienes al caracterizarse por atacar los componentes del modelo económico prevaleciente, las reglas del sistema político y el comportamiento de los demás partidos, presentan la siguiente estrategia para alcanzar el poder:

Estrategia para alcanzar el Poder = α_3

donde α_3 = interpelación discursiva del partido opositor anti-sistema ($0 < \alpha_3 \leq 1$)

A su vez, $\alpha_3 = f(a_3, b_3)$

donde a_3 = contenido discursivo del partido

b_3 = estrategia de interpelación discursiva

es decir, el partido opositor anti-sistema intentará maximizar sólo su componente discursivo.

Una contienda en la que se enfrentan el partido gobernante y un partido opositor se decidirá de la siguiente forma:

Partido Gobernante Vs Partido Opositor:

$$AY + \alpha_1 + \beta + \gamma_1 \text{ Vs } \alpha_2 + \beta + \gamma_2$$

para que el elector vote por el Partido Gobernante, deberá cumplirse lo siguiente:

$$\Delta Y + \alpha_1 + \beta + \gamma_1 > \alpha_2 + \beta + \gamma_2,$$

Asumiendo que $\gamma_1 - \gamma_2 \sim 0$ (lo que significa que es similar la valoración de ambos partidos por el reconocimiento internacional de su gobierno y la ayuda económica que de ello se derive), y factorizando tenemos:

$$AY + \alpha_1 > \alpha_2 \quad 1$$

y, finalmente

$$\Delta Y > \alpha_2 - \alpha_1 \quad 2$$

La ecuación 1 nos muestra que, para que el partido opositor triunfe, su nivel de interpelación discursiva debe compensar tanto los incrementos en el ingreso que hubieron durante el periodo que gobernó el otro partido como el grado de interpelación discursiva de éste. Así, puesto que ambos respetan el marco institucional del sistema político y valoran la ayuda internacional que puedan tener producto de su apego a las reglas de juego a nivel internacional, el único instrumento de que objetivamente dispone un partido opositor frente al gobernante es su propio discurso, a través del cual no sólo intenta presentarse como una opción distinta sino también pretende minimizar o incluso mostrar como un retroceso los resultados económicos que deja la gestión de éste. De esta misma forma, la ecuación 2 nos muestra que si α_1 es mayor que α_2 (el partido gobernante tienen un mayor grado de interpelación discursiva que el partido opositor), los electores reelegirán al partido de gobierno aun cuando en el periodo en que estuvo en el poder no hubieron incrementos en el ingreso ($\Delta Y = 0$).

De modo similar al anterior, una elección en la que se enfrentan el partido gobernante y un partido opositor anti-sistema se decidirá de la siguiente forma

Partido Gobernante Vs Partido Opositor Anti-sistema:

$$\Delta Y + \alpha_1 + \beta + \gamma_1 \text{ Vs } \alpha_3$$

para que el elector vote por el Partido Gobernante, deberá cumplirse lo siguiente:

$$\Delta Y + \alpha_1 + \beta + \gamma_1 > \alpha_3 \quad 3$$

y finalmente

$$\Delta Y > \alpha_3 - (\alpha_1 + \beta + \gamma_1) \quad 4$$

De la ecuación 3 podemos deducir que, para que el partido opositor anti-sistema gane, su grado de interpelación discursiva debe ser capaz de compensar los incrementos en el ingreso existentes durante el periodo que estuvo en el poder el partido gobernante, el grado de interpelación discursiva de éste, la valoración de los electores por el sistema político y la importancia que tenga para éstos el apoyo y ayuda económica internacional. Para ello, el único instrumento de que dispone es su propio discurso a través del cual intenta mostrarse al electorado como la única opción distinta, por lo que procede a atacar los resultados económicos de la gestión del partido gobernante (y de todos los que anteriormente gobernaron), el desgaste del sistema político y la injerencia externa en el país. De la ecuación 4 se desprende que si $\alpha_1 + \beta + \gamma_1$ es mayor a α_3 (el nivel de interpelación discursiva del partido opositor anti-sistema no compensa el grado de interpelación discursiva del partido gobernante, la valoración del sistema político y de la ayuda internacional), el partido en gobierno será reelecto sin importar que ΔY sea cero.

Finalmente, si los electores tuvieran que elegir solamente entre un partido opositor y un partido opositor anti-sistema, la elección se decidirá de la siguiente forma:

Partido Opositor Vs Partido Opositor Anti-sistema:

$$\alpha_2 + \beta + \gamma_2 \text{ Vs } \alpha_3$$

para que el elector vote por el Partido Opositor, deberá cumplirse lo siguiente:

$$\alpha_2 + \beta + \gamma_2 > \alpha_3$$

Lo que significa que, para que el partido opositor anti-sistema gane, su grado de interpelación discursiva debe compensar el nivel de interpelación discursiva del partido opositor, la valoración por el sistema político y la necesidad socialmente percibida de la importancia de la ayuda internacional. Por ello, dicho partido atacará al sistema político y a la injerencia externa en el país.

Si bien es cierto que en los procesos electores en Bolivia el electorado ha enfrentando varias opciones entre las que escoger (y no sólo dos como asume nuestro modelo al

considerar la forma en que el electorado decide su voto), que los gobiernos no estaban compuesto sólo por un partido sino por una coalición gobernante integrada por varios partidos, y que los partidos opositores mostraban un abanico de opciones muy amplio, el modelo descrito nos ayuda a comprender que el componente discursivo es un elemento muy importante en las estrategias de los partidos para mantener o alcanzar el poder. El resultado final de cada proceso electoral nos dirá en qué medida éstas fueron exitosas.

Por último, y puesto que los partidos no son los únicos actores políticos relevantes ni las elecciones son el único espacio de participación política, debemos señalar las estrategias con las que las organizaciones sociales (sindicatos, movimientos sociales, organizaciones campesinas) actúan en el ámbito político intentando influir en las políticas que el gobierno impulsa. Debe mencionarse, sin embargo, que las estrategias de dichas organizaciones no se circunscriben a los procesos electorales.

$$\text{Estrategia de las organizaciones sociales} = \alpha_4 + \delta + \lambda$$

donde α_4 = interpelación discursiva de la organización social con sus miembros y con el resto de la población ($0 < \alpha_4 \leq 1$),

δ = valoración de la organización social por parte de sus miembros ($0 < \delta \leq 1$),

λ = capacidad de presión de la organización ($0 < \lambda \leq 1$).

$$\text{A su vez, } \alpha_4 = f(a', b')$$

donde a' = contenido discursivo de la organización

b' = estrategia de interpelación discursiva de la organización

$$\delta = f(c', d')$$

donde c' = representatividad de la organización,

d' = desempeño socialmente percibido de la organización

$$\lambda = f(e', f')$$

donde e' = número de miembros de la organización,

f' = estrategia de confrontación.

Puesto que las organizaciones sociales se enfrentan al gobierno, éste desarrolla la siguiente estrategia:

$$\text{Estrategia del gobierno} = \Delta Y' + \alpha + \beta + \theta$$

donde $\Delta Y'$ = Incremento del ingreso de los miembros de la organización

α = interpelación discursiva del gobierno ($0 < \alpha \leq 1$)

β = valoración social del sistema político ($0 < \beta \leq 1$)

θ = capacidad de coerción ($0 < \theta \leq 1$)

$$\Delta \text{ su vez, } \alpha = f(a, b)$$

donde a = contenido discursivo del gobierno

b = estrategia para que el discurso del gobierno llegue a la gente

$$\beta = f(c, d)$$

donde c = representatividad del sistema político,

d = desempeño socialmente percibido de las instituciones políticas

$$\theta = f(\text{control del gobierno sobre la policía y las fuerzas armadas})$$

Esta interacción no se define por el voto ni de los electores ni de las organizaciones sociales, sino por la fuerza de los actores en pugna. Así, para que el gobierno salga victorioso debe ocurrir lo siguiente:

Gobierno Vs Organizaciones Sociales

$$\Delta Y' + \alpha + \beta + \theta > \alpha_4 + \delta + \lambda$$

despejando $\Delta Y'$ tenemos:

$$\Delta Y' > \alpha_4 + \delta + \lambda - (\alpha + \beta + \theta)$$

y agrupando parámetros semejantes:

$$\Delta Y' > (\alpha_4 - \alpha) + (\delta - \beta) + (\lambda - \theta)$$

De lo que se desprende que las organizaciones sociales intentarán maximizar α_4 , δ y λ (construyendo una retórica discursiva incluyente distinta y hasta opuesta al discurso oficial, estableciendo una estructura organizativa representativa en la que sus miembros se sientan más representados que la que ofrece el sistema político, intentando incrementar su número de miembros y renovando su repertorio de confrontación con la finalidad de obtener mayor capacidad de presión para hacer frente a la represión de la policía y las fuerzas armadas) con el objetivo de contrarrestar no sólo α , β y θ , sino también los incrementos en el ingreso que el gobierno destine hacia sus miembros con el fin de desmovilizarlos. Debe destacarse que en la medida en que el discurso de las organizaciones interpele a la población en

general, ésta ganará mayor fuerza. Asimismo, si el grado de interpelación discursiva de la organización no logra contrarrestar el nivel de interpelación del gobierno, si su estructura organizativa es excluyente y sus miembros sienten no los representa mejor que el sistema político, y si su número de miembros disminuye a tal grado que ya no pueden hacer frente a la represión, el gobierno ganará esta confrontación sin siquiera ofrecer mejoras en los ingresos debido a que la organización será muy débil y prescindible al momento de tomar decisiones en materia de políticas públicas.

Una vez concluidos los aspectos teóricos y metodológicos que guiarán este trabajo, el siguiente capítulo se encargará de identificar el discurso del orden mundial a nivel político y económico que imperaba a finales de los setenta y principios de los ochenta para luego identificar los componentes discursivos de los actores políticos en Bolivia en el momento en que se dio origen al proceso de reformas en 1985.

CAPITULO II

EL DISCURSO DEL ORDEN MUNDIAL EN EL PERIODO PREVIO A LA APLICACIÓN DE LAS REFORMAS EN BOLIVIA

En el capítulo anterior se señaló que a pesar de que a nivel internacional no existe una autoridad supra-estatal que mantiene una organización de gobierno y regula las relaciones entre los Estados, éstos no interactúan en condiciones de absoluta libertad debido a que existen reglas e instituciones que, como expresión de una estructura de poder mundial, regulan y limitan su comportamiento. Así, las instituciones internacionales reflejan las relaciones de poder prevalecientes a la vez que intentan estabilizar y perpetuar un orden particular, un orden en el que los intereses del Estado y las clases sociales que se encuentra a la cabeza aparentan coincidir con los de la sociedad mundial. Para ello, se despliega un discurso universalista que pretende legitimar dicho ordenamiento y consolidar de esta forma un orden mundial. Sin embargo, una vez establecidas las instituciones internacionales, el Estado que encabeza el orden mundial no es libre de actuar como le plazca, es decir, no está exento de seguir las reglas que él mismo definió, por lo cual podemos afirmar que las instituciones internacionales no existen como simples epifenómenos de la estructura de poder mundial debido a que proveen maneras de enfrentar los conflictos, de minimizar el uso de la fuerza y de agregar las diversas preferencias que los Estados impulsan con el fin de producir un resultado colectivo.

Por todo ello, se considera que para identificar el discurso del orden mundial prevaleciente a finales de los setenta y principios de los ochenta, se deben revisar los planteamientos en los ámbitos político y económico que realizaban en ese periodo las principales instituciones internacionales que emergieron en la posguerra junto al poderío norteamericano. En particular se hace referencia, en el ámbito económico, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM), organismos que fueron creados en 1944, y en el ámbito político, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA), que fueron creados en 1945 y 1948 respectivamente.

Un componente adicional del discurso del orden mundial que adquiere particular importancia para analizar la dinámica política y económica en Bolivia es el referido al problema de las drogas y el narcotráfico. En realidad, las relaciones internacionales

bolivianas están en gran medida determinadas por la aplicación de políticas destinadas a controlar y disminuir la producción de estupefacientes, en particular de la cocaína y su materia prima, la hoja de coca. Por este motivo, también debemos determinar cómo asumen este problema las instituciones arriba mencionadas, en particular la ONU y la OEA, y qué legislación internacional se desprende de ello.

2.1. El componente político del discurso del Orden Mundial: de los Derechos Humanos a la promoción de la Democracia. La ONU y la OEA a partir de la presidencia de Carter

Cuando Carter asumió la presidencia de los Estados Unidos en 1976 se observó un giro de la política norteamericana hacia América Latina, el cual fue recomendado por dos informes de la Comisión para las Relaciones Estados Unidos-América Latina (Commission on United States-Latin America Relations). Dicha comisión diagnosticaba que las transformaciones que venían ocurriendo en el mundo provocaban la necesidad de un urgente reordenamiento de las relaciones en el hemisferio, de alteraciones en las políticas norteamericanas que reflejen la realidad cambiante de los setenta en la que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente (lo cual habría quedado demostrado por los efectos de la crisis del petróleo). En el entendido de que los supuestos que guiaron la política norteamericana desde la Doctrina Monroe hasta la Alianza para el Progreso habían sido socavados por los cambios ocurridos a nivel internacional, y bajo la premisa de que los Estados Unidos y América Latina se complementan y necesitan mutuamente, la Comisión recomendaba a la nueva administración cambiar su enfoque de aproximación a esta región centrando su atención en mejorar las relaciones con los países del área no debido a que existan peligros ocultos sino debido a que existirían oportunidades latentes, por lo cual la política norteamericana debía ser respetuosa de la soberanía de los Estados y estar menos preocupada con asuntos de seguridad militar (que eran los que habían predominado anteriormente) que con valores e intereses compartidos que lleven a relaciones políticas satisfactorias en un contexto político y económico cambiante a nivel internacional. Según la Comisión, en este periodo, con la excepción de Panamá, no existían ya amenazas inminentes en América Latina a la seguridad nacional de los Estados Unidos y, consecuentemente, el acercamiento a la región que recomendaba se basaba en el

razonamiento de que los países latinoamericanos asumirían una importancia creciente en el futuro debido a que, al ubicarse entre los países más poderosos y prósperos del Tercer Mundo, influenciarían significativamente la forma en la que evolucionaría el orden económico internacional. Su posición como exportadores de productos primarios (incluyendo petróleo) y manufacturas haría que los países de América Latina afecten el futuro del comercio mundial; así también, su potencial agrícola ocasionaría que jueguen un rol central en los problemas mundiales alimentarios, y finalmente, al ser la región económicamente más avanzada del mundo en desarrollo, América Latina se convertiría, según la Comisión, en la fuente de nuevas tecnologías.

El nuevo acercamiento de Estados Unidos a la región debía tener el objetivo de aliviar el sufrimiento de la población a través de, por un lado, ayudar a reducir la represión y la violación a los derechos humanos, problemática que, a pesar de reconocerse el derecho y la responsabilidad de los países de organizar su propio sistema político, sería de interés internacional. Para ello, la Comisión urgía al gobierno norteamericano la ratificación de la *Convención Americana sobre Derechos Humanos* y del *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*, así como también el fortalecimiento de los mecanismos regionales de monitoreo a los derechos humanos, en especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA). Asimismo, se recomendaba evitar la asistencia económica de los Estados Unidos a países cuyos regímenes violaban sistemáticamente los derechos humanos fundamentales.

Por otro lado, al reconocer la Comisión que varios países de la región se encontraban entre los más avanzados del mundo en desarrollo y que los Estados ya no dominaban como antes la economía mundial, señaló que las políticas que fracasasen en proporcionar un crecimiento económico continuado y una integración internacional de estas economías no servirían a los intereses norteamericanos; asimismo, asumió que los países latinoamericanos más pobres requerirían de transferencias continuas y asistencia económica. El objetivo en el ámbito económico era por tanto cerrar la brecha que separaba a Estados Unidos de América Latina, lo cual se lograría, bajo el supuesto de que en el largo plazo la expansión del comercio es muy importante para mejorar el crecimiento, a través de eliminar o, al menos flexibilizar, los límites al comercio, de modificar el esquema de preferencias arancelarias de modo que

permita la integración regional de los países en desarrollo, de reducir y eliminar gradualmente todas las barreras no arancelarias (cuotas y restricción voluntaria de exportaciones), y de flexibilizar la política norteamericana hacia la deuda insertando este problema en un marco amplio de desarrollo que permita a los países de la región obtener nuevos créditos públicos para facilitar importaciones esenciales al tiempo que ejercitan una adecuada disciplina fiscal y restringen el consumo interno.

Bajo estas consideraciones, a nivel político, organismos internacionales como la ONU y la OEA comenzaron a dar importancia, a partir de la segunda mitad de los setenta, al respeto de los Derechos Humanos, lo que provocó un impulso a los valores e ideales democráticos en un contexto en el que la mayoría de los países de América Latina se encontraban gobernados por regímenes autoritarios. A nivel económico, y en condiciones de intervención estatal en los países y de recesión económica mundial, volvieron a tomar importancia el FMI y el BM al promocionar y respaldar ajustes en las economías nacionales al nuevo contexto económico mundial. Estos son los aspectos que en el presente trabajo se tomarán en cuenta para determinar el discurso del orden mundial a fines de los setenta y principios de los ochenta.

2.1.1 La defensa de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas

Desde sus primeros años, las Naciones Unidas han mostrado un compromiso con los derechos humanos, lo cual queda evidenciado con la firma en 1948 de la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Si bien la expansión de la democracia no había recibido la misma atención explícita en las primeras décadas de existencia de esta organización, sí había constituido parte importante de las consideraciones en materia de derechos humanos, tal como lo refleja el Artículo 21 de dicha declaración que establece que

Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos (...) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto (Naciones Unidas, 1948:4).

Con ello se asumió, aunque no de manera totalmente explícita, que la democracia es el sistema de gobierno que garantiza por sí misma el respeto a los Derechos Humanos. Sin embargo, en el contexto de posguerra de proliferación de gobiernos autoritarios alrededor del mundo, de preocupaciones asociadas a la seguridad nacional de los Estados y de apoyo norteamericano a cualquier tipo de estrategia anticomunista, la ONU optó por dejar de lado toda consideración relativa al régimen democrático e impulsar únicamente un ámbito de los derechos humanos: los derechos civiles. De esta manera, sus resoluciones se centraron en temas relacionados con la discriminación racial, el apartheid, la tortura, el genocidio, la esclavitud, la intolerancia religiosa, y los derechos de las mujeres y los niños. Por esta razón, no es sino hasta la década de los setenta que los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en los que se contemplaban tanto los derechos civiles como los políticos, económicos, sociales y culturales, empezaron a entrar en vigor y a ser ratificados por los países miembros. Así, en 1976 entraron en vigor el *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos* y el *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, con los que las Naciones Unidas comenzaron a enfatizar que “todos los derechos humanos y las libertades son indivisibles e interdependientes” y que “debe darse igual atención y consideración a la implementación, promoción y protección tanto de los derechos civiles y políticos, como de los económicos, sociales y culturales”.¹⁴

La ONU, a la vez que empezó a promover estos derechos, reafirmó explícitamente el principio de inadmisibilidad de la injerencia externa y el derecho soberano e inalienable de todos los Estados a elegir su sistema socioeconómico y político conforme a la voluntad de su pueblo, con lo que al tiempo que reconocía la soberanía de los países, empezaba a mostrar su inclinación por la democracia, misma que se hacía más evidente cuando señalaba que “todos los gobiernos tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales”,¹⁵ que deben crearse las condiciones para que todos puedan gozar de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que “la promoción y protección de una categoría de derechos jamás debe eximir o excusar a

¹⁴ Resolución 32/130 de 1977, reafirmada por las resoluciones 33/104 de 1978, 34/46 de 1979, 35/174 de 1980, 36/133 de 1981, 38/124 de 1983 y 39/145 de 1984.

¹⁵ Resolución 34/179 de 1979.

los Estados de la promoción y protección de los demás”.¹⁶ Asimismo, a partir de finales de los setenta las Naciones Unidas comenzaron a presionar para que se establezcan instituciones nacionales y regionales de promoción y protección de los derechos humanos en aquellos países y regiones en los que aun éstas no estaban presentes.

Donde se observa una clara evolución de la posición de la ONU a favor de la democracia es en las resoluciones que emitió sobre la situación de los derechos humanos en Chile. A partir de 1974, todos los años la Asamblea General de las Naciones Unidas se pronunciaba instando a las autoridades chilenas a respetar los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; sin embargo, paulatinamente estas resoluciones empezaron a subir de tono y a exigir mayores avances en esta materia. Así, en 1975 demandaron el respeto en Chile a la libertad de asociación y a la libertad intelectual, y en 1976 y 1977 expresaron su indignación por las constantes y notorias violaciones a los derechos humanos y por la práctica institucionalizada de la tortura, la desaparición de personas y las detenciones y destierros arbitrarios, instando por ello a restablecer los derechos humanos. Es en 1978 cuando la ONU se manifestó a favor de restablecer las instituciones democráticas y salvaguardias constitucionales de que gozaba anteriormente el pueblo chileno, de eliminar las restricciones a las actividades políticas y de garantizar la libertad de expresión, planteamientos que se endurecieron aun más a partir de 1981 debido a la redacción en este país de una nueva Constitución elaborada sin participación popular y que no sólo no garantizaba los derechos humanos sino que permitía injerencias y limitaciones en ellos. Adicionalmente, en 1984 las Naciones Unidas expresaron su indignación por la negativa de las autoridades chilenas a restaurar el orden democrático.

Si bien podría señalarse que estos señalamientos eran únicamente retóricos y que en la práctica la ONU se veía impedida de tomar acciones concretas en contra del gobierno chileno, no debemos subestimar el significado simbólico que tuvo el hecho de que las resoluciones de la Asamblea General hayan comenzado pidiendo simplemente el respeto a derechos humanos básicos (entre los que no se mencionaban siquiera los derechos políticos) y en la década de los ochenta terminen exigiendo el restablecimiento de la democracia. Esta situación evidencia ya un compromiso democrático de parte de las

¹⁶ Resolución 38/124 de 1983.

Naciones Unidas que se reforzará y se hará completamente explícito en años posteriores. De esta forma, el discurso del respeto a los derechos humanos dio origen, inicialmente, a que se ejerzan presiones sobre los gobiernos autoritarios y, posteriormente, a la promoción y defensa de la democracia. La OEA, como se verá, fue mucho más enérgica al respecto.

2.1.2. El papel de la OEA en el respeto a los derechos humanos y el restablecimiento de la democracia

Desde sus inicios la OEA estableció, al menos formalmente, un compromiso con la democracia mucho mayor que la ONU debido a que buscaba proporcionar una estructura institucional para la seguridad colectiva en el continente americano en el contexto de la Guerra Fría. Dicho compromiso, sin embargo, entraba a menudo en tensión con otro de igual importancia: el principio de no intervención. Así, la Carta de Organización de los Estados Americanos señala:

La Organización de los Estados Americanos (...) establece los siguientes propósitos esenciales:

- a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente;
- b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención (...)

La solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa (OEA, 1948:1).

La defensa de los regímenes democráticos desde la OEA se circunscribía únicamente al ámbito retórico debido a que los Estados estaban más interesados en proteger su soberanía de las amenazas externas y del interés de los Estados Unidos de evitar a toda costa, inicialmente, el avance del comunismo y, después, la expansión de la revolución cubana, con lo que el principio de no intervención recibió mucha mayor atención que la promoción de la democracia. Sin embargo, el giro de la política norteamericana hacia América Latina en materia de derechos humanos a partir de la presidencia de Carter provocó el fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cuyo presupuesto se cuadruplicó y su personal se incrementó notablemente), la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a partir de 1978, un mayor monitoreo a los países en esta materia y, posteriormente, la defensa de la democracia.

Debido a la proliferación de gobiernos autoritarios en América Latina, los informes anuales de la CIDH de la década de los setenta lamentaban la situación en lo que toca al respeto y eficaz protección de los derechos humanos, sin embargo, no realizaban consideraciones adicionales acerca del ideal democrático. Es recién a partir de su Informe de 1977 que la CIDH se refiere a la democracia, señalando como una nota positiva la evolución iniciada en algunos países para volver a la democracia representativa. De la misma forma, el Informe de 1978 sostiene que “la organización política de los estados americanos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa es uno de los principios consagrados en la Carta de la Organización que tiene más directa relación con los derechos humanos”, con lo que se empezó a plantear una identificación entre democracia, respeto de los derechos humanos y mejoras a la calidad de vida de la población, que ocasionó que la Comisión demande que “los países en que todavía existen regímenes de facto, adopten medidas para el pronto reestablecimiento de un sistema democrático representativo de gobierno que es el que mejor asegura la plena vigencia de los derechos y libertades fundamentales del hombre”.¹⁷

Los Informes posteriores van a seguir esta línea e incluso van a ser más insistentes y enérgicos, señalando que “el marco democrático es elemento necesario para el establecimiento de una sociedad política donde puedan darse los valores humanos plenos”.¹⁸ Con ello, la OEA aumentó la presión para el restablecimiento de la democracia en varios países de la región considerando inaceptable “el deseo de algunos gobiernos de mantenerse indefinidamente en el poder, de continuar prohibiendo el ejercicio de los derechos políticos y de reprimir arbitrariamente cualquier disenso”,¹⁹ y señalando la urgencia “de restablecer o perfeccionar el sistema democrático de gobierno a fin de que el ejercicio del poder derive de la legítima y libre expresión de la voluntad popular”²⁰ debido a que “las garantías individuales y los derechos políticos constituyen valores en sí mismos y no son susceptibles, por tanto, de menoscabo alguno”.²¹

¹⁷ CIDH, 1978.

¹⁸ CIDH, 1980.

¹⁹ CIDH, 1981.

²⁰ CIDH, 1982.

²¹ CIDH, 1984.

Como se observa, la protección de los derechos humanos provocó que la OEA ejerza una defensa explícita y enérgica de la democracia en la Estados Americanos a partir de finales de los setenta, periodo a partir del cual se empezaron a restablecer los regímenes democráticos en la región. Si bien no puede afirmarse que el retorno de la democracia se produjo gracias a las presiones externas que se hicieron desde la ONU o la OEA, o gracias a la nueva política hacia América Latina del gobierno de Carter, no se puede negar que toda esta retórica tuvo un impacto en las autoridades de los países en sentido de hacer notar que existía un costo internacional por la represión y un beneficio por el respeto a los derechos humanos. Asimismo, al fortalecerse las instituciones y normas sobre derechos humanos, el monitoreo a los gobiernos aumentó y disminuyeron los apoyos externos a los regímenes autoritarios. De esta forma, a principios de los ochenta la democracia ya era un tema dominante en el discurso del orden mundial, y por tanto un asunto que a nivel político debían considerar imprescindiblemente los gobiernos latinoamericanos.

Antes de dar por finalizado este aspecto del discurso del orden mundial cabría preguntar qué concepción de democracia albergaba el mismo. Para dar una respuesta apropiada, no he encontrado mejor ejemplo que el que ofrecen Crozier, Huntington y Watanuki (1975) en el *Informe sobre la Gobernabilidad de las Democracias para la Comisión Trilateral*, en la que señalan que el sufragio universal, la realización de elecciones regulares, la competencia de partidos y la libertad de expresión y asociación están entre los elementos que han desarrollado y consolidado la democracia en los países trilaterales. Esta visión claramente procedimental de la democracia es la que va a dominar en años posteriores las evaluaciones sobre los avances democráticos en los países latinoamericanos.

2.2 El Componente económico del discurso del Orden Mundial y el rol del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial

Buscando evitar en el futuro los errores que desembocaron en la Gran Depresión de los treinta, y con el fin de sentar las bases de un nuevo ordenamiento económico a nivel internacional en el que se aceptaba la necesidad de una supervisión internacional de los desequilibrios de balanza de pagos, de mecanismos que promovieran la estabilidad cambiaria y de nuevos instrumentos que facilitaran los flujos internacionales de capital, la

Conferencia de Bretton Woods de 1944 fue el escenario en el que surgieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que luego se constituiría en el Banco Mundial, instituciones que se instalaron en la ciudad de Washington como reflejo del nuevo equilibrio del poder mundial.

A nivel económico, el periodo de posguerra se caracterizó por un crecimiento sin precedentes del comercio internacional, de los flujos de capital y, consecuentemente, de la interdependencia económica global, lo que provocó nuevas dificultades cuando la economía mundial se vio confrontada con un nuevo periodo recesivo acompañado de fuertes presiones inflacionarias que, a su vez, estuvieron asociadas con aumentos de los precios del petróleo en la década de los setenta, crisis que tuvo efectos desastrosos para las economías latinoamericanas. En este contexto, el FMI y el BM replantearon sus roles y comenzaron a promover reformas económicas basadas en planteamientos cuyo análisis es importante para determinar el componente económico del discurso del orden mundial en este periodo.

2.2.1 Condiciones previas a la crisis de los ochenta en América Latina

Es historia conocida que los fuertes aumentos de los precios del petróleo en 1973-74 y 1979-80 produjeron considerables superávits en cuenta corriente en todos los países miembros de la OPEP. Según el Banco Mundial (1985) aproximadamente el 40% del superávit acumulado en la OPEP se dirigió a los Estados Unidos y el Reino Unido, países que cuentan con mercados financieros amplios. También se habrían colocado sumas considerables en Alemania, Francia, Japón y Suiza, produciéndose de esta forma una rápida expansión del mercado de eurodólares que ocasionó que los bancos internacionales presten este nuevo flujo de depósitos a países del mundo en desarrollo, los que, teniendo como incentivo las bajas tasas de interés ofrecidas, incrementaron el monto de su deuda externa.

Al incrementarse súbitamente las tasas de interés mundiales como consecuencia de los programas anti-inflacionarios implementados en los países desarrollados y al deteriorarse los precios de las materias primas, principal fuente de ingresos por exportación de los países en desarrollo, los Estados latinoamericanos empezaron a experimentar cada vez mayores dificultades para cumplir con el creciente servicio de la deuda externa, llegando a

desatarse una crisis económica y financiera que ocasionó que el desempeño de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial adquiriera especial importancia. Por ello, es importante que, partiendo de una breve exposición de sus objetivos, analicemos la labor que han cumplido dichas instituciones en el contexto de la crisis y sus planteamientos fundamentales para salir de ella.

2.2.2 El Fondo Monetario Internacional

La principal responsabilidad con la que nació el FMI fue el ajuste ante desbalances en las cuentas externas de sus Estados miembros, situación ante la cual debía suministrar créditos a corto plazo a aquellos países que presentaban problemas temporales de balanza de pagos.²² Consecuente con ello, el papel tradicional del Fondo en América Latina antes de la crisis de la deuda fue proporcionar financiamiento oficial para apoyar programas de estabilización destinados a solucionar problemas de balanzas de pagos (SELA, 1986). Sin embargo, la ruptura de los mercados financieros internacionales en 1982 hizo que este organismo asumiera un nuevo papel en la región: preparar los procesos de renegociación de la deuda externa de los diferentes países con los bancos comerciales acreedores. Así, el FMI asumió el liderazgo en la estabilización de los mercados internacionales de capital, en la promoción de programas de ajuste en los países latinoamericanos endeudados, y en la coordinación y suministro de créditos adicionales por parte de la banca acreedora y de algunos flujos oficiales para sustentar dichos programas. Con ello, en lugar de tratar de solucionar los problemas de balanza de pagos de un país en particular, el FMI empezó a lidiar con el proceso de ajuste de la región en su conjunto.

La certificación o aval que otorgaba el FMI hizo que casi todos los países con problemas de deuda buscaran su asistencia para elaborar y ayudar a financiar sus programas de ajuste. Es decir, debido a que en función de su visto bueno sobre el comportamiento macroeconómico de los países se comenzó a mover un universo muy amplio de flujos financieros públicos y privados, y dada la necesidad de los países de obtener un acuerdo con la banca privada

²² Adicionalmente, el FMI debía promover la cooperación monetaria internacional, ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos para las operaciones en cuenta corriente, procurar la estabilidad de las relaciones cambiarias, eliminar las restricciones cambiarias que obstaculizan el crecimiento equilibrado del comercio internacional, y facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional.

internacional para el otorgamiento de nuevos préstamos, la importancia del Fondo trascendió sus operaciones de préstamo.

2.2.2.1 El planteamiento del Fondo Monetario Internacional de la complementariedad entre el Ajuste y el crecimiento económico

Para el Fondo Monetario Internacional la necesidad para el ajuste emerge de una variedad de razones. Por ejemplo, podría originarse cuando la demanda total de recursos dentro de un país excede a la suma de la totalidad de recursos disponibles internamente más aquellos que pueden ser obtenidos del exterior en términos sostenibles. Asimismo, las ineficiencias en el uso de los recursos disponibles u otras distorsiones que constriñen el nivel o la tasa de expansión de la oferta agregada y mantienen a la economía funcionando debajo de su capacidad y con tasas de crecimiento inferiores a su verdadero potencial manifiestan la necesidad de un ajuste en la economía de un país. Otro aspecto a considerar es la excesiva acumulación de deuda y de obligaciones externas que ocasionan la virtual interrupción de los flujos de capital, generando severas dificultades para el crecimiento económico. Todos estos factores, al ser el denominador común en las economías latinoamericanas a inicios de los ochenta, debían ser corregidos, en la perspectiva del FMI, a través de un proceso de ajuste.

Según el Fondo Monetario Internacional (1986), el objetivo de los programas de ajuste es restaurar el balance externo de los países y establecer un ambiente propicio para el crecimiento, tarea que de ser postergada ocasionaría no sólo la retardación de éste, sino también severos estragos económicos. Debido a que la expansión insostenible de la demanda agregada y del gasto público serían los principales factores causantes de la crisis, el FMI planteó que los programas de ajuste debían principalmente reducir la tasa de ~~crecimiento de la demanda, recortar el gasto público e incrementar los recursos fiscales.~~ Asimismo, debían contemplarse ajustes en los agregados macroeconómicos y la remoción de las barreras a la oferta (en especial a las exportaciones). Estos ajustes debían realizarse teniendo presente que una función clave en el manejo económico es mantener el crecimiento de la demanda agregada en consonancia con las perspectivas de crecimiento de la capacidad productiva de la economía y con su capacidad de endeudamiento.

Otro aspecto a considerar según Manuel Guitián (1987), quien fuera Subdirector del Departamento de Relaciones Comerciales del Fondo Monetario Internacional, es que para poder alcanzar los objetivos de crecimiento y de viabilidad de la balanza de pagos, sería necesaria una formulación de mediano plazo en las políticas económicas. Para ello, se requeriría que la estabilidad económica sea alcanzada en un esfuerzo sostenido de ajuste en el que la libre determinación de precios es crucial en la perspectiva de otorgar señales que guíen las decisiones de inversión hacia el uso eficiente de los recursos. Así también, se afirmó que para alcanzar el objetivo de restablecer el crecimiento, las políticas de ajuste debían ser respaldadas por la apertura de la economía y la eliminación de restricciones y controles de cualquier tipo. La liberalización del comercio, en particular, es un componente fundamental de estos programas.

The liberalization of trade and exchange restrictions (...) constitutes a necessary complement to policy measures in the macroeconomic and pricing spheres for the attainment of sustained growth and balance of payment viability. From a logical perspective, an adequate adjustment effort would include among its various aims the elimination of restrictions maintained for balance of payments reasons because absence of the need for such restrictions is one of the characteristics of external viability (Guitián, 1987: 81).

Otro aspecto de la política fiscal que el FMI enfatizó reformar fue el referido a las transferencias que los Estados realizaban a las empresas públicas deficitarias, mismas que se habían convertido en un importante escollo financiero para la economía y cuya existencia tendría consecuencias distributivas adversas. De la misma forma, el Fondo recomendó reducir el gasto utilizado en la protección de las industrias nacionales.

En el ámbito monetario, el establecimiento de adecuadas tasas de interés que logren la movilización del ahorro hacia la inversión son, en la perspectiva del FMI, de suma importancia para asegurar la eficiencia en el destino y uso de los recursos financieros, puesto que “sobran los ejemplos para demostrar que cuando las tasas de interés son mantenidas en niveles bajos, e incluso negativos en términos reales, se afecta adversamente a la inversión y al crecimiento” (Guitián, 1987).

Respecto al tipo de cambio, el Fondo afirmó que los desbalances persistentes en una economía son clara consecuencia de movimientos de precios domésticos ampliamente

divergentes respecto a aquellos que prevalecen en el exterior, lo que generaría distorsiones en la localización de los recursos dañando así a la competitividad y perjudicando el crecimiento y el desempeño de la balanza de pagos. Por ello, un ajuste y un manejo flexible en el tipo de cambio serían necesarios para restaurar la competitividad y estabilizar la economía, haciendo que los precios, los salarios y el consumo alcancen niveles realistas.

Adicionalmente, el FMI consideró que, teniendo en cuenta la estrategia del ajuste, sería necesario un conjunto de medidas complementarias en los siguientes sectores de la economía: el sistema financiero, donde una reforma garantizaría la eficiencia en la movilización del ahorro hacia la inversión; el mercado de trabajo, para tomar realistas las legislaciones laborales; y los mercados de capital. Muchas de las tareas por realizar en estas áreas requerirían de la estrecha colaboración del Banco Mundial.

Bajo estas consideraciones, el FMI (1986) señala que entre los patrones comunes que se encuentran en los programas de ajuste promovidos por esta institución a nivel mundial antes de 1986 están la limitación de la expansión monetaria (en todos ellos), la aplicación de políticas para liberalizar y reformar el comercio exterior (en 55 por ciento de los mismos), la adopción de medidas para restringir el gasto de gobierno (en el 91 por ciento de los casos) que, a su vez, significaron el establecimiento de límites al aumento de los salarios (en el 63 por ciento de los programas) y a las transferencias y subsidios (en el 61 por ciento). Asimismo, sostiene que se ejercieron medidas para mejorar el ingreso público a través principalmente de impuestos sobre bienes y servicios domésticos (en el 73 por ciento de las ocasiones).

2.2.3 El Banco Mundial

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (actualmente Banco Mundial) fue creado teniendo como misión apoyar, mediante instrumentos crediticios, los esfuerzos de reconstrucción y desarrollo de los países miembros afectados por las guerras. De esta forma, su misión se diferenciaba del FMI en el hecho de que el BM debía promover el crecimiento y el desarrollo económico a largo plazo.

La severa amenaza sobre la estabilidad del sistema financiero en los setenta y ochenta obligó al Banco Mundial a volcar su atención hacia los países fuertemente endeudados con el afán de reestablecer su crecimiento y solvencia. De esta forma, en 1980 surgen los préstamos para ajuste estructural, global y sectorial, con la finalidad de superar problemas de fondo en los ámbitos macroeconómico, sectorial e institucional. A tal efecto, estos programas procuraron reformas estructurales y el uso más eficiente de los recursos con el objetivo de fortalecer la balanza de pagos del país que acudía al financiamiento.

2.2.3.1 El Banco Mundial y el ajuste al contexto internacional

A raíz de la crisis económica mundial de los setenta, el Banco Mundial también comenzó a revisar las estrategias de desarrollo asumidas en el mundo entero, poniendo especial énfasis en aquellas economías fuertemente endeudadas. Es así que surgió el *Informe sobre el Desarrollo Mundial*, publicación anual que a partir de 1978 trata una diversidad de temas relacionados con el desarrollo económico y que de alguna manera refleja la posición del BM sobre las medidas que se deben tomar al respecto en el mundo entero.

Desde las primeras publicaciones del Informe sobre el Desarrollo Mundial, el BM toca el tema del ajuste como estrategia para enfrentar la crisis. Es así que el Informe de 1981 manifiesta que los países en desarrollo deben ajustarse a las nuevas circunstancias mundiales, para lo cual se requeriría de cambios duraderos en la política económica, es decir, sería necesario llevar a cabo reformas estructurales en procura de un desarrollo de largo plazo, intentando minimizar el sacrificio en términos de crecimiento de corto plazo. A su vez, se advertía que muchos de estos ajustes necesitarían tiempo para madurar, motivo por el que su continuidad resultaba vital, siendo inevitable que la economía pase por un periodo de transición que no estaría exento de dificultades. Este proceso de ajuste requeriría de políticas que irían a reducir los déficits en cuenta corriente a niveles sostenibles a través del incremento de las exportaciones. Así también, y en virtud de las necesidades financieras de estos países, debían realizarse esfuerzos para atraer capital extranjero.

En cuanto al comercio internacional, se sostenía que un ambiente comercial abierto y en expansión es central para la salud de la economía mundial, siendo el proteccionismo un ineficiente mecanismo de transferir ingresos. Dicho argumento era, en la perspectiva del

Banco Mundial, válido para fomentar el crecimiento económico tanto en los países industriales como en los países en desarrollo.

Countries that have continued in place or adopted outward-oriented policies have been the most successful in adjusting to external shocks without excessive recourse to foreign borrowing or severe cutbacks of rates of economic growth. The flexibility that an outward orientation provides has outweighed the vulnerability that it risks (World Bank, 1981: 26).

Asimismo, países como los del sudeste asiático son destacados por haber alcanzado importantes tasas de crecimiento económico a través de reemplazar políticas sustitutivas de importaciones con políticas comerciales que favorecen el crecimiento de las exportaciones en general y de las exportaciones de manufacturas en particular. Debido a esto, el BM planteó la urgencia de mantener un sistema comercial mundial abierto.

Al afirmar que el comercio juega un rol crucial tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo, motivo por el cual la reducción de las barreras comerciales son vitales para ambos grupos de países, el Banco Mundial sostuvo que los países deberían escoger entre la siguientes alternativas: crecer o proteger, es decir, adoptar una postura orientada hacia el exterior produciendo bienes en los cuáles se tiene ventaja comparativa y permitiendo a las importaciones competir, o reducir los vínculos comerciales con el resto del mundo e impulsar un mayor grado de autosuficiencia. El BM afirmó que la experiencia señalaba que aquellos Estados que optaron por la primera opción sólo experimentaron una interrupción temporal en su crecimiento y, en comparación con el grupo de países que prefirieron la segunda alternativa, tuvieron un mejor desempeño en expandir su penetración en mercados de exportación, en sustituir importaciones y en aumentar sus niveles de ahorro, lo que permitió que reduzcan su dependencia respecto al financiamiento externo.

Outward-oriented economies have a higher proportion of trade in GNP than countries following an inward-looking strategy. External shocks inflicted upon them a larger loss in relation to GNP. But their economic performance is less damaged by external shocks and ultimately is less dependent on foreign finance. They may have to accept some temporary loss of growth momentum during adjustment while they boost exports, restrain imports and attempt to control imported inflation. But growth can be expected to pick up, because their form of adjustment need not usually involve deflationary cuts for any length of time. This is perhaps the most valuable

lesson of the adjustment experience of semi-industrial and primary producing countries (World Bank, 1981: 75).

Las posteriores ediciones del Informe sobre el Desarrollo Mundial de la década del ochenta mantuvieron la misma postura respecto a las medidas que debían ser adoptadas en los países con el fin de reiniciar el proceso de crecimiento. Así, el Informe de 1982 afirmó que las expectativas para el crecimiento podrían ser ampliamente acrecentadas si son minimizadas las restricciones al comercio y al flujo de capitales. Al mismo tiempo, y en vista del aumento de la inflación en diversos países, el Banco Mundial manifestó que la inflación es controlada de mejor forma en economías abiertas.

El Informe de 1983 reiteró que los países en desarrollo debían continuar esforzándose en ajustar sus economías a las nuevas circunstancias internacionales y así recobrar la confianza de los organismos de crédito. Así también, planteó que los gobiernos necesitaban disminuir el nivel de distorsión de sus precios internos asegurando que éstos realmente reflejen la escasez relativa de los distintos bienes y servicios. Por otro lado, dicho Informe enfatizó, al igual que los anteriores, la importancia del comercio mundial para el bienestar de la economía de todos los países.

Foreign trade enables developing countries to specialize in production, exploit economies of scale, and increase foreign exchange earnings needed to pay for imports. A good export record also strengthens creditworthiness and permits greater access to private loans (World Bank, 1983: 29).

En este Informe se incorporó con fuerza la noción de “eficiencia”, misma que, según el Banco Mundial, debía ser impulsada por los gobiernos en los sectores privado y público. En aras de la eficiencia económica se señaló que los gobiernos debían jugar un rol central en asegurar un entorno macroeconómico estable, un sistema de incentivos que impulse el uso óptimo de los recursos y un patrón de crecimiento por el cual los beneficios sean ampliamente compartidos. De esta forma, la eficiencia empezó a ser el principal criterio para juzgar la conducción de la economía. ¿Cuándo la eficiencia se ve seriamente afectada? Según este Informe la expansión del sector público en muchos países había generado serias ineficiencias debido al intento de los gobiernos por controlar la economía en demasía, perjudicando de esta manera a la eficiencia por el hecho de que precios clave (como el tipo de cambio, las tasas de interés y los precios del petróleo) fueron distorsionados. Por estas

razones, tanto el tamaño del sector público como el rol del Estado (y en especial la existencia de las empresas públicas) empezaron a ser cuestionados, sugiriéndose que las intervenciones estatales sean selectivas para no resultar en pérdidas de eficiencia debido a las presiones políticas y sociales.

El Informe sobre el Desarrollo Mundial 1984, preocupado en mantener los programas de ajuste iniciados en varios países y tomando en cuenta que la inflación afligía a gran parte del mundo en desarrollo, sostuvo que la rigidez en los mercados laborales, con la consecuente presión al alza sobre los salarios reales, y el crecimiento del gasto público y del déficit fiscal, se encontraban en las raíces mismas de los problemas de la inflación, el desempleo y el bajo crecimiento. Estas rigideces salariales, a su vez, habrían ocasionado que las empresas privadas, al ver disminuidos sus beneficios, presionen a los gobiernos por mayores medidas proteccionistas que sólo dañaban la economía de estos países al mantener industrias poco productivas y con limitada capacidad de competencia.

Según este Informe, mayor comercio y menor protección permiten que los países en desarrollo se desarrollen eficientemente siguiendo la línea de sus propias ventajas comparativas. Por esta razón, políticas orientadas al exterior serían preferibles a aquellas orientadas al interior que enfatizan la sustitución de importaciones debido a que sus beneficios se traducen en mayores tasas de crecimiento económico en el largo plazo y una mayor capacidad de adaptación a los shocks externos, lo que a su vez llevaría a incrementos en la inversión, en el producto y en el empleo. En consecuencia, cualquier acción dirigida a reducir el comercio iría en perjuicio de todos los países, tanto en desarrollo como desarrollados.

El Banco Mundial, al entender que el comercio es el motor del crecimiento y condición *sine qua non* para solucionar la crisis, continuó alentando en este Informe el ajuste interno de las economías, ajuste que debía dirigirse principalmente a reducir los gastos en función de restaurar el equilibrio de la balanza de pagos. Por ello afirmó que en muchos países el ajuste debía empezar en el sector público, sector que habría promovido el endeudamiento y la inflación debido a la necesidad de financiar sus crecientes déficits, con lo que se planteó

que la principal labor de los gobiernos para lograr un crecimiento sostenido sería alcanzar y mantener la estabilidad macroeconómica.

2.3 Las drogas y el narcotráfico en el discurso del orden mundial

La preocupación por el problema de las drogas no se remite a las últimas décadas puesto que ya en 1958 el Consejo Económico y Social de la ONU decidió realizar una conferencia plenipotenciaria con el fin de adoptar una convención única sobre drogas narcóticas que reemplace y reduzca el número de tratados internacionales en la materia y establezca previsiones para el control de la producción de materias primas de narcóticos. De esta manera se firmó en 1961 la *Convención Única sobre Estupefacientes*, que asumió que las drogas constituyen un serio mal para el individuo y un peligro económico y social para la humanidad que demanda una acción coordinada y universal contra su consumo,²³ en 1971 se estableció el *Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas* y en 1972 se firmó el *Protocolo de modificación a la Convención Única sobre Estupefacientes*. Estos tres acuerdos se constituyeron en los principales instrumentos de las Naciones Unidas en la lucha contra las drogas y el narcotráfico, mismos que, sin embargo, recién comenzaron a ser aplicados a partir de mediados de la década del setenta debido a que, si bien la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 entró en vigor en 1964, no se lograron demasiados avances dado que se necesitaba de instrumentos complementarios para la lucha contra las drogas, los cuales llegaron al entrar en vigor el Protocolo de modificación a la Convención Única sobre Estupefacientes, en 1975, y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, en 1976. En consecuencia, se puede afirmar que sólo desde la segunda mitad de los setenta comenzó la lucha internacional contra el tráfico de drogas.

En el marco de estos acuerdos y convenios que constituyen el cuerpo principal de la legislación internacional en materia de drogas, la Asamblea General de la ONU comenzó a demandar la coordinación de esfuerzos a nivel internacional para luchar contra “este mal que ha trascendido las fronteras nacionales y afecta el bienestar y la salud de toda la humanidad”,²⁴ reclamando el involucramiento de los gobiernos de países que son

²³ La Convención Única sobre estupefaciente de 1961 ubica no sólo a la cocaína, sino también a la hoja de coca en la lista de drogas sujetas a control.

²⁴ ONU, 1981.

productores, tránsito y consumidores de droga. Sin embargo, reconociendo que, por carecer de medios técnicos y financieros, algunos países en desarrollo no podían contribuir a la fiscalización de estupefacientes, instó a la comunidad internacional a proporcionar asistencia técnica y financiera a los mismos. Así también, y asumiendo que en muchas regiones de los países en desarrollo debía iniciarse la sustitución de una economía tradicionalmente orientada hacia los estupefacientes por otras actividades agrícolas y económicas, demandó que esta transformación se realice de tal forma que cause el mínimo de dificultades a las poblaciones interesadas y que se ayude a crear nuevas fuentes adecuadas de ingreso y medios de vida para ellas.²⁵

Debe señalarse que el tráfico ilícito de drogas no fue asumido únicamente como un problema de salud a nivel internacional, sino también como una amenaza para el desarrollo económico y social de los países debido al crimen y la corrupción resultantes y al aumento considerable de organizaciones delictivas. La existencia de vínculos entre el tráfico de drogas y la delincuencia organizada, la adquisición ilícita de armas de fuego, las violaciones al control cambiario, los delitos aduaneros y otras formas de criminalidad, constituían, según la ONU, un problema de seguridad nacional para muchos Estados.²⁶ Así, la producción ilegal y el tráfico de estupefacientes generarían problemas económicos, políticos, sociales y médicos para todos los países involucrados, además de constituir una seria amenaza para la estabilidad de las instituciones democráticas.²⁷ Con este planteamiento, las Naciones Unidas prácticamente asumieron que la lucha contra el narcotráfico era una lucha por la democracia.

Bajo este mismo razonamiento, en abril de 1986 la Asamblea General de la OEA convocó a los ministros de justicia del hemisferio a la Primera Conferencia Interamericana Especializada sobre Narcotráfico, que se celebró en Río de Janeiro. En la conferencia, se llegó al consenso de que el enorme incremento del tráfico y el abuso de drogas ilícitas observado desde fines de los años setenta no solo se había convertido en una importante amenaza para la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino que representaba un problema de seguridad para todo el hemisferio, por lo que se aprobó el *Programa Interamericano de*

²⁵ ONU, 1978.

²⁶ ONU, 1982.

²⁷ ONU, 1985.

Acción de Río de Janeiro contra el Consumo, la Producción y el Tráfico Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, y se recomendó la creación de la *Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas* (CICAD), misma que fue establecida en noviembre de ese año como organismo técnico de la institución.

La disminución de la amenaza comunista en la región y la creciente importancia que asumió el problema de las drogas permitieron que el narcotráfico tenga un lugar de mayor relevancia en la agenda de los Estados Unidos, ante lo cual el gobierno norteamericano puso en marcha una política antinarcóticos que ha tenido gran repercusión para algunos países de América Latina. La creación en 1973 de la DEA (Drug Enforcement Administration) propició la apertura de oficinas dependientes de esta organización en muchos países latinoamericanos y el involucramiento directo del gobierno norteamericano en la lucha contra tráfico ilícito de drogas en varios de estos Estados a través de ayuda económica, asistencia técnica y entrenamiento. En el ámbito diplomático, la medida más importante ha sido la aprobación en 1986 de una *Ley de Certificación* por la que el presidente de Estados Unidos envía anualmente un informe al Congreso señalando los progresos o retrocesos de los países en materia de lucha antidrogas, y en virtud del cual se certifica o decertifica a dichos países. La decertificación implica la reducción del 50 por ciento de la ayuda exterior, la congelación de la ayuda norteamericana (excepto en aspectos contra-narcóticos y humanitarios) y su oposición a préstamos de cualquier organismo internacional.

Como se muestra, en la década de los ochenta la lucha contra las drogas no se limitó al ámbito retórico, sino que fue un aspecto que los países involucrados debían considerar para mantener sus flujos económicos, su relacionamiento externo e incluso el reconocimiento internacional a sus gobiernos. Así, el problema del narcotráfico es un ámbito adicional presente en el discurso del orden mundial que junto a la democratización y la reforma económica (vistos anteriormente) marcan el camino a seguir por los países a partir de los ochenta.

CAPITULO III

ANTECEDENTES AL RESTABLECIMIENTO DEMOCRÁTICO Y AL NEOLIBERALISMO EN BOLIVIA Y EXPOSICIÓN DEL COMPONENTE DISCURSIVO DE LOS ACTORES POLÍTICOS RELEVANTES EN DICHO PERIODO²⁸

El presente capítulo expondrá los antecedentes económicos, políticos y discursivos al periodo de reformas iniciado en 1985, lo que significa analizar las transformaciones introducidas por la Revolución Nacional de 1952, acontecimiento que implicó un cambio en el modelo de acumulación, el reconocimiento de la ciudadanía a las mayorías nacionales y una reorganización de las estructuras del Estado prevalecientes durante más de un siglo de vida republicana.

3.1 La Revolución de 1952 y la Construcción Nacional

Producto del cuestionamiento de que fue objeto el poder oligárquico (identificado como la rosca minero-feudal) en la posguerra del Chaco²⁹ y de la influencia que comenzaron a ejercer las revoluciones rusa y mexicana, distintos sectores de la sociedad empezaron a organizarse políticamente y a articular un conjunto de ideas nacionalistas, anti-imperialistas y, en algunos casos, socialistas, lo cual posibilitó la emergencia de diversos partidos que se disputarían la vanguardia del movimiento popular. Así, en 1934 fue fundado el Partido Obrero Revolucionario (POR) de filiación trotskista, en 1937 se organizó la Falange Socialista Boliviana (FSB) bajo la evidente influencia de la falange española, en 1940 surgió el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR) de tendencia stalinista, y en 1941 se constituyó el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que desarrolló una propuesta policlasista. De forma paralela a la aparición de estas organizaciones partidarias comenzaron a establecerse los primeros sindicatos opositores al Estado Oligárquico, el más importante de los cuáles, dada la importancia del sector minero, fue la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) fundada en 1943.

²⁸ De aquí en adelante se asumirá que los actores políticos relevantes en Bolivia son los trabajadores, los campesinos y los partidos políticos. Los dos primeros se hallan organizados en torno a organizaciones sindicales con suficiente importancia como para asumir poder real en las decisiones de cualquier gobierno. El componente discursivo de estos actores es el que se analizará a lo largo de este trabajo.

²⁹ La Guerra del Chaco enfrentó a Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935.

El MNR fue sin dudas el partido que mayor apoyo popular atrajo debido a su propuesta nacionalista y policlasista, lo que le significó alzarse con el triunfo en las elecciones de 1951 a pesar de que prevalecía un sistema electoral discriminatorio en el que solamente podían participar los sectores masculinos alfabetos con propiedades y rentas de probada solvencia. El desconocimiento de dicha victoria y de la elección misma por parte del gobierno provocó la Revolución de abril de 1952 en la que el alzamiento armado popular, civil y obrero derrotó al ejército y permitió la asunción al poder de los candidatos vencedores del año anterior, Víctor Paz Estenssoro como presidente y Hernán Siles Zuazo como vicepresidente.

La Revolución Nacional fue llevada a cabo por una alianza plurisocial dirigida por el MNR en la que confluyeron múltiples sectores de la sociedad boliviana motivados por diversas metas. Los sectores campesinos apoyaron el proceso revolucionario demandando una reforma agraria y la eliminación del sistema de haciendas y el pongueaje³⁰, las clases medias y sectores profesionales pretendían una ampliación del poder para integrarse en él, los obreros mineros demandaban principalmente, ya que eran el sector más activo políticamente, el reconocimiento del derecho a votar, la nacionalización de las minas y una importante participación en el gobierno, y distintos grupos de la izquierda marxista veían en el proceso revolucionario la oportunidad para instaurar el socialismo en Bolivia. En consecuencia, la revolución introdujo una serie de reformas que modificaron las bases mismas de la sociedad.

Entre 1952 y 1953 el país atravesó por una etapa de profundas transformaciones que tuvieron inicio en medidas como la nacionalización de las minas, la reforma agraria y el voto universal. Las dos primeras respondían a la necesidad de dinamizar la economía y promover la acumulación capitalista desde el Estado puesto que las haciendas y el enclave minero obstruían la generación de un excedente económico que tenga efectos multiplicadores e impulse el crecimiento. Para ello se crearon empresas estatales entre las

³⁰ El sistema de haciendas consistía en una organización de la producción muy similar a la prevaleciente en Europa durante el feudalismo, en la que los terratenientes propietarios de las haciendas otorgaban una parcela a alguna familia para que ésta produzca en ella y entregue parte de lo producido al hacendado. El pongueaje era el servicio gratuito, generalmente humillante, que algunos miembros de esas familias debían realizar en la casa del patrón.

cuales las más importantes fueron la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), mismas que controlaban el grueso del ingreso nacional debido a la concentración de las exportaciones en minerales e hidrocarburos. El voto universal, además de garantizar futuras victorias electorales al MNR, dio fin a más de cien años de desconocimiento ciudadano de las mayorías mestizas e indígenas del país. De esta manera, la Revolución significó la desaparición del bloque de poder oligárquico, la modernización económica, el reconocimiento de los derechos ciudadanos de la gran mayoría de la población y, por primera vez en la historia, el intento de construcción de una identidad nacional. No obstante, debe mencionarse que el proyecto nacionalista de construcción de una identidad nacional fue cultural y políticamente homogeneizador y, por ende, profundamente autoritario; basta mencionar que la reforma educativa llevada a cabo sólo contemplaba la enseñanza en el idioma castellano, desconociendo la importancia del resto de las lenguas originarias.

A nivel político, el MNR buscó ejercer un control corporativo de la sociedad a través de la Central Obrera Boliviana (COB), organización que cobijaba a todos los trabajadores y gozaba de monopolio sindical, y de los sindicatos campesinos, para lo cual estableció el co-gobierno con la COB mediante el nombramiento de varios ministros provenientes de dicha entidad sindical y de la co-gestión obrera en las empresas públicas. En realidad, la Revolución Nacional creó un sistema político en el cual, dado que no existían partidos que pudieran disputarle al MNR el poder, la instancia de mediación más importante entre la sociedad y el Estado era la COB. Sin embargo, no podría considerarse que la Central Obrera era una mera extensión del poder del MNR, puesto que en ella confluían grupos de diversas tendencias de izquierda que buscaban darle distintos sentidos a la revolución. Por tal motivo se procederá a exponer el pensamiento político de esta organización y el rol que jugó en el periodo anterior a las reformas de 1985.

3.2 Pensamiento y Acción de la COB en el Periodo Posrevolucionario

La Central Obrera Boliviana desde su fundación en 1952 no se asumió como un mero sindicato sino como un órgano de poder en busca de la supresión de toda explotación del hombre por el hombre y del establecimiento de una sociedad socialista a través de la

revolución nacional y popular, primero, y de la revolución social, después. Para ello, se propuso “armar políticamente al proletariado y a sus aliados, el campesinado y la nueva clase media, con la doctrina marxista científica y revolucionaria que les de la conciencia de su explotación y su fuerza”.³¹ Debido a su apego a “la línea tradicional del marxismo revolucionario”,³² la COB planteó la acción conjunta de los explotados del país (obreros, campesinos y clase media) para construir el socialismo bajo el liderazgo de la clase proletaria, la que, a pesar de ser la menos numerosa de la población trabajadora, tendría, en virtud de su conciencia de clase y de su peso específico en la economía nacional,³³ una capacidad revolucionaria y una influencia política decisiva.

En la caracterización que realiza la Central Obrera de los otros componentes del movimiento popular, se asume que los campesinos, si bien constituyen la amplia mayoría nacional, no han tenido notoria influencia en la política boliviana debido al arraso del país, a la insuficiencia del desarrollo agrario y a sus “características de clase”, habiéndose mantenido al margen de toda actividad política sistemáticamente organizada. La clase media urbana, por su parte, sería el sector mayoritario de la población que vive en las ciudades; dentro de este sector la COB ubica a dos grupos: i) empleados, profesionales y técnicos a sueldo, quienes o siguen a la burguesía o marchan a la zaga del proletariado; ii) artesanos, pequeños y medianos propietarios urbanos, industriales y comerciales, los que al tener en la propiedad de sus medios de producción y de cambio la mejor garantía de su estabilidad social, se ligan con los explotadores por la identidad de sus intereses. Adicionalmente, en la perspectiva de la COB, existía una incipiente burguesía nacional (grandes industriales y comerciantes) que a pesar de estar interesada en el proceso revolucionario llevado a cabo, se opondría a una profundización del mismo.

La Central Obrera Boliviana señalaba que a través del proceso revolucionario, todos estos sectores y clases habían desplazado del poder a la oligarquía, sector social absolutamente dependiente de los intereses extranjeros que vivió permanentemente vinculado al tradicional pasado feudal y minero, por lo que todos ellos se encontraban representados en el gobierno del MNR. Lo que los unió fue la lucha antioligárquica, pero una vez vencido el

³¹ Programa Ideológico y Estatutos de la Central Obrera Boliviana (1954), p. 4.

³² Ibid.

³³ En el periodo posrevolucionario la economía boliviana era muy dependiente de la explotación de minerales.

enemigo común los objetivos de cada uno de ellos iban por distintos caminos. Por ello, la COB consideraba de vital importancia mantenerse en el co-gobierno.

Para la Central Obrera, la Revolución de 1952 tenía un carácter nacional-popular cuyo objetivo inmediato era el sacudimiento de la explotación imperialista mediante la recuperación de la riqueza nacional y la superación de los resabios feudales; sin embargo, éste sólo constituía el primer paso hacia el objetivo final de la transformación socialista, la cual se lograría a través de la lucha de liberación social. El co-gobierno con el MNR evitaría la decapitación del proceso revolucionario en el marco de las reformas democrático-burguesas ante el peligro que significaba la burguesía y su negativa de reconocer la necesidad de profundizar este proceso, razón por la que la COB asumía como tarea principal la capacitación revolucionaria de la clase obrera para que pueda afrontar la responsabilidad histórica de conducir el movimiento popular formado por la alianza con los campesinos y los sectores explotados de la clase media urbana.

Como se puede observar, la Central Obrera brindaba mucha mayor atención a su proyecto político que a su agenda sindical, la cual reivindicaba la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, la elevación progresiva de sus sueldos y salarios y la profundización continua de sus derechos sociales.

En el ámbito económico, la COB planteaba que tanto las actividades que signifiquen monopolio de producción como los servicios públicos debían estar controlados por el Estado, tendiendo a crear, paralelamente a la industria privada, la industria cooperativa en manos de los sindicatos. Asimismo, propugnaba el control sindical con derecho a veto en las principales actividades económicas del país: banca, industria, comercio e instituciones estatales.

Con el fin de lograr sus objetivos, la Central Obrera se propuso contar con agrupaciones que le permitan el mayor número de afiliados, le confiera el máximo de influencia en la vida nacional y le permita una movilización en un mínimo de tiempo. Para ello adoptó una organización piramidal, vertical y centralista, la cual tenía un doble propósito: i) obtener el consenso y el acatamiento de cada uno de los sectores afiliados a través de la disciplina sindical, y ii) buscar la representatividad participativa de todos los sectores de la población

a través de la apertura de su base piramidal. Bajo este esquema organizativo más de la mitad de los miembros del directorio de la COB provenían del proletariado, en especial de los mineros, lo que hizo que este sector monopolice el poder y la representación al interior de esta central sindical.

La crisis económica de mediados de los cincuenta hizo que el gobierno del MNR, bajo el asesoramiento del FMI, adopte medidas económicas que afectaban a los trabajadores, hecho que provocó serias tensiones con la COB. Asimismo, las pugnas internas entre caudillos al interior de este partido y su fraccionamiento³⁴ debilitaron al gobierno y posibilitaron el golpe de estado de 1964 que inauguró dieciocho años de gobiernos militares brevemente interrumpidos por intentos de restauración democrática.

Tan profundos fueron los cambios que introdujo la Revolución que los gobiernos militares que se sucedieron entre 1964 y 1982 no se atrevieron a modificar las estructuras económicas y políticas construidas. Así, durante las dictaduras el Estado continuó siendo el eje de la conducción económica y del control burocrático de la sociedad. Este cambio del panorama político significaba una regresión desde la perspectiva del proyecto etapista de la COB, por lo cual esta organización empezó a aglutinar a los partidos de izquierda y al movimiento popular que luchaban por la restauración democrática. De esta manera, todo el periodo militar se va a caracterizar por la constante relación antagónica Gobierno-COB.

La crisis económica de finales de la década del setenta debilitó el apoyo empresarial que tenía el gobierno de Banzer³⁵ quien, ante la presión social expresada en masivas huelgas de hambre y manifestaciones multitudinarias por restablecer la democracia lideradas por la COB, convocó a elecciones en 1978. Sin embargo, la cúpula militar no se resignaba a perder el poder político y en las elecciones se detectó un escandaloso fraude que favorecía al candidato del banzerato, situación que dio origen a cinco años de crisis política en la que

³⁴ Siles Zuazo fundó el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), Walter Guevara fundó el Partido Revolucionario Auténtico (PRA) y Juan Lechín fundó el Partido Revolucionario de Izquierda Nacional (PRIN).

³⁵ Hugo Banzer Suárez asumió la presidencia en 1971 a través de un golpe militar con el apoyo del MNR y de los empresarios.

se sucedieron presidentes civiles, militares y juntas de gobierno,³⁶ en un ambiente de continuas elecciones fallidas. Finalmente, en 1982 asumió la presidencia Hernán Siles Zuazo a la cabeza de la Unión Democrática y Popular (UDP), una coalición de partidos y grupos de izquierda que había ganado las elecciones de 1980 contando con el apoyo decisivo de la COB.

El gobierno de la UDP enfrentó la peor crisis económica de la historia boliviana (y una de las peores a nivel mundial) producto del abultado déficit fiscal, del deterioro de los precios internacionales de materias primas y del incremento del servicio de la deuda externa, todo lo cual derivó en el peor proceso hiperinflacionario no provocado por efectos de guerra de la historia mundial.

Para la COB la crisis económica se debía a la aplicación de un modelo terciario, consumista, improductivo y especulativo de capitalismo dependiente en el periodo posrevolucionario que se combinó, a partir de 1964, con el carácter antinacional, antipopular, represivo y fascista de los gobiernos militares que llevaron a la quiebra a las principales empresas estatales como consecuencia de los exagerados tributos aplicados sobre ellas y de las transferencias de ganancias a la burguesía nacional e internacional. La Central Obrera señaló que con la crisis se comprobaba la incapacidad de la burguesía por conducir y servir los destinos del país, escenario que la obligaba a plantear soluciones a la situación económica de las empresas del Estado y del país sin renunciar al objetivo de la liberación nacional y social. Por ello, la COB asumía que no podía luchar por la sola conquista de un salario determinado puesto que su función social y política le imponía ejercer la vanguardia organizada del pueblo boliviano, sobre el cual, en caso de no intervenir, se descargaría el peso de la crisis. Adicionalmente, ante el peligro de una regresión autoritaria en caso de no darse salida al deterioro económico, la COB optó por plantear un programa económico que reconduzca el manejo de la economía que realizaba la UDP.

³⁶ La siguiente es una lista de los gobiernos que se sucedieron entre 1978 y 1982: Juan Pereda (militar, 1978), David Padilla (militar, 1978-1979), Walter Guevara (civil, 1979), Alberto Natusch Busch (militar, 1979), Lidia Gueiler (civil, 1979-1980), Luis García Meza (militar, 1980-1981), Junta de Gobierno: Celso Torrelio, Waldo Bernal y Oscar Pammo (militares, 1981), Celso Torrelio (militar, 1981-1982) y Guido Vildoso (militar, 1982). Éste último entregó el poder a Hernán Siles Zuazo, ganador de las elecciones de 1980.

El *Plan Económico-Social de Emergencia* de la Central Obrera Boliviana, formulado en 1983, señalaba que debía realizarse un cambio en el modelo económico hacia una política económica y social de defensa de los intereses nacionales y de protección de su capital humano que tenga como objetivo la transformación de la estructura económica tradicional mediante el dinamismo del sector agropecuario, la reactivación del sector industrial, el fortalecimiento del sector exportador y la consolidación del sector público sobre el privado. Adicionalmente, planteaba la postergación del pago de la deuda externa, el rechazo a las imposiciones del FMI y la reducción del gasto público a través de la eliminación de los gastos improductivos, lo cual implicaba erradicar los excesos de la burocracia y el despilfarro. Para lograr ello, la Central Obrera demandó a la UDP la puesta en marcha del co-gobierno con la COB, la co-gestión mayoritaria de los trabajadores en las empresas productivas del Estado y el control obrero en la gran empresa privada, bajo los argumentos de que debía haber un cambio en la organización de métodos de gestión para alcanzar una mayor eficiencia en las empresas del Estado y en la administración pública, de que no hay mejor garantía para el crecimiento de la economía que una clase trabajadora activa y estimulada en función de su participación en el proceso de producción, y de que la participación y vigilancia obrera en las empresas evitarían la evasión de impuestos y, por tanto, propiciarían el incremento del ingreso público.³⁷

Si bien las tareas delineadas por el Plan Económico-Social de Emergencia de 1983 tenían como objetivo el desarrollo económico a través del aumento de la productividad y la reducción del déficit fiscal, la COB señaló claramente que mantenía el propósito irrenunciable de luchar por la liberación nacional, la revolución y el socialismo, objetivo que sólo se alcanzaría cuando los explotados capturen el poder político. Por ello, en la declaración política del VI Congreso de la COB de 1984 se planteó que el desplazamiento de las dictaduras no basta y que, con el fin de que la burguesía nativa no limite el proceso liberador al marco democrático burgués, los trabajadores debían intervenir en los niveles de decisión política y económica del gobierno. Esta tarea, adicionalmente, sería imperiosa debido a que la crisis económica propiciaría que las fuerzas reaccionarias atenten

³⁷ Algunos de estos planteamientos ya habían sido formulados (y se encontraban más desarrollados) en la *Propuesta de Política Económica* de la COB de 1979. Sin embargo, la inestabilidad que caracterizó el periodo 1978-1982 impidió que tal propuesta sea considerada.

nuevamente contra la democracia, misma que se habría logrado gracias a la lucha de los trabajadores. Frente a este peligro, la COB señaló que ejercería la defensa del proceso democrático no por su identificación con el gobierno de la UDP (que además era percibido como un gobierno burgués) sino porque la democracia era un paso previo en la búsqueda de su objetivo final. Teniendo claro este proyecto político, afirmaban sus dirigentes, se mantendría la unidad de los trabajadores y se evitaría que la crisis ejerza efectos desmovilizadores y termine salarializando al movimiento obrero.

La experiencia histórica de los últimos 30 años ha demostrado que son las luchas obreras y populares las que permiten abrir los espacios democráticos, por lo que es una evidencia comprobada que el proceso actual es producto de la lucha antifascista del pueblo trabajador boliviano (...) El proceso democrático es patrimonio de los trabajadores (...) son las masas trabajadoras, ante la incapacidad histórica de la burguesía, las protagonistas de la recuperación democrática (...) Nuestro compromiso no es sin embargo con la institucionalidad formal de la democracia burguesa, nos interesa la preservación de este proceso no como un fin en sí mismo, sino en la medida que permite potenciamos para avanzar con paso firme y seguro a la realización de nuestros objetivos estratégicos (COB, 1985: 120).

El rechazo del co-gobierno por parte de la UDP y los paquetes económicos lanzados en un intento desesperado por estabilizar la economía provocaron que la COB intente imponer a través de la presión su Plan Económico-Social de Emergencia, para lo cual convocó a numerosas marchas, huelgas, bloqueos, etc., que ocasionaron una crisis social y una parálisis estatal que, sumadas al empeoramiento de la crisis económica, obligaron a Siles Zuazo a adelantar en más de un año las elecciones presidenciales, mismas que se llevaron a cabo en 1985. Tal parece que esta salida sorprendió a la COB que esperaba imponerse finalmente a Siles y reconducir el gobierno o, en caso contrario, preveía un intento golpista de la derecha, escenario en el que, a través de repeler el golpe, buscaría tomar el poder. Para la central Obrera, la salida electoral fue la carta de la derecha que derrotó al pueblo e impidió recuperar el rumbo de la democracia en la perspectiva de los intereses populares. Con ella, sostenía, la nueva rosca no sólo retomó la iniciativa política sino que rearticuló sus fuerzas y se volvió a legitimar, sellándose de esta forma la regresión derechista. Debido a que ya no constituía una alternativa de gobierno propia, la COB intentó preservar sus niveles unitarios de conducción y movilización en aras de conservar su capacidad de

presión y veto social frente las políticas del nuevo gobierno, aspecto que será analizado en el próximo capítulo.

En un país en el que la población campesina constituye la mayoría nacional sería erróneo suponer que este sector no jugó un papel importante en el periodo posrevolucionario. Por este motivo a continuación se expondrá el desarrollo del movimiento campesino y su propuesta política.

3.3 El Movimiento Campesino: de la subordinación a la autonomía

Con la Reforma Agraria y el Voto Universal los campesinos se constituyeron en sujetos políticos y económicos, siendo el sindicalismo el medio de ejercicio de su nuevo status ciudadano; así, la Revolución de 1952 inauguró un periodo de subordinación del campesinado al Estado gracias al aparato sindical para-estatal construido que conectaba a las áreas más remotas del país con el núcleo estatal liderado por el MNR. Este relacionamiento no se alteró en el periodo militar durante el cual, con la firma del *Pacto Militar-Campesino* (PMC), el grueso de dirigentes se mantuvo fiel a los grupos militares que se sucedieron en el poder, aspecto que diferencia notablemente a este sector de la COB que había sido la principal fuerza opositora a estos gobiernos. Este patrón de subordinación, sin embargo, no estuvo exento de conflictos por cuanto la columna vertebral del PMC lo constituía el sindicalismo agrario cochabambino (donde la población es predominantemente de origen quechua) mientras que en las zonas altiplánicas (en las que la población es mayoritariamente aymara) empezaron a conformarse organizaciones campesinas disidentes.

La tensión al interior del movimiento campesino alcanzó su cúspide durante la presidencia de Banzer cuando un bloqueo de caminos en los valles cochabambinos que demandaba la reversión de un paquete económico que había incrementado los precios de varios artículos de primera necesidad terminó en una sangrienta masacre de campesinos en enero de 1974. La *masacre del valle* permitió el debilitamiento del aparato sindical para-estatal dominado por el gobierno, el fortalecimiento de otras corrientes sindicales independientes, en especial del *katarismo* y, en consecuencia, el debilitamiento del gobierno producto de la ruptura de los últimos vínculos que mantenía con las clases populares.

Para comprender al movimiento campesino que emerge de este contexto, es necesario exponer brevemente el surgimiento del katarismo al interior de éste. Según Rivera (2003), el katarismo se nutre, por un lado, de la dirigencia disidente de las zonas altiplánicas que no había podido establecer un acercamiento con la COB debido a que ésta encontraba incompatibles los planteamientos de reivindicación étnico-cultural campesina con su discurso occidental de corte marxista, y, por otro, de los aymaras residentes en la ciudad de La Paz que, a pesar de su inserción urbana acompañada de mayores niveles educativos, chocaron con los resabios de la mentalidad colonial y racista dominante en las capas criollas de la población y buscaron darle expresión ideológica al sentimiento de aguda frustración que acompañaba su experiencia urbana, creando así programas de radio en lengua aymara y diversos centros culturales que reivindicaban la cultura originaria y las luchas anticoloniales de los caudillos indígenas, en especial de Tupac Katari. La creciente interacción entre el movimiento cultural de residentes urbanos y el movimiento político del nuevo sindicalismo altiplánico constituye una de las causas del vertiginoso ascenso de la propuesta y el movimiento katarista. A ello debe sumarse el hecho de que la nueva generación rural aymara, a pesar de los cambios producidos por la Revolución del 52, percibía la continuidad oligárquica y señorial del sistema ideológico dominante debido a que se imponía autoritariamente la castellanización, se forzaba la incorporación indígena al proyecto homogeneizador cultural criollo-mestizo y se impedía ejercer la diferencia. Todo ello fue reflejado por el *Manifiesto de Tiwanaku* de 1973.

Nosotros, los campesinos quechuas y aymaras, lo mismo que los de otras culturas autóctonas del país, decimos lo mismo. Nos sentimos económicamente explotados y cultural y políticamente oprimidos. En Bolivia no ha habido una integración de culturas sino una superposición y dominación, habiendo permanecido nosotros en el estrato más bajo y explotado de esa pirámide (...) Somos extranjeros en nuestro propio país (...) no se han respetado nuestras virtudes ni nuestra propia visión del mundo y de la vida (...) no se ha respetado nuestra cultura ni comprendido nuestra mentalidad (Manifiesto de Tiwanaku, 1973. Citado por Rivera:154, 2003)

A esta frustración debe sumarse la desconfianza hacia los partidos de derecha, de izquierda y hacia la propia COB, debido a que los primeros utilizaron al movimiento campesino para favorecer sus ambiciones, los segundos no admitían al campesinado como gestor de su propio destino, y la Central Obrera les asignaba un rol secundario en su proyecto político al considerarlos carentes de conciencia revolucionaria. Por ello, el Manifiesto propone la

creación de un movimiento autónomo campesino, y los años siguientes se caracterizarán por la lucha del nuevo sindicalismo campesino por consolidar su autonomía sindical y desarrollar su capacidad de autodeterminación política.

La caída del gobierno de Banzer en la que al lado de la Central Obrera Boliviana participaron varios dirigentes campesinos propició el acercamiento entre ambos sectores lo que permitió que en 1979 se realice, bajo los auspicios de la COB, el Primer Congreso de Unidad Campesina, evento en el que se funda la *Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia* (CSUTCB), cuya tesis política reflejará las consignas kataristas.³⁸

La tesis política de la CSUTCB pretende ser una respuesta a la historia de sometimiento del sector indígena-campesino en Bolivia que se plantea dejar a un lado “la mentira de la historia oficial” que se enseña en las escuelas, por ello empieza señalando que

A lo largo de casi cinco siglos nuestros enemigos de la época colonial y los de la época republicana han tratado que pensemos lo que ellos querían que pensemos, que hablemos sólo lo que a ellos les interesaba, que vivamos imitándoles y, en fin, que aceptemos la situación de opresión, explotación, racismo, desprecio de nuestras culturas, abusos y suplantación (...) Los campesinos aymaras, quechuas, cambas, chapacos, chiquitanos, canichanas, itenamas, cayubabas, ayoreodes, tupiguaraníes y otros, somos los legítimos dueños de esta tierra. Somos la semilla de donde ha nacido Bolivia, pero aun hasta hoy nos tratan como a desterrados en nuestra propia tierra (Tesis Política de la CSUTCB, 1983. Citada por Rivera, 2003).

Así como el sector campesino no acepta la dominación a la que fueron sometidos por las grupos privilegiados, tampoco admite ser menospreciado y relegado por otros grupos. Sin embargo, afirma que su lucha no busca la confrontación de indios contra blancos sino la libertad en una sociedad sin explotación ni opresión, una sociedad organizada en un Estado plurinacional que desarrolle las diversas culturas y las formas de gobierno propio. De esta forma, el movimiento campesino se asume parte de una lucha amplia de todos los oprimidos de Bolivia unidos por raíces históricas y culturales comunes en la que existe tanto unidad con los obreros como independencia sindical y personalidad indígena-campesina propia.

³⁸ Debe mencionarse que si bien la CSUTCB está oficialmente afiliada a la COB, su desempeño evidencia la independencia sindical respecto a esta última.

Debe resaltarse que la unidad de los oprimidos que postula la CSUTCB emerge de la idea de una identidad histórica y cultural distinta a la identidad de intereses de tipo clasista que postula la COB. De la misma manera, la sociedad sin explotados que busca el movimiento campesino es muy diferente a la sociedad socialista inscrita en el proyecto de la Central Obrera que nunca se plantea cuestiones de pluriculturalidad y etnicidad. Sin embargo, al igual que ésta última, la CSUTCB sí considera que la democracia representativa no ha conseguido representar los intereses de las mayorías nacionales y que debe cambiarse toda la estructura de poder construyendo, y aquí se halla una nueva diferencia con la COB, una sociedad plurinacional y pluricultural que, manteniendo la unidad de un Estado, combine y desarrolle la diversidad de las naciones que lo integran. Para recalcar esto último, la tesis política manifiesta que “no puede haber una verdadera liberación si no se respeta la diversidad plurinacional de nuestro país y las diversas formas de autogobierno de nuestros pueblos”.³⁹

Como puede apreciarse, los postulados de la CSUTCB tienen muchas diferencias respecto a los planteamientos de la COB, no obstante lo cual ambas organizaciones lucharon juntas por la restauración democrática a inicios de los ochenta. Sin embargo, la independencia sindical propugnada por el sector campesino le servirá para rebasar la acción de la Central Obrera, para lograr ser un factor de presión mucho más importante en el periodo democrático y para posicionarse como un actor político muy relevante. Todo esto será analizado en el próximo capítulo.

Finalmente, debemos analizar los programas con los que se presentaban a la ciudadanía los distintos partidos políticos debido a que la restauración democrática propició que éstos tengan una importancia mucho mayor que la que asumieron durante el periodo militar. Esta revisión nos servirá para identificar los principales temas de debate que sentaron la agenda política en esta nueva etapa de la vida del país.

³⁹ Tesis Política de la CSUTCB, 1983. Citada por Rivera, 2003.

3.4 Los Partidos Políticos en el nuevo contexto democrático

El primer gobierno democrático inaugurado en 1982 a la cabeza de la UDP no logró contener la peor crisis económica de la historia boliviana ni pudo evitar el conflicto social resultante con los sectores organizados liderados por la COB, a lo que se sumó el bloqueo político que sufrió el Ejecutivo por parte del Congreso producto de una minoritaria presencia de legisladores del oficialismo. El entrampamiento obligó al presidente Hernán Siles Zuazo a concertar, con la mediación de la Iglesia Católica, con los demás partidos políticos el adelantamiento de las elecciones para 1985 no obstante que su mandato finalizaba en 1986. No cabe duda que la solución de la crisis sería el tema principal a abordar por todos los partidos y a través del cual los distintos candidatos intentarían interpelar a la sociedad.

La elección presidencial de 1985 exhibió el más amplio abanico de opciones electorales presentándose dieciocho candidaturas que desplegaban posiciones que iban desde el trotskismo hasta el libre mercado. Los partidos de izquierda con posiciones más radicales, entre los que se encontraban el POR y el Frente del Pueblo Unido (FPU)⁴⁰, propusieron soluciones contrarias al sistema basadas en el antiimperialismo y en la construcción del socialismo. Para el POR la solución definitiva al capitalismo dependiente y atrasado eran la revolución y la dictadura proletaria, objetivo para el que postulaba transformación radical del Estado a través de la subversión contra el ordenamiento jurídico y la Constitución. El FPU, por su parte, planteaba la construcción de un Estado democrático, popular, antioligárquico y antiimperialista que despliegue una estrategia liberadora para el desarrollo a través de la defensa de los intereses de las clases explotadas, de la nacionalización de la banca, del control estatal del sistema financiero y el comercio exterior y de la eliminación del pago de la deuda externa.

En el otro extremo del ámbito ideológico se ubicaban algunos partidos que basaban su propuesta en políticas de libre mercado y en la restitución del principio de autoridad que el gobierno de la UDP había perdido a través de la aplicación dura de la ley compatible con el

⁴⁰ Los miembros de estos partidos eran a su vez parte importante de la COB y ejercían influencia en la línea ideológica adoptada por ésta.

Estado de derecho. Así, para el MNR, que postulaba nuevamente a Víctor Paz, la crisis económica debía ser encarada reduciendo el déficit fiscal, implementando una reforma tributaria, estableciendo un tipo de cambio único y real, renegociando la deuda externa y permitiendo la libre negociación salarial entre empresarios y trabajadores. A nivel institucional del Estado, proponía llevar adelante una descentralización administrativa que ponga fin al excesivo centralismo y, por último, ante el aumento del narcotráfico y de las plantaciones de coca, planteaba la sustitución de esta planta con cultivos de alto rendimiento. Por otro lado, Hugo Banzer, quien a finales de los setenta había fundado Acción Democrática Nacionalista (ADN), presentaba una propuesta basada en la corrección del desequilibrio fiscal, en la aplicación de un tipo de cambio único con libre convertibilidad, en la ejecución de una reforma tributaria de emergencia, en la renegociación de la deuda externa y en la concertación obrero-patronal. Adicionalmente, para encarar el centralismo estatal proponía una descentralización político-administrativa.

Entre los partidos que intentaban combinar políticas de mercado con políticas abiertamente populares se encontraban aquellos que habían formado parte de la UDP: el MNRI y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El primero de ellos planteaba, para detener la hiperinflación, frenar la fuga de capitales, establecer un tipo de cambio único y real, desarrollar el sector agropecuario, implementar políticas para el artesano y el pequeño y mediano empresario y llevar adelante la descentralización político-administrativa. Por su parte, el MIR, que presentaba como candidato a Jaime Paz Zamora, quien fuera vicepresidente de Hernán Siles, proponía controlar la inflación, reducir el déficit fiscal, desestatizar la empresa privada y llevar a cabo una política social centrada en los pobres y desheredados que sea capaz de crear 350 mil empleos.

Finalmente, es importante considerar la propuesta del Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación (MRTKL) que presentó como candidato presidencial a Genaro Flores, Secretario Ejecutivo de la CSUTCB, y que basaba su propuesta en el planteamiento katarista que había influenciado notoriamente al movimiento campesino. EL MRTKL no se centró en la solución de la crisis económica, sino partiendo de un diagnóstico que presentaba a un Estado boliviano colonial, racista y excluyente de las múltiples nacionalidades que habitan su territorio, propuso construir un Estado multinacional y

constituir un gobierno de mayorías nacionales contra la dominación colonial externa y el colonialismo interno. En función de esta postura, planteó la reestructuración orgánica del Estado para dar cabida a la descentralización administrativa.

Los resultados de la elección presidencial de 1985 fueron los siguientes:

Cuadro 3.1
Resultados electorales 1985 (en porcentaje)

Partido	MNR	ADN	MIR	MNRI	MRTKL	FPU	Otros
Porcentaje de votos	30.36	32.83	10.18	5.48	2.11	2.53	16.51

Fuente: Corte Nacional Electoral de Bolivia, 2005.

Estos resultados nos muestran que el electorado se inclinó por programas que ofrecían una rápida salida a la crisis y por partidos que significaban la antítesis de la UDP. Sin embargo, dado que la Constitución contemplaba que la elección del presidente quedaba en manos del congreso en caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mayoría absoluta de votos, considerando el trauma que significó la parálisis política y la ingobernabilidad del gobierno de la UDP y en vista de que sólo un gobierno que gozara de mayoría legislativa podría implementar las políticas requeridas para frenar la hiperinflación, los partidos que habían obtenido mayor cantidad de votos empezaron a buscar el establecimiento de un pacto político que permita al nuevo gobierno gozar de gobernabilidad. Las afinidades programáticas del MNR y ADN llevaron a estos dos partidos a suscribir el Pacto por la Democracia, mismo que posibilitó que Víctor Paz, líder histórico del MNR, asuma su cuarta presidencia.⁴¹ Dicho pacto consideraba las siguientes acciones: i) defensa de la democracia representativa, participativa y pluralista; ii) señalamiento de los objetivos políticos, sociales y económicos necesarios para la modernización del Estado; iii) aprobación de una ley fundamental de descentralización político-administrativa; iv) formulación de procedimientos legales que normen el desenvolvimiento de los partidos políticos en el marco democrático y promuevan el perfeccionamiento del sistema electoral; v) acciones parlamentarias para fortalecer el principio de autoridad; vi) profundización de

⁴¹ El Pacto por la Democracia entre MNR y ADN contó con el apoyo intermitente del MIR, partido que a pesar de favorecer con su voto parlamentario a la candidatura de Paz Estenssoro, se declaró como una fuerza política de oposición.

acciones destinadas a superar la crisis y la hiperinflación; vii) creación de incentivos para el ahorro interno y de un clima favorable a la captación de capitales nacionales y extranjeros; viii) consolidación de la confianza externa en los compromisos del Estado con organismos financieros internacionales; y otros.

Debe considerarse, sin embargo, que el engranaje que hizo que funcione el Pacto por la Democracia fue la distribución del poder entre los partidos de la coalición, que implicaba cuotas partidarias (o cargos) en las instituciones del Estado, las mismas que eran constantemente renegociadas. Una vez satisfechas las pretensiones de poder y enriquecimiento de los socios de gobierno, se garantizaba la mayoría congresal al presidente que le permitía gobernar sin ningún tipo de oposición efectiva de los demás partidos. Este mecanismo, conocido como Democracia Pactada, permitió que la última presidencia de Víctor Paz Estenssoro sea tan determinante como la primera en establecer cambios que redirigieran el carácter del Estado boliviano.

CAPITULO IV

UN NUEVO ORDENAMIENTO: NEOLIBERALISMO Y DEMOCRACIA PACTADA. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, LOS ACTORES POLÍTICOS Y SU DISCURSO EN EL PERIODO NEOLIBERAL

La catástrofe del gobierno de la UDP dio origen a dos traumas que han marcado posteriormente la evolución política y económica en Bolivia: *i)* el trauma de la hiperinflación, y *ii)* el trauma de la parálisis estatal y la ingobernabilidad. Por ello, a partir del gobierno de Victor Paz Estenssoro (1985-1989) se destinaron los mayores esfuerzos para eliminar la posibilidad de que emerjan nuevamente los fantasmas que propiciaron la debacle económica y el caos político que habían caracterizado al gobierno anterior. Estabilidad macroeconómica y gobernabilidad fueron entonces los principales objetivos a alcanzar y preservar, y es este el contexto en el que surge un nuevo ordenamiento económico y político basado en un giro de la política económica hacia el mercado y en el establecimiento de un sistema político centrado en la conformación de pactos y coaliciones de partidos que le aseguren al ejecutivo la mayoría legislativa necesaria para la aprobación de sus políticas. Así, neoliberalismo y democracia pactada surgen simultáneamente y, como bases de este nuevo ordenamiento, se perciben como la única opción posible a seguir, con lo cual se produce un consenso discursivo de los partidos en torno a la democracia y al mercado, consenso que sólo presenta ligeras variaciones de un partido a otro que los ayuda a diferenciarse en periodos electorales.

Pocos días después de su posesión, la coalición gobernante **MNR-ADN** promulgó el Decreto Supremo 21060 en el entendido de que la situación económico-financiera del país requería la adopción de nuevas soluciones de políticas económicas que enfrenten los problemas en las raíces mismas de la crisis, por lo cual era necesario

aplicar una Nueva Política Económica (NPE) que tenga la aptitud de ser realista y pragmática con el objeto de atacar las causas centrales de la crisis, en el marco de una racionalidad de medidas fiscales, monetarias, cambiarias y de ajuste administrativo del sector estatal que, además de su contenido, radicalmente antiinflacionario, sienta los fundamentos para reiniciar, redefinir y encaminar el desarrollo nacional (Decreto Supremo 21060, 1985: 1).

El D.S. 21060 consideraba que las medidas de política económica instrumentadas en el pasado no habían atacado las causas esenciales de la crisis, orientándose tan sólo a corregir algunas de sus manifestaciones y determinando una profunda distorsión en el sistema de precios, lo cual habría agravado la desigual distribución del ingreso y postergado toda posibilidad de crecimiento económico.⁴² Asimismo, asumía que el factor de mayor incidencia en el ritmo inflacionario radicaba en el sostenido y creciente déficit fiscal del sector público. Para corregir estas distorsiones, el D.S. 21060 aplicó un programa de estabilización que establecía una política salarial de congelamiento de sueldos y salarios, una simultánea liberación de los precios de bienes y servicios, la disolución de las empresas públicas consideradas no estratégicas, la reducción drástica del empleo en el sector público, la libre contratación de fuerza de trabajo en los sectores público y privado, una política cambiaria flexible que funcione por el libre juego de la oferta y la demanda y una completa liberalización de las políticas de importaciones y exportaciones. Con estas medidas se inició un programa de reformas estructurales encaminado a sentar las bases de una economía de mercado reduciendo la injerencia del Estado en la actividad económica y eliminando los obstáculos que impiden que el mercado cumpla un rol central en la asignación de recursos. Como complemento, en 1986 se estableció una reforma tributaria destinada a captar mayor cantidad de recursos a favor del Estado y sostenida principalmente en impuestos al consumo.

Los resultados inmediatos de las medidas asumidas fueron exitosos en términos de frenar el proceso hiperinflacionario y estabilizar la economía como lo muestra el siguiente cuadro.

Cuadro 4.1
Inflación General acumulada por año (en porcentaje)

Año	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Inflación	123.54	275.59	1,281.30	11,750.00	276.34	14.58	16.00	15.17

Fuente: World Bank, 2005.

⁴² El Plan Nacional de Rehabilitación y Desarrollo 1984-1987 y la Estrategia Nacional de Desarrollo y Plan Cuatrienal 1985-1988 habían propuesto solucionar la crisis a través de retener y distribuir el excedente económico que se genera y que sale del país mediante una aplicación efectiva de las políticas tributarias, arancelarias, de tarifas públicas, etc. En este sentido, correspondía al Estado el control del excedente económico nacional.

Incentivado por el éxito de las medidas aplicadas, el gobierno de Víctor Paz elaboró en 1989 una estrategia de desarrollo de mediano plazo dirigida a consolidar la estabilidad económica y retomar el crecimiento vía la profundización del programa de ajuste estructural. La *Estrategia de Desarrollo Económico y Social 1989-2000* (EDES) se inscribe dentro de los marcos establecidos por el D.S. 21060, y al igual que éste, asume que la crisis desatada a principios de los ochenta fue consecuencia de las limitaciones de la concepción del desarrollo que había predominado anteriormente y que se basaba en un modelo de capitalismo de Estado caracterizado por una fuerte presencia estatal en la producción de bienes y servicios. Éste, al haber sido un modelo de desarrollo endeudado, habría dado origen al abultado déficit fiscal que desencadenó un brutal incremento de la deuda externa, primero, y el proceso hiperinflacionario, después. De esta forma, la excesiva intervención estatal habría sido en gran medida culpable de la crisis, por lo cual era necesario comenzar una etapa de profundas reformas de la política económica que vayan más allá de las políticas estabilizadoras aplicadas hasta ese momento.

La EDES plantea que Bolivia debe reducir su dependencia en el comercio internacional, para lo cual sería necesario cambiar el carácter pasivo de su inserción externa mediante la diversificación de sus exportaciones (concentradas en minería e hidrocarburos), con lo que se asume que éstas son el principal factor impulsor del desarrollo económico.

Se sostiene que es mediante las exportaciones que las actividades internas encontrarán sus escalas de rentabilidad y que se lograrán las transferencias tecnológicas que tanto requieren para aumentar su productividad. Con una economía interna que no pierde las referencias internacionales de eficiencia, se desarrollará también una industria eficiente de sustitución de importaciones. En el mediano plazo, el crecimiento económico basado en la expansión de las exportaciones, beneficiará también a la producción de bienes no comercializados internacionalmente (EDES, 1989: 12,13).

La política general de exportaciones de la EDES hacía hincapié en aumentar el valor agregado de los productos básicos de exportación y en diversificar las exportaciones, incrementando las de origen agropecuario y manufacturero. Para ello, sería fundamental la mayor participación del sector privado en el desarrollo económico, en función de lo cual, deberían promoverse reglas estables y garantizarse una gestión macroeconómica correcta a través de un control permanente de la inflación. También se señaló con claridad la

necesidad de acoger ampliamente a la inversión extranjera, recomendando impulsar un programa de privatización.⁴³

Acorde con el papel crucial que desempeñaba el sector privado en la EDES, se planteó la modernización del Estado, cuyo componente fundamental sería la reducción de sus intervenciones en la esfera productiva.

La modernización del Estado tiene un papel central en la Estrategia. El gobierno y sus empresas deben seguir criterios de eficiencia económica y deberán corregir sus disfunciones pasadas. Se desea, en efecto, un Estado más eficiente, reforzado en su capacidad financiera y de formulación de políticas macroeconómicas y sectoriales. Este Estado tendrá un radio de acción un poco más pequeño que en el pasado, pero sus intervenciones serán ejecutadas eficientemente (EDES, 1989:18).

Otras medidas de ajuste estructural consideradas vitales en la EDES, algunas de las cuales ya habían estado siendo implementadas desde 1985, son las siguientes: la descentralización de la administración del Estado, la apertura al comercio exterior, la liberalización de los mercados internos de productos y factores, el mantenimiento de un tipo de cambio realista, la equidad horizontal en la tributación y la normalización de las relaciones con las instituciones internacionales de financiamiento.

La Estrategia de Desarrollo Económico y Social 1989-2000 significó la consolidación de lo que en materia económica se venía aplicando en Bolivia a partir de 1985. Como se puede apreciar, tanto esta estrategia como el D.S 21060 se enmarcan dentro de las recomendaciones efectuadas por el FMI y el BM vistas en el segundo capítulo, por lo que claramente se puede deducir que el discurso dominante en Bolivia se ajustó al discurso del Orden Mundial. Asimismo, la derrota electoral de los partidos políticos que propugnaban alternativas distintas a las de libre mercado significó que el MNR, ADN y MIR encuentren un amplio espacio para consolidarse como las fuerzas más importantes en el sistema político boliviano. Sin embargo, no se puede deducir de ello que otros actores políticos importantes, como la COB y la CSUTCB, asumieron dichos planteamientos o que la aplicación de las reformas fue efectuada sin conflictos ni tensiones sociales. Es más, debido al elevado costo social que este proceso implicó, ambas organizaciones constituyeron un

⁴³ Sin embargo, este recién fue iniciado en 1992.

frente de oposición a las reformas a través de movilizaciones constantes que en diversas ocasiones paralizaron a las regiones más importantes del país.

La estabilización económica supuso el despido de más de 23.000 mineros de la COMIBOL, la destitución de trabajadores de diversas instituciones de la administración pública y el congelamiento salarial durante todo el periodo de gobierno de Victor Paz. Este escenario provocó que la COB y la CSUTCB organicen huelgas generales, huelgas de hambre, masivas marchas en las ciudades y bloqueos en las carreteras de todo el país, las cuales amenazaban con reproducir el clima de caos social imperante durante la gestión de la UDP, situación ante la cual la coalición gobernante MNR-ADN respondió con la mayor dureza posible. Abrupta intervención militar a las marchas y bloqueos, detención y confinamiento de dirigentes a regiones lejanas del país, además de la declaración de dos estados de sitio fueron la señal de que el gobierno no estaba dispuesto a negociar ni retroceder en la aplicación de las reformas. Asimismo, y en concordancia con la política internacional de lucha contra las drogas, se aprobó, a través de la Ley 1008, la erradicación de plantaciones de coca y su sustitución con productos alternativos, lo que provocó fuertes enfrentamientos entre militares y cocaleros que arrojaron numerosos muertos.

El D.S. 21060 y los lincamientos contenidos en la EDES garantizaban la estabilidad económica, y el pacto político MNR-ADN (que le brindaba al Ejecutivo la aquiescencia del Legislativo) junto a la subordinación de la Fuerzas Armadas al poder civil, avalaban la estabilidad política del país. Todo ello logró estabilizar un país crónicamente inestable, ¿cuánto se valoraba esta estabilidad? Para responder a esta pregunta debemos analizar, por un lado, el desempeño y discurso de los partidos políticos más importantes y los resultados que arrojaron los procesos electorales posteriores, y por otro, la acción y discurso de la COB y la CSUTCB que, en principio, no se circunscribían al ámbito electoral.

4.1 La COB y la CSUTCB en el nuevo contexto democrático y neoliberal

Se ha visto anteriormente que ambas organizaciones se movilizaron contra los regímenes militares para propiciar la restauración democrática a pesar de que sus aspiraciones y proyecto político eran muy diferentes. La instauración de políticas neoliberales, que debilitaron fuertemente a la COB debido al despido masivo de mineros, la erradicación de

las plantaciones de coca, que era vista por los campesinos como un atentado a su identidad cultural y como una supresión de la fuente de vida de los cocaleros, y el predominio de los partidos políticos, que significaba la consolidación del sistema democrático representativo y, por tanto, la postergación del proyecto socialista de la COB y la continuación del Estado racista y colonial que denunciaba la CSUTCB, configuraban un contexto nada favorable a las reivindicaciones y pretensiones de estas organizaciones, razón por la cual nuevamente se pusieron en pie de lucha.

Para la Central Obrera Boliviana, el gobierno de Victor Paz enfrentó la crisis reformulando la estructura del Estado boliviano (algo que no se había atrevido a realizar la UDP), pero lo hizo en dirección contraria a los intereses nacionales y populares y en pro de los intereses de la oligarquía y el imperialismo, inclinándose así por una opción hacia el capitalismo y la dependencia. En el diagnóstico que realiza la COB, ésta sería una etapa de dominación constitucional de la nueva rosca apoyada internacionalmente por el imperialismo con el objetivo de transnacionalizar la economía boliviana, saquear los recursos naturales y pagar una deuda externa que no contrajo el pueblo, sino los gobiernos militares que el propio imperialismo apoyó, y que por tanto no debía ser pagada. A nivel político el objetivo de este nuevo orden sería destruir las organizaciones aglutinadoras de masas para que sea el Parlamento el único espacio del juego político. Por tales motivos, la Central Obrera planteó la reunificación de todos los sectores laborales y nuevos actores sociales para enfrentar una lucha en la que sólo el diálogo no conduce a nada salvo a frustraciones, lucha que debía tener como objetivo la conquista del gobierno por parte del pueblo para asumir la tarea de construir una sociedad socialista. Teniendo claro este objetivo, los diferentes sectores debían evitar desenvolverse en un plano cada vez más coyuntural e inmediato.

Con respecto a la lucha contra las drogas, la COB señaló que si bien el narcotráfico es una lacra social que debía ser eliminada, el gobierno no tendría un real interés en combatirla debido a los grandes recursos que generaba y que eran introducidos en la economía para financiar la estabilidad económica. A su vez, afirmó que éste era más un problema de consumo que de producción, y por tanto Estados Unidos debía reducir su mercado de consumidores en lugar de impulsar la erradicación violenta de cicales y la violación de la soberanía nacional a través del ingreso de tropas norteamericanas en territorio boliviano

que afectaba terriblemente a los productores de coca. Asimismo, sostuvo enfáticamente que coca y cocaína son dos productos completamente diferentes, siendo la primera un producto natural con propiedades alimenticias y medicinales y parte importante de la cultura andina, y la segunda un producto transformado químicamente que causa daños a la salud y a la moral de las personas.

Para enfrentar la lucha contra el neoliberalismo y la “democracia controlada”, la Central Obrera asumió críticamente que debía corregir sus métodos de lucha y abandonar la pretensión de querer arrancar a los campesinos de su atraso para poder civilizarlos. Sin embargo, ratificó, de acuerdo a la doctrina marxista, que correspondía al sector obrero proletario, y en particular a los mineros, la conducción de este proceso.

La CSUTCB, por su parte, a pesar de realizar un diagnóstico del contexto muy similar al de la COB en cuanto a los objetivos de la NPE, no se propuso el socialismo como meta, sino la creación de *una patria multinacional, libre y con justicia*, lo que evidencia que el principal objetivo de este sector era el reconocimiento a su cultura, tradiciones y formas de organización. Sin embargo, descartaron que tal propósito pueda ser alcanzado en el marco de la democracia representativa dominada por partidos políticos oligárquicos, por lo que también se plantearon controlar el poder político y económico. No obstante, pusieron en primer plano la consecución del poder en sus comunidades y regiones (claro que sin descartar el ámbito nacional), tarea que podría realizarse a través de la violencia o por medios electorales.

Solamente siendo poder en las comunidades y en la región podríamos defender nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras propias formas de organización (...) a nadie deberá sorprender que nosotros los campesinos también desarrollemos la violencia para enfrentar a los asesinos (...) si participamos en las elecciones será con nuestras propias fuerzas y formas. (CEDOIN, 1988: 13, 16).

Respecto a la erradicación de coca, si bien el movimiento campesino rechazó esta política señalando que esta planta es parte de la tradición ancestral de los pueblos andinos y que “el gobierno de Estados Unidos debe controlar a sus drogadictos”, reconoció que existen excedentes de cultivo de hoja de coca, los cuales debían ser sustituidos a través de una política de desarrollo agrario y reconversión agrícola. Entre otras demandas que realizó la

CSUTCB se encontraban el derecho a una educación intercultural bilingüe, que permita rescatar la identidad y culturas originarias, y el respeto a los títulos originarios y ancestrales de sus comunidades, para que estos territorios no sean avasallados por terratenientes y madereros y puedan ejercer en ellos su autodeterminación a través de la vigencia del derecho consuetudinario.

El debilitamiento paulatino de la COB contrastó con el fortalecimiento del movimiento campesino, en especial del cocalero, razón por la que la CSUTCB empezó a señalar que su sector estaba llamado a desempeñar un papel protagónico en la resistencia popular contra el modelo neoliberal y a tomar la iniciativa para orientar la lucha del pueblo. Esta posición implicó el cuestionamiento de la vanguardia obrero-minera en el seno de la COB y el enfrentamiento entre mineros y campesinos en los congresos de la Central Obrera.

De acuerdo a los estatutos de la COB, la secretaría ejecutiva estaba reservada para el sector minero, la secretaría general para los fabriles, y los campesinos estaban relegados a cargos inferiores. Asimismo, más del cincuenta por ciento de los representantes al congreso nacional, máxima instancia de decisión de los trabajadores, provenían del proletariado, razón por la que los documentos aprobados y las políticas trazadas estaban definitivamente influidas por las decisiones de este sector. Esta estructura claramente excluyente comenzó a ser cuestionada por los campesinos a finales de los ochenta, así como también el objetivo histórico de construcción del socialismo comenzó a ser visto como extremadamente irreal. Ante esta situación, el sector minero, a pesar de su drástica disminución cuantitativa y de su reducida capacidad de ejercer presión, endureció su postura y rehusó ceder el carácter mayoritario que tenía al interior de la COB y el monopolio sobre la secretaría ejecutiva, limitándose tan sólo a aumentar la participación del campesinado en la Central Obrera del trece al dieciséis por ciento, desconociendo así el potenciamiento del movimiento campesino. El argumento esgrimido para ello sostenía que el rol de vanguardia del proletariado minero estaba respaldado por decenas de años de organización, unidad y lucha que dieron a este sector experiencia, disciplina y combatividad; adicionalmente, señalaban que su ubicación de explotado en el sistema capitalista y su conciencia de clase hacían que sus intereses fundamentales coincidieran con los de la nación en su conjunto, por lo que los mineros serían los únicos en poseer una propuesta para sustituir el actual Estado por otro

popular y revolucionario. Finalmente, afirmaban que mientras exista capitalismo y riquezas mineras en Bolivia seguiría existiendo el proletariado minero.

En consonancia al endurecimiento de la postura minera, los sucesivos congresos de la COB aprobaron una línea política aun más dura. Denunciando que en Bolivia se desarrollaba una guerra de baja intensidad que tenía el propósito de postergar la liberación del pueblo, la cual era además facilitada por el neoliberalismo y permitida por la democracia restringida, señalaron que las elecciones no eran el camino del poder y que se debía construir una dirección política que guíe a las masas bajo los marcos del socialismo científico para transitar de la resistencia activa a la resistencia subversiva y romper los marcos democráticos burgueses. La resistencia activa estaría marcada por la lucha contra la privatización de la economía del país, por la estatización de la banca y del comercio exterior, por el aumento de salarios, por la expulsión de las tropas yanquis y por la defensa de las empresas públicas, todo lo cual debía culminar en la recuperación de los recursos naturales para el pueblo a través de estatizaciones en el marco de un Estado y un poder popular. El establecimiento de un *Estado socialista, multinacional y multicultural* sería finalmente la conclusión de un proceso que, a través de la insurrección popular y la guerra de masas, sepultaría definitivamente al Estado burgués.

Llama la atención la incorporación de la reivindicación indígena-campesina en el proyecto político de la Central Obrera Boliviana. Al plantearse como objetivo final el establecimiento no únicamente del socialismo sino también de un Estado que reconozca la diversidad étnica y cultural, la COB intentaba demostrar su apertura a la demanda campesina. Sin embargo, el hecho de que en ningún momento se planteara seriamente cómo podían articularse el proyecto socialista de los mineros con el proyecto multinacional y multicultural de los campesinos, demostraba que dicha apertura era tan sólo retórica. No obstante, la sola formulación de un proyecto socialista, multinacional y multicultural en el seno de la principal organización social del país implicaba por sí misma una ampliación del espacio interpelativo del discurso indígena-campesino nada despreciable.

El mantenimiento de una estructura organizativa en la cual muchos sectores, en especial los campesinos, se sentían excluidos, la adopción de un proyecto político que cada vez más era

visto como una quimera y la reducción del número de afiliados producto de la profundización de las reformas, debilitaron ostensiblemente a la COB. Paulatinamente, diversos sectores se fueron desmarcando de las posturas adoptadas por ésta, lo que hizo que sus convocatorias a diversas movilizaciones no fueran a menudo acatadas e incluso sean boicoteadas por miembros infiltrados de los partidos políticos en su interior, con lo que la Central Obrera fue acumulando derrotas en su enfrentamiento a los gobiernos. Los diversos sectores que buscaban transformaciones en la estructura y proyecto cobista fueron relegados por el dogmatismo e intransigencia de los mineros, provocando serias divisiones que convirtieron a los congresos nacionales prácticamente en campos de batalla que imposibilitaban la elección del Comité Ejecutivo Nacional. Basta mencionar que el XII Congreso de la COB demoró dos años (de 2000 a 2002) en elegir a los miembros de un comité ejecutivo que además fue desconocido por la mayor parte de los sectores sociales que conforman la Central Obrera. Todo ello provocó que otras organizaciones, como los Comités Cívicos y las Juntas Vecinales, asuman mayor importancia debido a que sus demandas tenían que ver con la solución de necesidades tangibles de la población sin asumir ningún proyecto político en particular, lo que les dio la oportunidad de negociar con los gobiernos y obtener respuestas rápidas.

El contraste entre los planteamientos de la COB y la CSUTCB es claro, puesto que esta última desconfía no sólo de las posiciones de derecha sino también de las de izquierda. Para el movimiento campesino la derecha sólo cumple fielmente los mandatos del imperialismo en contra de los trabajadores y de las naciones originarias, mientras que la izquierda, tradicionalmente clasificada como revolucionaria, ha fracasado en proponer alternativas a la política imperialista. Por ello, señalaron que la principal lucha que enfrentan los campesinos es la transformación de la mentalidad colonialista tanto de la derecha como de la izquierda que permite que subsista una estructura estatal excluyente, racista y que desconoce a sus 36 naciones originarias. Para conseguir este objetivo, y en vista de que el camino que señalaba la COB no era una opción real, la CSUTCB planteó la construcción de un instrumento político libre de la intromisión de los partidos, que surja de las comunidades y se convierta en un verdadero poder político, mismo que fue creado en 1995 bajo el nombre de Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP).

La ASP nació con la finalidad de emprender la lucha campesina utilizando los espacios que proporciona la democracia, es decir, el movimiento campesino se dio cuenta que la única forma de conseguir respuesta a sus demandas era contando con representantes propios al interior de las estructuras del poder estatal y, así, combinar la acción política en estas instancias con la movilización y presión social.

Debemos luchar unidos en todos los espacios políticos, con propuestas propias y con nuestro instrumento político para llegar a instancias superiores de gobernabilidad, como el Parlamento, con nuestros propios representantes. Sólo de esta manera podremos combinar la acción directa de la organización sindical en las carreteras con bloqueos de caminos y la acción del Instrumento Político. Debemos llenar el Parlamento con diputados aymaras, quechuas, guaraníes y de otras naciones originarias (...) Ha llegado el momento en que nos representemos a nosotros mismos (CEDOIN, 1996: 6).

Debe aclararse, sin embargo, que la creación de la ASP por parte de los campesinos no significaba la exclusión de los demás sectores sociales ya que se proponía incorporar a los explotados y oprimidos de las ciudades a la construcción y consolidación del Instrumento Político. Dicho instrumento tuvo su primera prueba en las elecciones municipales de 1995, la cual fue sorteada exitosamente porque por primera vez los campesinos, con candidatos propios, consiguieron varias concejalías en distintos municipios del país, en especial en los de la región del Chapare donde existe una gran concentración de poblaciones que viven de la producción de coca. Este resultado dio impulso para que la ASP presente candidatos en las elecciones presidenciales de 1997.⁴⁴

Una vez que se han expuesto las acciones, proyectos y discursos de la COB y de la CSUTCB (organizaciones para las cuales la estabilidad en sí misma no era un resultado exitoso) en el marco democrático-neoliberal, y que se ha mostrado cómo la Central Obrera se fue paulatinamente debilitando al mantener invariables su discurso y estructura y de qué manera el movimiento campesino se potenció al punto de ingresar al juego democrático, es preciso revisar el desempeño y discurso de los partidos políticos más importantes y los resultados de los distintos procesos electorales en este mismo periodo.

⁴⁴ En el siguiente acápite se abordará con más detalle la incursión del Instrumento Político campesino en el escenario electoral.

4.2 Partidos Políticos y Democracia Pactada

Al finalizar el gobierno de Víctor Paz el país se encontraba estable en términos económicos y políticos. Las medidas contenidas en el D.S 21060, el Pacto por la Democracia y el uso de la fuerza represiva del Estado habían conseguido frenar la crisis generalizada que vivió la sociedad boliviana. En estas condiciones Bolivia estaba lista para continuar su rumbo democrático.

La derrota que sufrieron en 1985 las fuerzas que propugnaban opciones alternativas al mercado y el éxito inicial que tuvieron las reformas económicas, propiciaron el fortalecimiento de los partidos que se apegaban, con mayor o menos énfasis, a las políticas pro mercado, por lo que MNR, ADN y MIR se ubicaron en el centro de las preferencias electorales en las elecciones de 1989.

El MNR, que había optado meses antes de las elecciones por romper unilateralmente el Pacto por la Democracia con ADN para no tener que cumplir el compromiso de apoyar a Banzer en este nuevo proceso, se mostraba ante la población como el único partido capaz de emprender profundas reformas en el país a partir de una lectura adecuada de cada momento histórico que le permitía formular las políticas que la coyuntura exigía. Para este partido, las acciones que el gobierno de Víctor Paz tomó lograron frenar la inflación, controlar el déficit fiscal, reanudar las relaciones financieras internacionales (gracias a una exitosa negociación de la deuda externa) y reiniciar el crecimiento de la economía. Sin embargo, se reconocía que aun quedaban tareas pendientes ligadas al área social y a una mayor reactivación, no obstante lo cual sostenía que debía seguirse el camino emprendido en 1985 para garantizar la estabilidad.

Presentando a Gonzalo Sánchez de Lozada, principal ministro de Paz Estenssoro y artífice del programa de estabilización, como candidato presidencial, el MNR propuso mantener un modelo de desarrollo de amplia participación en el comercio internacional y en los movimientos internacionales de capital que ponga énfasis en las exportaciones y en su diversificación. En el ámbito social, a su vez, partía de la premisa de que sin crecimiento económico ninguna política social es sostenible, razón por la que planteaba conservar tanto la flexibilidad del mercado de trabajo (para estimular la demanda de trabajadores) como la

política de incrementos salariales guiada por las ganancias de productividad y por el dinamismo de la economía.⁴⁵ En cuanto al manejo de variables macroeconómicas clave, postulaba mantener un tipo de cambio único, flexible y competitivo, una estructura de precios desregulada y determinada por el mercado, y tasas de interés libres. Adicionalmente, señalaba la necesidad de desarrollar una política activa de atracción de capital extranjero en sectores como minería e hidrocarburos con el fin, en el primer caso, de rehabilitar la producción minera, y en el segundo, de aumentar el nivel de reservas probadas de gas (que alcanzaba a 5.3 billones de pies cúbicos) que posibilitaría la apertura de nuevos mercados de exportación. En lo que a reformas institucionales del Estado se refiere, el MNR contemplaba un programa de descentralización regional con coordinación central que pueda permitir una mayor eficiencia en la ejecución de los programas de inversión pública.

Acción Democrática Nacionalista, por su parte, al tiempo de desligarse de cualquier responsabilidad que se le pueda atribuir por el costo de la estabilización señalando que sólo tuvo una participación secundaria en el gobierno de Víctor Paz, propuso desarrollar una economía de mercado competitiva y social en la que el Estado sea promotor y facilitador. Postulando un modelo de *economía social de mercado* distinto al *libre mercado* del MNR, la candidatura de Banzer ofrecía prosperidad económica y equilibrio social a la vez. El modelo propuesto debería apuntar al mercado externo y no únicamente al interno, manteniendo la libre importación, eliminando toda forma de subsidio, garantizando, con el fin de aumentar el empleo en el largo plazo, la libre contratación de mano de obra y la libre negociación salarial, conservando el tipo de cambio único, flexible y real, y preservando la libre determinación de precios. Este manejo de la política económica se combinaría con políticas keynesianas de distribución del ingreso. A su vez, y señalando que la NPE agudizó los desequilibrios regionales, ADN enfatizó la necesidad de iniciar un proceso de descentralización político-administrativa gradual y ordenado.

Para el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que nuevamente postulaba a Jaime Paz, la estabilidad alcanzada por el gobierno de la coalición MNR-ADN era precaria debido a que

⁴⁵ Debe aclararse que el MNR no ignoraba el elevado costo social que tuvo el programa de estabilización de 1985, principalmente en lo que se refiere al despido masivo de mineros de la COMIBOL, respecto a lo cual afirmaba que a pesar de lo difícil que fue tomar esta decisión, la misma fue absolutamente necesaria para salvar el país.

estaba basada en el financiamiento externo y en el lavado de dólares del narcotráfico, por lo que se debería alcanzar una estabilización real de la economía asentada en la producción, el crecimiento y el empleo. Respecto a este último, ofreció crear tantos puestos de trabajo como los que quitó el gobierno de Víctor Paz en sus cuatro años de gestión, para lo cual se comprometió a suprimir el D.S. 21060 bajo el argumento de que éste en el futuro llevaría nuevamente a la economía hacia el estancamiento. En la perspectiva del MIR, la liberalización de la economía y la apertura de fronteras sólo fortalecerían el patrón extractivo-exportador y comercial-importador, razón por la cual sería necesario construir el mercado interno destruido por la libre importación sin descuidar la exportación, tareas que serían cumplidas en el marco de un proceso de desarrollo desde adentro hacia afuera. Asimismo, señaló que debía existir una *complementariedad entre la actividad del Estado y la del mercado*, en función de la cual se establecería una política de libre importación sujeta a restricciones y una política de subsidios cruzados a favor de los sectores productivos. Otros instrumentos de política económica, como la tasa de interés, el tipo de cambio y los precios, serían mantenidos sobre la base del libre juego del mercado.

Las elecciones presidenciales de 1989 no sólo contaron con la presencia de los tres partidos considerados en los párrafos precedentes. En realidad se presentaron diez candidaturas entre las cuales destaca la de Carlos Palenque, quien irrumpía por primera vez en la arena política a través de un nuevo partido fundado por él mismo: Conciencia de Patria (CONDEPA), que se presentaba como una nueva opción a los partidos tradicionales (MNR, ADN y MIR) distinta a las fuerzas de izquierda y de derecha conocidas y, por tanto, como la esperanza del pueblo de Bolivia.

Para entender el surgimiento de CONDEPA es necesario tomar en cuenta no sólo el elevado costo social que tuvo el programa de estabilización implementado por el gobierno de Víctor Paz (y apoyado por la coalición MNR-ADN y, en determinados momentos, también por el MIR), sino también el desgaste que sufrieron estos partidos políticos debido a la descarada repartición de las instituciones públicas entre ellos que dio origen al funcionamiento de amplias redes de corrupción que gozaban de protección política y a la penetración del narcotráfico en los mismos. Respecto a este último punto debe mencionarse que en 1988 estalló un escándalo que comprometía a varios dirigentes de los tres partidos

más importantes cuando se descubrieron fotos y videos en los que aparecían prominentes políticos y militares de alto rango en fiestas con conocidos narcotraficantes. La reacción de la clase política en el parlamento fue denunciar la existencia de una gran conspiración de la mafia del narcotráfico para desacreditarla y complotar contra la democracia, argumento con el que se archivaron las demandas por una investigación al respecto. Se lo hizo, declararon varios líderes políticos, para “salvar la democracia”.

Este tipo de encubrimientos ocasionaron que una parte del electorado busque opciones alternativas a los partidos tradicionales, situación que fue aprovechada por CONDEPA. Carlos Palenque se presentaba como un candidato que cumplía un mandato popular y una responsabilidad como boliviano al organizar un partido que se enfrentaba a la oligarquía y al mal uso del Estado, el que además habría sido gestado en las manifestaciones del pueblo, razón por la que señalaba que CONDEPA respondía a una organización de abajo para arriba y no era un partido formado por una élite. Con un discurso fuertemente influenciado por el katarismo que enfatizaba la ruptura de toda forma de discriminación social y cultural y que denunciaba el odio oligárquico por lo indio, lo cholo y lo mestizo, Conciencia de Patria planteaba la formación de una sociedad más humana, justa e igualitaria que destruya toda forma de colonialismo y neocolonialismo vigentes en el Estado y en el sistema político excluyente y regresivo. Estos planteamientos son suficientes para caracterizar, al menos en este periodo, a CONDEPA como una partido opositor anti-sistema.

Adicionalmente, CONDEPA postulaba el *modelo de desarrollo endógeno* en contraposición al de libre mercado impuesto por el D.S. 21060 que habría profundizado la dependencia externa y convertido a Bolivia en un país de consumidores clausurando toda posibilidad de liberación productiva. El modelo endógeno estaría dirigido a lograr la autosuficiencia mediante la nacionalización del mercado interno y a través de la prohibición de la internación de productos que compitan con la producción nacional, por lo que sería un modelo desde adentro. Por otro lado, planteaba una descentralización administrativa que no derive en una descentralización total puesto que las regiones deprimidas necesitarían del apoyo de los departamentos más ricos.

Otros partidos presentes en las elecciones de 1989 y que vale la pena mencionar fueron el MRTKL que, bajo la candidatura de Victor Hugo Cárdenas, mantenía su propuesta de construir un Estado multinacional, y la Izquierda Unida (IU), que señalaba la necesidad de emprender un proceso de desarrollo inducido desde el Estado con la finalidad de avanzar hacia el socialismo boliviano.

Los resultados finales que arrojó el proceso electoral fueron los siguientes:

Cuadro 4.2
Resultados electorales 1989 (en porcentaje)

Partido	MNR	ADN	MIR	Condepa	IU	MRTKL	Otros
Porcentaje de votos	25.65	25.24	21.83	12.25	8.02	1.62	5.39

Fuente: Corte Nacional Electoral de Bolivia, 2005.

Esta distribución de votos muestra que, a pesar del costo social del programa de estabilización, nuevamente el electorado se inclinó por aquellos partidos que garantizaban el mantenimiento de la estabilidad económica. La votación que obtuvo CONDEPA, por otro lado, evidencia que un porcentaje importante de la población se inclinó por una nueva fuerza que se presentaba como una alternativa a los partidos del sistema político tradicional, lo que implicaba además que el discurso, originado en el katarismo, que denunciaba la discriminación social y cultural en Bolivia empezaba a ampliar su ámbito de recepción.⁴⁶ Los votos conseguidos por Conciencia de Patria posibilitaron que por primera vez en la historia boliviana una mujer indígena de pollera (popularmente llamadas “cholas”) ingrese al Parlamento. Se trataba de Remedios Loza.

Sin embargo, nuevamente la elección del presidente quedó en manos del congreso debido a que ninguna de las candidaturas obtuvo el 51 por ciento de los votos. Esta vez, la ruptura unilateral del Pacto por la Democracia de parte del MNR le costaría la presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada puesto que Hugo Banzer decidió apoyar a Jaime Paz y construir una coalición de gobierno encabezada por el líder mirista. La suscripción del

⁴⁶ Debemos tomar en cuenta además que a finales de los ochenta la CSUTCB ya empezaba a fortalecerse y que la COB ya había considerado en su proyecto político la construcción de un Estado multinacional, lo que provocaba que la reivindicación indígena-campesina de reconocimiento a la diversidad étnica y cultural comience a insertarse en la agenda política.

Acuerdo Patriótico entre el MIR y ADN hizo posible que el postulante que había obtenido el tercer lugar sea proclamado presidente.⁴⁷ Este pacto demostró que a futuro era posible cualquier acuerdo imaginable entre los partidos para llegar al poder, y que las diferencias ideológicas entre ellos eran fácilmente superadas.⁴⁸ A su vez, los partidos que suscribían los pactos políticos justificaban su acción arguyendo que la responsabilidad nacional de preservar la estabilidad económica y la gobernabilidad los forzaba a ello puesto que no era deseable una crisis económica y un gobierno inestable como el de la UDP. De esta forma, una vez más el ejecutivo se aseguraba una mayoría legislativa que apruebe sus políticas y se subordine a él.

El pacto MIR-ADN confirmó un patrón de conducta política iniciado en 1985 que consideraba a la estabilidad económica y política como un activo nacional contra el cual nadie podía atentar, lo que permitía a los partidos superar cualquier tipo de diferencia y pactar unos con otros con el justificativo del pragmatismo y la sensatez. Bajo esta premisa, el gobierno del Acuerdo Patriótico dio continuidad al modelo económico implementando políticas dirigidas a consolidar la estabilidad y promover el crecimiento y la modernización del Estado. En este sentido se aprobaron algunas leyes dirigidas a potenciar sectores clave (como la de hidrocarburos, la de exportaciones, la de bancos y entidades financieras y la de inversiones) y otras que marcaban el inicio de las reformas de segunda generación (como la de privatización). Adicionalmente, se vio la necesidad de reformar parcialmente la Constitución para adecuar la estructura del Estado al nuevo contexto, proceso que culminaría en 1994.

En 1992, el gobierno de Jaime Paz aprobó la *Estrategia Nacional de Desarrollo* (END), la que estaba dirigida a dar continuidad al proceso de reformas iniciado en 1985 con el D.S. 21060 reafirmando los planteamientos de la EDES 1989-2000 y asumiendo las directrices trazadas por la economía de mercado, la cual habría emergido como la “gran ordenadora de la realidad económica de la mayoría de las regiones en el mundo”. Conjuntamente a la libertad de precios y la apertura al exterior que buscaban consolidar al mercado como el

⁴⁷ CONDEPA también ingresó en la coalición de gobierno, pero se retiró de ella en 1991.

⁴⁸ Debe mencionarse que varios dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria fueron asesinados durante el gobierno dictatorial de Hugo Banzer, razón por la que en años anteriores Jaime Paz había llegado a señalar que entre ADN y MIR “corrían ríos de sangre”.

mejor asignador de recursos, la END planteaba el inicio de un programa de privatización - dirigido a la atracción de Inversión Extranjera Directa que serviría para mejorar la eficiencia y competitividad del conjunto de la economía. Adicionalmente, se señalaba que el Estado debería adecuar su funcionamiento para garantizar tanto la existencia de un entorno macroeconómico estable como la permanencia de reglas claras para el proceso de toma de decisiones de los agentes económicos. A su vez se afirmaba que si bien la estabilidad alcanzada aun no se había traducido en mejores niveles de vida para la población, la continuidad de las reformas era fundamental para alcanzar el crecimiento y el desarrollo social sostenido.

Si bien durante el gobierno del Acuerdo Patriótico se alcanzó un ritmo de crecimiento más importante y estable que el del gobierno de Victor Paz, los niveles de ingreso per cápita a finales de esta gestión aun no habían conseguido nivelar los registros anteriores a la crisis de los ochenta.⁴⁹ Sin embargo, la continuidad de la política económica, la complacencia del legislativo ante el ejecutivo que garantizaba el pacto MIR-ADN y la subordinación de las Fuerzas Armadas al gobierno, posibilitaron que permanezca el clima de estabilidad económica y política. Los conflictos sociales que emergieron con la COB y los campesinos fueron resueltos por la fuerza (en 1989 Jaime Paz también se vio obligado a dictar un estado de sitio) o gracias a la mediación de la Iglesia Católica, institución que así se convirtió en propiciadora del diálogo, el cual, sobra decir, por lo general beneficiaba a la posición del gobierno. Otra característica del gobierno del Acuerdo Patriótico fue el escandaloso nivel de corrupción e impunidad alcanzado por los partidos gobernantes.

En las elecciones de 1993 los partidos tradicionales fueron una vez más los principales protagonistas. El MNR presentó nuevamente como candidato presidencial a Gonzalo Sánchez de Lozada, pero la sorpresa fue que su acompañante a la vicepresidencia fue Victor Hugo Cárdenas, líder del MRTKL y uno de los principales impulsores del katarismo. La otra novedad fue que ADN y MIR mantuvieron su alianza y llevaron conjuntamente a Hugo Banzer como aspirante a la presidencia. Otros partidos presentes fueron CONDEPA, con Carlos Palenque a la cabeza, el Movimiento Bolivia Libre (MBL),

⁴⁹ La tasa de crecimiento promedio entre 1989 y 1993 fue de 3.92 por ciento y el ingreso per cápita en 1993 fue de 864.82 dólares, cifra aun lejana a la registrada en 1980 que era de 1013.80 dólares.

que postulaba a Antonio Quiroga que fuera candidato por IU en las elecciones anteriores, y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), partido de reciente creación que presentaba a Max Fernández.

Respecto a esta última candidatura es preciso señalar que, al igual que ocurrió con el caso de CONDEPA en las elecciones de 1989, UCS intentó explotar el desgaste de los partidos tradicionales y el descontento de los sectores más pobres. Max Fernández, al igual que Carlos Palenque, era un empresario exitoso proveniente de las clases populares que tendía a mostrar su identificación con el pueblo. Dueño de la empresa cervecera más grande de Bolivia, Fernández se dedicaba a realizar obras de beneficencia por todo el territorio e incluso a edificar obras públicas gratuitamente (construcción de coliseos, plazas, pavimentado de calles, etc.), mostrando la disposición que él, como parte del pueblo, tenía para atender a la gente y la despreocupación de los gobernantes por los pobres. Este tipo de acciones eran su principal forma de interpelar a la población dado que su propuesta programática no contenía ninguna novedad respecto a lo que se venía discutiendo en la esfera pública. UCS proponía la descentralización administrativa, estabilidad laboral, la despolitización del poder judicial y desarrollar la capacidad del Estado para actuar selectivamente a nivel económico. Donde se destaca su posición contraria a los partidos políticos es en su planteamiento de que la democracia representativa sólo habría significado la creación de grupos dominantes y de poder que no respondieron a las necesidades del país, razón por la que propuso construir una democracia participativa en la que los partidos ya no gocen del monopolio en el manejo del Estado. Para Unidad Cívica Solidaridad, una reforma como ésta requeriría de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la misma que debería modificar el mecanismo de elección del presidente eliminando la segunda vuelta congresal y permitiendo que, para que el pueblo sea el que elija directamente, el proceso electoral se resuelva por mayoría simple, con lo cual se eliminaría la posibilidad de que se suscriban pactos políticos que sólo serían útiles para encubrir la corrupción.

Ninguno de los partidos tradicionales ignoró la crisis de legitimidad por la que atravesaban y que comprometió a todo el sistema político, razón por la que empezaron a proponer reformas dirigidas a acercar los partidos a la población. Así, el Acuerdo Patriótico (ADN y MIR) y el MNR plantearon un sistema mixto de elección de parlamentarios en el que la

mitad de los miembros de la cámara de diputados se elijan uninominalmente y la otra mitad - más la totalidad de la cámara de senadores continúen siendo elegidos por listas cerradas.⁵⁰ El resultado que se esperaba era que los diputados que directamente deben su mandato a los ciudadanos modifiquen de manera estructural el comportamiento de todo el parlamento, que así se vería obligado a atender las necesidades de los electores. De la misma forma, se señalaba que este mecanismo ayudaría a que paulatinamente se elimine la práctica por la cual el jefe de partido determinaba arbitrariamente los componentes de su lista. Por otro lado, una necesidad urgente que también había alcanzado consenso político fue la descentralización administrativa.

El Acuerdo Patriótico mantuvo la propuesta adenista de desarrollar una economía social de mercado en la que el Estado intervenga cuando la oferta del mercado no satisfaga a la población. También señalaba como urgentes, a nivel económico, las siguientes tareas: *i)* reforma de la seguridad social y cambio del sistema de reparto simple por uno de capitalización individual, *ii)* privatización de empresas públicas que no sean monopolios naturales y venta parcial de las empresas estratégicas del Estado para poder conseguir recursos financieros sin perder el control estatal sobre las mismas, y *iii)* mantener la estabilidad económica. A nivel social se planteaba una reforma educativa que considere la presencia de culturas y lenguas nativas.

El MNR, por su parte, señaló que de continuar el insuficiente crecimiento registrado en los años del gobierno de Jaime Paz se podría erosionar la base de la estabilidad económica, lo que exigía urgentes medidas que dinamicen la economía. En este sentido, se proponía la capitalización de las empresas públicas monopólicas, mecanismo que consistiría en la venta del 49 por ciento del paquete accionario a socios privados y que permitiría obtener capitales frescos sin que el Estado boliviano pierda la propiedad de éstas. Otra medida considerada de vital importancia era la *participación popular*, proceso dirigido a satisfacer la exigencia de la población por participar activamente en las decisiones que tienen que ver directamente con su bienestar, y que se basaría en la conformación de comités ciudadanos a nivel de las comunidades y municipios cuya función sería la de fiscalizar las acciones de las

⁵⁰ Debe hacerse notar que la asignación de escaños parlamentarios en Bolivia adopta un sistema proporcional, por lo que el porcentaje de congresistas que cada partido obtiene es muy cercano a su porcentaje de votos. Hasta las elecciones de 1993 todos los senadores y diputados eran elegidos por listas cerradas.

autoridades locales. La participación popular, a la vez que permitiría una efectiva lucha contra la corrupción, sería el principal componente de la descentralización y el paso que posibilitaría la construcción de la democracia participativa, la misma que no se concibe como opuesta sino complementaria a la democracia representativa. Adicionalmente, el MNR señaló la urgencia de efectuar una reforma educativa que contemple la educación intercultural bilingüe y la necesidad de reconocer la diversidad y multiculturalidad boliviana.

Finalmente, CONDEPA mantuvo en 1993 su propuesta de desarrollar un modelo endógeno de desarrollo y de derogar el D.S. 21060. Los resultados electorales fueron los siguientes:

Cuadro 4.3
Resultados electorales 1993 (en porcentaje)

Partido	MNR	Acuerdo Patriótico	Condepa	UCS	MBL	Otros
Porcentaje de votos	35.55	21.05	14.29	13.77	5.36	9.98

Fuente: Corte Nacional Electoral de Bolivia, 2005.

El resultado electoral una vez más mostró la inclinación del electorado por los partidos tradicionales, los mismos que eran vistos como garantía para mantener la estabilidad; sin embargo, el descontento de un porcentaje cada vez mayor de la población contra el sistema político se vio expresado en la votación que alcanzaron CONDEPA y UCS, partidos que se presentaban como una opción a la política tradicional. Entre ambos sumaron más del 28 por ciento de los votos, lo que les valió una importante representación en el congreso.

El porcentaje de votos obtenidos por los diferentes partidos nuevamente obligó a que la elección presidencial sea resuelta en el Parlamento. Esta vez, Gonzalo Sánchez de Lozada pudo aglutinar una coalición política junto a UCS y MBL que le permitió asumir la presidencia, lo que a su vez posibilitó que por primera vez en la historia boliviana un indígena, Victor Hugo Cárdenas, asuma la vicepresidencia de la república.

El nuevo gobierno del MNR se caracterizó por impulsar profundos cambios dirigidos a modernizar la economía, reformar el sistema político y modificar la estructura institucional del Estado. A nivel económico se aprobó la capitalización de las empresas públicas

monopólicas, la reforma del sistema de seguridad social y una modificación en el sistema de reparto y tenencia de la tierra; a nivel político se alteró la forma de elección de los parlamentarios adoptándose un sistema mixto y también se estableció que el periodo de duración de la gestión presidencial sería a futuro de cinco años; y a nivel institucional se aprobó la participación popular y la descentralización administrativa. Adicionalmente se implementaron dos cambios muy significativos en los que tuvo mucha influencia el vicepresidente, el primero fue el reconocimiento en la Constitución del carácter multiétnico y pluricultural de la república, y el segundo fue la puesta en marcha de una reforma educativa que contemplaba la educación intercultural bilingüe, medidas con las que se empezaba por primera vez a reconocer la identidad y riqueza cultural de las poblaciones originarias.

Al igual que los anteriores gobiernos, el MNR mantuvo la estabilidad económica y política gracias a la aplicación de medidas de libre mercado, a la mayoría legislativa que le garantizaba su pacto con otros partidos y a la subordinación de las Fuerzas Armadas que le aseguraba el respaldo del aparato represivo en momentos de convulsión social.⁵¹ En particular, se intensificaron los conflictos con el sector cocalero debido a una ofensiva en los esfuerzos de erradicación. Sin embargo, en términos de crecimiento económico, el gobierno de Sánchez de Lozada fue el más exitoso desde la finalización de la crisis económica puesto que la economía creció a una tasa promedio anual de 4.59 por ciento, ritmo que, no obstante, fue insuficiente para recuperar el nivel de ingreso per cápita que se tuvo en 1980.⁵²

Las elecciones de 1997 no ofrecieron prácticamente ninguna propuesta novedosa y la discusión de los partidos se centró en ataques acerca de lo poco que hicieron unos y otros en sus distintas gestiones de gobierno. Había consenso respecto a que democracia, mercado y globalización eran irreversibles y a que debía seguirse el rumbo iniciado en 1985; sin embargo, sí se dieron dos novedades en este proceso electoral. La primera fue la desaparición de los dos líderes de los partidos que se presentaban como alternativa al sistema político tradicional. Max Fernández y Carlos Palenque fallecieron en 1995 y en

⁵¹ Este respaldo era muy importante en momentos en que se dictaba un estado de sitio. En 1995, Gonzalo Sánchez de Lozada, al igual que sus dos inmediatos antecesores, recurrió a esta medida.

⁵² En 1997 el ingreso per cápita fue de 933 dólares.

1996 respectivamente, y sus partidos enfrentaron las elecciones intentando explotar la memoria de sus fundadores. La segunda novedad fue que por primera vez se presentaba a elecciones nacionales el Instrumento Político campesino, bajo la sigla de Izquierda Unida (IU) y llevando a la presidencia a un dirigente del departamento de Cochabamba, Alejo Veliz. Asimismo, producto de la reforma en el sistema político realizada, y de acuerdo a la estrategia trazada por la CSUTCB, IU incorporó a varios dirigentes campesinos como candidatos a diputados uninominales y plurinominales. El resultado del proceso electoral fue el siguiente:

Cuadro 4.4
Resultados electorales 1997 (en porcentaje)

Partido	MNR	ADN	MIR	Condepa	UCS	IU	Otros
Porcentaje de votos	18.20	22.26	16.77	17.16	16.11	3.71	5.79

Fuente: Corte Nacional Electoral de Bolivia, 2005.

Estos datos muestran que las elecciones de 1997 fueron las más disputadas desde el restablecimiento de la democracia. Entre el primer y el quinto lugar habían tan sólo 6.15 puntos porcentuales, lo que significaba que el gobierno que emergiera de la segunda vuelta congresal debía constituir una gran coalición de partidos con el objeto de garantizarse la mayoría legislativa necesaria para gobernar. De esta forma se conformó un pacto político entre ADN, MIR, CONDEPA y UCS conocido a nivel mediático como “Megacoalición” que posibilitó que finalmente Hugo Banzer acceda a la presidencia. Adicionalmente, formaba parte de esta coalición gobernante un partido nuevo que había logrado posicionarse de manera importante en la ciudad de Cochabamba y que había establecido una alianza preelectoral con ADN: Nueva Fuerza Republicana (NFR).

Debe considerarse que el desgaste que sufrieron los partidos políticos tradicionales (MNR, ADN y MIR) a mediados de los noventa ocasionó que los partidos que se presentaban como alternativos triunfen en diversas elecciones municipales y consoliden liderazgos regionales. Así, CONDEPA era prácticamente imbatible en las ciudades de La Paz y El Alto, UCS se consolidó en Santa Cruz y NFR se constituyó como la principal fuerza política en Cochabamba. De esta manera, las tres ciudades más importantes del país se

encontraban en manos de partidos políticos alternativos que intentaban afianzarse en sus regiones para luego ampliar su influencia a nivel nacional, partidos que, por lo demás, coincidían en sus ataques al sistema político tradicional. Sin embargo, ante el descenso en la preferencia electoral de los partidos tradicionales en las elecciones nacionales de 1997, éstos, con ayuda de todo un despliegue mediático, recurrieron al pasado, al trauma de la ingobernabilidad, y señalando la amenaza a la estabilidad que implicaban los gobiernos débiles, forzaron a CONDEPA, UCS y NFR (que además carecían de bases ideológicas coherentes) a integrarse a la Democracia Pactada.⁵³

El gobierno de Banzer continuó aplicando las políticas de mercado que sus antecesores habían consolidado, sin embargo, esta gestión presidencial no gozaría de la inercia y la estabilidad de años anteriores. Debido a que la Megacoalición, en coordinación con el gobierno de EEUU, se propuso erradicar definitivamente la producción de coca hasta el año 2002, los enfrentamientos entre cocaleros y Fuerzas Armadas llegaron a su punto más crítico, lo que sumado a las protestas y movilizaciones urbanas producto de la privatización del agua, provocaron serios problemas al gobierno y desestabilizaron la estabilidad política y social. En abril de 2000 se produjo la “Guerra del Agua” en la ciudad de Cochabamba en la que prácticamente toda la población de esta ciudad se enfrentó a las fuerzas represivas protestando por el descomunal incremento en las tarifas de agua que se produjo luego de la privatización de este servicio y en la que, tras más de una semana de paralización de la ciudad y conflictos callejeros, la Fuerzas Armadas se rehusaron a continuar reprimiendo a la gente y decidieron no respaldar el estado de sitio decretado por el gobierno, al que no le quedó otra opción que anular el contrato de privatización. Este hecho fue considerado como la primera victoria social sobre el neoliberalismo y antecedió a otro conflicto de mayor magnitud que ocurrió entre septiembre y octubre del mismo año cuando el movimiento campesino decidió bloquear todos los accesos a la ciudad en La Paz demandando diversas reivindicaciones. El cerco a La Paz duró más de tres semanas, y luego que dicha ciudad se quedó sin alimentos, nuevamente las Fuerzas Armadas decidieron no acatar el estado de sitio dispuesto por el gobierno, lo que obligó una vez más a Banzer a aceptar todas las demandas campesinas.

⁵³ Claro está que estos tres partidos fueron muy bien retribuidos por su ingreso a la lógica de pactos.

Estos acontecimientos debilitaron aun más al sistema político y a los partidos tradicionales, a la vez que catapultaron a líderes campesinos y fortalecieron su proyecto político. Debe considerarse además que cuatro dirigentes campesinos habían logrado ingresar al parlamento en calidad de diputados uninominales en las elecciones de 1997,⁵⁴ con lo que este sector empezó a combinar la acción parlamentaria de denuncia con la presión de los bloqueos y movilizaciones. Articulando un discurso que culpaba a los partidos tradicionales (entre los que incluían también a CONDEPA, UCS y NFR), a la lógica de pactos y al neoliberalismo de toda la miseria y exclusión en la que vivía el grueso de la población, los diputados campesinos, y en particular Evo Morales, empezaron a socavar las bases de la estabilidad que imperaba desde 1985. Todos los partidos políticos, del oficialismo y la oposición, no se quedaron inmóviles observando cómo estos dirigentes los ponían en evidencia, y en enero de 2002, usando una argucia legalista, expulsaron a Evo Morales del parlamento, expulsión que fue tomada como una ofensa por el movimiento campesino. Este hecho demostró que los partidos habían constituido un bloque que iba más allá de las coaliciones políticas y que no estaba dispuesto a cambiar su lógica de comportamiento, a la vez que evidenció el desprecio y racismo que los políticos sentían por un campesino que había osado sentarse al lado suyo. Con ello, el discurso de Morales, que señalaba al neoliberalismo y a la democracia pactada como la fuente de todos los males, fue tomando mayor fuerza y logrando buena recepción incluso en zonas urbanas.

Hugo Banzer no pudo concluir su periodo de mandato debido a una enfermedad que acabó con su vida, por lo que el vicepresidente, Jorge Quiroga, tuvo que asumir el último año de gobierno. El gobierno de ADN no pudo ser más desafortunado ya que al clima de conflicto social y político que caracterizó esta gestión se le sumó la recesión económica mundial de finales del noventa e inicios de esta década que afectó negativamente a Bolivia.⁵⁵ Este panorama de crisis política y social se agudizó al punto de que empezaron a oírse voces que demandaban profundos cambios en la estructura del Estado y del sistema político dirigidos a otorgar autonomía a las regiones, acabar con el monopolio que los partidos tenían sobre la representación política, convocar a una Asamblea Constituyente para la refundación del

⁵⁴ Estos dirigentes fueron Félix Sánchez, Néstor Guzmán, Román Loayza y Evo Morales.

⁵⁵ El crecimiento promedio anual del PIB durante el gobierno de ADN fue de 2.82 por ciento, cifra inferior a la registrada durante los dos gobiernos anteriores. Asimismo, el ingreso per cápita en 2002 sólo fue seis dólares superior al de 1997.

país, incorporar el Referéndum como mecanismo de consulta ciudadana e incluso cerrar el parlamento. En estas condiciones el país enfrentó las elecciones presidenciales de 2002.

Los partidos tradicionales llegaron fuertemente desgastados y debilitados al proceso electoral de 2002, mientras que la candidatura de Evo Morales a la cabeza del Movimiento al Socialismo (MAS), nueva sigla que había adoptado el Instrumento Político campesino, se fortalecía constantemente no sólo por el apoyo que recibía en sectores rurales, sino también por las numerosas adhesiones que iba recibiendo en zonas urbanas. Para ello fue particularmente importante la labor de fiscalización que había realizado Morales en el Parlamento, tarea que lo destacó debido a la tradicional complacencia del congreso respecto al ejecutivo. El MNR volvió a presentar como candidato a Gonzalo Sánchez de Lozada, el MIR también recurrió nuevamente a Jaime Paz, NFR, que por primera vez participaba con su propia sigla en elecciones nacionales, postuló al alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa, UCS llevó a Jhonny Fernández, hijo del fallecido Max Fernández y alcalde de Santa Cruz, y un sector campesino a la cabeza del nuevo Secretario Ejecutivo de la CSUTCB, Felipe Quispe, también se organizó para participar en las elecciones bajo el nombre de Movimiento Indígena Pachakuti (MIP).⁵⁶ ADN, que había sufrido la desaparición de su líder histórico y el mayor desprestigio por una mala gestión de gobierno, se presentó en estas elecciones tremendamente debilitada y dividida a la cabeza de Ronald MacLean.

El MNR partía de un diagnóstico del momento de crisis centrado en el área económica, por lo cual diseñó un plan de gobierno dirigido a combatir la crisis recesiva y a dinamizar la economía a través de incentivos a la demanda agregada. La visión excesivamente economicista de este partido le llevó a ignorar otras reformas más profundas que ya venían siendo reclamadas por distintos sectores sociales. Otras áreas consideradas críticas fueron la lucha contra la corrupción y la exclusión social.

El MIR, de forma contraria al MNR, sí consideraba la realización de una Asamblea Constituyente para construir un nuevo Estado, también señalaba la necesidad de nuevas reformas dirigidas a otorgar autonomía a las regiones y la urgencia de romper con el

⁵⁶ Felipe Quispe había jugado un papel muy importante en el cerco a La Paz realizado en septiembre y octubre de 2000. Sus diferencias con Evo Morales impidieron que el movimiento campesino presente una candidatura única a la presidencia.

monopolio de los partidos en la representación política. En el ámbito económico planteaba la utilización de las reservas de gas (que habían alcanzado la cifra de 52 trillones de pies cúbicos) para financiar la industrialización del país, y finalmente, proponía promocionar la industrialización de la coca.

La propuesta de NFR combinaba la adopción de medidas económicas con la aplicación de reformas estructurales en el Estado boliviano. A nivel económico señalaba la insuficiencia del modelo neoliberal para generar bienestar y la necesidad de reformular el papel del Estado y de construir un modelo de economía mixta donde la participación privada sea tan importante como la estatal. Respecto a las reformas del Estado, NFR subrayaba la urgencia de reconstituir la República en una Asamblea Constituyente y de incorporar tanto el Referéndum como las autonomías departamentales.

UCS, con el fin de desmarcarse del desgaste del resto de los partidos, propuso la reducción del número de diputados (de 130 a 100), la eliminación de los sueldos de todos los diputados suplentes (lo que liberaría recursos que se destinarían para educación) y la elección uninominal de todos los legisladores. Asimismo, planteó profundizar la descentralización, abrir la participación electoral a expresiones no partidarias y que la elección del presidente se realice mediante una segunda vuelta en caso de que ninguno de los candidatos hubiera obtenido la mayoría absoluta.

El Movimiento al Socialismo, que aglutinaba a diversas organizaciones sociales, expresó como parte de su proyecto político la eliminación del neoliberalismo y la refundación del Estado a partir de la identidad, valores y concepciones de las naciones originarias. Para el MAS, el neoliberalismo sería la última expresión del sistema de opresión de las clases dominantes, el cual sólo habría servido para entregar nuestros recursos naturales a la voracidad de las transnacionales. Por ello, se planteó como tarea indispensable la recuperación de estos recursos y de las empresas capitalizadas, la aplicación de una nueva distribución de la tierra y el rescate de la dignidad nacional a través del cultivo e industrialización de la coca como patrimonio de las culturas andinas, labor que debería desarrollarse paralelamente a la lucha efectiva contra el narcotráfico. Adicionalmente, señaló que la refundación de la nación debería realizarse de cara a los intereses de las

mayorías marginadas y en el marco de una Asamblea Constituyente en la que participarían todas las organizaciones sociales, naciones originarias y grupos étnicos. De esta forma, la Asamblea Constituyente sería la instancia donde el pueblo definiría con autonomía propia el tipo de democracia que quiere construir, el tipo de economía que quiere desarrollar y el tipo de estructura estatal y de gobierno que desea.

Finalmente, el MIP señalaba que para terminar con la discriminación política y cultural de naciones de segunda clase se debería adoptar la democracia participativa y acabar con la visión dual que dio origen a dos Bolivias: una relegada y otra excluyeme. Asimismo, planteaba preservar el cultivo de la hoja de coca y respetar la justicia comunitaria y el derecho consuetudinario.

Como puede apreciarse, el debate durante este proceso electoral giró alrededor de reformas profundas en la estructura estatal que no se limitaban al ámbito económico, sino que tenían que ver con el modo de relacionamiento de la sociedad y el Estado. El resultado de las elecciones fue el siguiente:

Cuadro 4.5
Resultados electorales 2002 (en porcentaje)

Partido	MNR	ADN	MIR	Condepa	UCS	NFR	MAS	MIP	Otros
Porcentaje de votos	22.46	3.40	16.32	0.37	5.51	20.91	20.94	6.09	4.00

Fuente: Corte Nacional Electoral de Bolivia, 2005.

Esta elección marca la virtual desaparición de CONDEPA y ADN, a la vez que muestra nuevamente un resultado muy ajustado (entre el primer y el tercer lugar hay 1.55 puntos porcentuales) que debía resolverse una vez más en el congreso. Adicionalmente, el caudal de votos obtenidos por el Movimiento al Socialismo y por el MIP permitieron que por primera vez en la historia el congreso se viera de indígena puesto que casi el treinta por ciento de los parlamentarios eran de origen campesino.

Ante la evidente posibilidad de que Evo Morales sea presidente, todos los partidos que ya formaban parte del sistema político antes de estas elecciones resolvieron unirse alrededor del MNR para evitar que el MAS acceda al poder, con lo que viabilizaron la segunda

presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada. De esta forma, la coalición gobernante quedó formada por el MNR, MIR, UCS y NFR (aunque este último partido recién ingresó a ella en 2003), quedando tan sólo el MAS y el MIP fuera de los marcos de la Democracia Pactada. Este comportamiento confirmó que tanto los partidos tradicionales como los que alguna vez habían sido vistos como alternativos se desenvolvían bajo la misma lógica de poder y enriquecimiento. La arrolladora mayoría congresal que dispuso el ejecutivo en virtud de este gran pacto de partidos obligó a los dos nuevos partidos anti-sistema a abandonar su acción congresal y a ejercer la oposición desde las calles.

Los nuevos episodios de conflicto y violencia no tardarían en aparecer. En febrero de 2003 el gobierno aprobó un incremento a los impuestos, lo que sorprendentemente ocasionó el rechazo de los policías que inmediatamente se amotinaron en la ciudad de La Paz reprobando dicha medida. Con el fin de reprimir tal actitud, se ordenó a las FFAA intervenir el motín policial, lo que provocó un verdadero enfrentamiento a tiros entre policías y militares en las mismas puertas del palacio de gobierno que arrojó la cifra de más de treinta muertos en ambos bandos. Con esto quedaba claro que éste, al igual que el anterior gobierno, ya no tenía completo control sobre las fuerzas represivas. Aun con mayor violencia se desarrollaron los acontecimientos de octubre del mismo año, ocasión en la que la población, cansada de observar el saqueo de sus recursos naturales, desarrolló un movimiento de resistencia en las ciudades de El Alto y La Paz denominado “Guerra del Gas” debido a la inminente aprobación de un proyecto de exportación de gas natural a EEUU a través de puertos chilenos. Dicho suceso arrojó más de sesenta muertos y culminó en la renuncia y autoexilio del presidente Sánchez de Lozada, resultado que sirvió para que las organizaciones sociales movilizadas lograran imponer una agenda de reformas urgentes al nuevo presidente, Carlos Mesa (que fue vicepresidente de Sánchez de Lozada), entre las que figuraban la convocatoria a una Asamblea Constituyente para refundar el Estado, la realización de un Referéndum para que la población decida qué hacer con los recursos del gas y la aprobación de las autonomías regionales.

Producto de la caída del gobierno del MNR, éste y todos los otros partidos de la coalición de gobierno quedaron tremendamente debilitados y desgastados, lo que, sumado a la desaparición anterior de ADN y CONDEPA, significó el colapso del sistema político

boliviano. El MAS salió muy fortalecido de este periodo de conflictos y presionó para que las elecciones, que debían realizarse en 2007, se adelanten y se lleven a cabo en diciembre de 2005, provocando la renuncia de Mesa y la posesión en situación de emergencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál sería la reacción del resto de los partidos?

El MNR intentó rearticularse y se presentó a la contienda electoral con un candidato desconocido, Michiaki Nagatani, el MIR no pudo organizarse y determinó no participar en las elecciones, UCS tampoco pudo reconstituirse y NFR determinó replegarse nuevamente a la ciudad de Cochabamba. Sin embargo, algunos sectores de estos partidos se insertaron en dos nuevas fuerzas: Poder Democrático y Social (PODEMOS) a la cabeza del ex-presidente Jorge Quiroga, y Unidad Nacional (UN) bajo la candidatura del empresario ex-mirista Samuel Doria Medina. Estos dos grupos políticos acogieron en sus filas a todos los ex-miembros de los partidos políticos desaparecidos que intentaban permanecer en el poder y evitar la victoria de Evo Morales.

El discurso del Movimiento al Socialismo señalaba que en los últimos años la clase dominante y el sistema de partidos se subordinaron sin condiciones al modelo neoliberal, ante lo cual planteó la necesidad de ingresar a una nueva era estatal recuperando e industrializando los recursos naturales, regulando el mercado, controlando desde el Estado el excedente económico e impulsando un nuevo patrón de desarrollo en el que mercado y Estado, mercado interno y externo, empresa estatal y privada, nacional y extranjera, se conciben como complementarias. Para este partido, los años de neoliberalismo no sólo habrían ampliado las brechas sociales, sino también las regionales, por lo que urgía una descentralización política, administrativa, fiscal y económica del Estado boliviano dirigida a reducir las asimetrías regionales. Ello, sin embargo, no significaba el debilitamiento del Estado, por cuánto éste sería el protagonista central del proceso de desarrollo nacional, para lo cual debía volver a participar en algunas actividades productivas mediante empresas públicas en sectores estratégicos como ser hidrocarburos y minería. Adicionalmente el MAS sostenía que en Bolivia se habían puesto en cuestión no sólo la democracia representativa y el neoliberalismo, sino también la forma en que se construyó el país a lo largo de su vida republicana que permitió la discriminación, el racismo y la exclusión económica, política, social y cultural. Por ello, afirmó que Bolivia atravesaba por una crisis

que tocaba a las raíces mismas de su constitución que debía ser resuelta en el marco de una Asamblea Constituyente.

A pesar de no observarse en la propuesta del MAS la obsesión por mantener la estabilidad económica que había caracterizado el debate político en años anteriores, este aspecto no era del todo descuidado por cuanto su programa de gobierno señalaba que la estabilidad es un bien colectivo que debemos mantener y precautelar. En función de ello se planteó la necesidad de reducir los gastos del Estado a través de una nueva escala salarial para todo el sector público, eliminando los gastos reservados, prohibiendo la subvención a los partidos políticos, reduciendo los sueldos de diputados y senadores y anulando las dietas de los diputados suplentes.

La candidatura de Jorge Quiroga señaló que la difícil situación que vivía Bolivia se debía a una crisis económica agudizada por una crisis del sistema político, razón por la que, al igual que el MAS, propuso implantar un nuevo modelo económico en el que el Estado tenga la obligación de crear las condiciones necesarias para promover un crecimiento económico equitativo a través del incentivo a la actividad productiva, del mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y de la promoción de un mercado transparente y competitivo. Asimismo, en clara alusión a Evo Morales (cuya base social más importante eran los cocaleros) y al MAS (cuyo método de presión más utilizado era el bloqueo de carreteras), planteó profundizar el proceso democrático y fortalecer las instituciones del Estado con el fin de alcanzar un Estado de Derecho sin narcotráfico ni bloqueos. De la misma forma, postuló la revisión de las estructuras políticas e institucionales estatales y la realización de cambios destinados a crear un nuevo Estado con Constituyente y Autonomías, en el que además, dado el agotamiento de la lógica de pactos, se pueda contar con un sistema político renovado en el que la totalidad de los parlamentarios sean electos uninominalmente y en el que el presidente, en caso de no alcanzarse el 51 por ciento de los votos, sea elegido en una segunda vuelta electoral ciudadana. Este nuevo Estado debería resolver además las dos aspiraciones que demandan los pueblos originarios: la inclusión social y económica y la autodeterminación.

Unidad Nacional intentó distanciarse de los partidos tradicionales que habían monopolizado el poder señalando que éstos, al distribuirse discrecionalmente el poder e ilegalmente los recursos públicos, habrían debilitado a la democracia. En su propuesta, planteaba que las futuras medidas económicas deberían centrarse en construir una economía mixta en la que participen empresas privadas y públicas, nacionales e internacionales, pero que fundamentalmente esté orientada a fomentar a los microempresarios. Adicionalmente, proponía fortalecer la democracia a partir del establecimiento de las autonomías regionales, del reconocimiento de la diversidad política, étnica y cultural y de la armonización de la normativa del Estado boliviano con los usos, costumbres y derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. Al igual que el MAS y PODEMOS, afirmaba que todas estas reformas deberían ser realizadas a través de una Asamblea Constituyente.

El MNR, a tiempo de presentarse como el partido fundador de la democracia y la modernidad en Bolivia, señaló el imperativo de avanzar hacia una democracia más inclusiva y de implementar un modelo de desarrollo que supere las limitaciones del actual y se oriente fundamentalmente a potenciar a los pequeños productores, para lo cual se necesitaría de un Estado fuerte (para garantizar el gobierno de las leyes y estimular la producción) y descentralizado política y administrativamente (para impulsar el protagonismo de las regiones).⁵⁷ Así también, afirmó que para superar la concentración excesiva de poder, la subordinación del parlamento al Ejecutivo, el debilitamiento del poder judicial y la pérdida de gobernabilidad, se imponía la exigencia de renovar el sistema político (incorporando la segunda vuelta en las urnas cuando la elección presidencial no se resuelva por mayoría absoluta), de cambiar el sistema de gobierno (transitando del presidencialismo al parlamentarismo) y de perfeccionar el funcionamiento de las instituciones de la democracia representativa. Estos cambios, a su vez, deberían ser producto de la Asamblea Constituyente.

El resultado de las elecciones fue el siguiente:

⁵⁷ Debe aclararse que todos los programas de gobierno que señalaban la necesidad de un Estado fuerte o de un Estado que participe en la economía, ponían énfasis en que ello no significaba el retorno al estatismo ineficiente del pasado.

Cuadro 4.6
Resultados electorales 2005 (en porcentaje)

Partido	MNR	Podemos	MAS	UN	Otros
Porcentaje de votos	6.47	28.59	53.74	7.80	3.40

Fuente: www.cne.org.bo

El resultado de las elecciones de 2005 marca el derrumbe del sistema de partidos, la asunción presidencial del primer indígena en Bolivia y el inicio de numerosos cambios que a partir de enero de 2006 se vienen implementando. Todo este cuadro fue posible gracias a modificaciones paulatinas en la propuesta, discurso y estrategia de los actores políticos. En el siguiente capítulo se analizarán las transformaciones que se dieron en el discurso del orden mundial para comprobar si éste también sufrió alteraciones en la dirección de los cambios discursivos ocurridos en Bolivia.

CAPÍTULO V

LOS CAMBIOS EN EL DISCURSO DEL ORDEN MUNDIAL EN LOS NOVENTA Y SU ESTADO ACTUAL

En el capítulo II se hizo una revisión del discurso del orden mundial que a finales de los setenta y principios de los ochenta respaldó las reformas económicas y las transiciones políticas en muchos de los países de América Latina. Allí se mostró de qué forma organizaciones como la ONU y la OEA comenzaron a demandar el restablecimiento democrático en los Estados dominados por gobiernos autoritarios como el camino más apropiado para garantizar el respeto a los derechos humanos, y qué argumentos esgrimieron el Banco Mundial y el FMI para que los países se ajusten al contexto internacional e inicien un proceso de reformas estructurales dirigidas a liberar las fuerzas del mercado y restringir la acción económica del Estado. Adicionalmente se expuso la creciente importancia que adquirió la lucha contra las drogas en la agenda internacional.

Los capítulos III y IV exhibieron que tanto el restablecimiento democrático como el proceso de reformas económicas iniciado en Bolivia en la década del ochenta y continuado en los noventa se inscribieron dentro de los ámbitos promocionados por el discurso del orden mundial, con lo que democracia y mercado se convirtieron en signos de la modernidad y en reglas de juego de la convivencia social. De la misma forma, la lucha contra la producción de drogas se intensificó, en particular debido al incremento de cultivos de coca que, en su mayor parte, se destinaban a la producción de cocaína, con lo que se privilegió la erradicación forzosa de plantaciones de hoja de coca. Sin embargo, se ha demostrado que todo este proceso no ha estado exento de tensiones, conflictos y enfrentamientos violentos, y que los actores políticos más importantes, en su interacción, han provocado alteraciones en el ámbito discursivo que han posibilitado que se empiecen a tocar temas que no estaban considerados en el discurso del orden mundial en la década del ochenta, como la profundización de la democracia, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, la descentralización del poder, el reinvolucionamiento del Estado en el ámbito económico, etc. Por ello, este capítulo pretende mostrar los cambios y alteraciones sufridos en el discurso del orden mundial que nos permitan posteriormente evaluar si éste ha incorporado los elementos que hoy se encuentran presentes en el ámbito discursivo

boliviano. Nuevamente se recurrirá a los planteamientos en los ámbitos político y económico de las principales instituciones internacionales: ONU, OEA, BM y FMI.

5.1 Los cambios en el componente político del discurso del Orden Mundial

La década del noventa fue testigo del fin de la Guerra Fría y del triunfo del “mundo libre” sobre la “amenaza comunista”, contexto bajo el cual la democracia representativa va a empezar a considerarse como la forma universal de organización política. A continuación se revisarán los planteamientos que en el seno de las Naciones Unidas y de la OEA respaldan ésta posición.

5.1.1 La promoción y consolidación de la Democracia en las Naciones Unidas

Si bien en la década del ochenta la ONU no realizaba una defensa abierta de la democracia, sus consideraciones relativas al respeto de los derechos humanos tendían a mostrar que el establecimiento de un sistema democrático era una garantía para las libertades fundamentales del ser humano. En la década del noventa esta situación cambió y la Asamblea General de las Naciones Unidas, a pesar de señalar explícitamente que cada país tiene el derecho soberano de adoptar libremente el sistema económico, social y político que considere más apropiado y que no hay un sistema político que sea igualmente adecuado para todas las naciones, empieza a destacar que la celebración de elecciones auténticas y periódicas, en las que todos los ciudadanos tengan oportunidades iguales para presentarse como candidatos y para exponer sus opiniones políticas, constituye un elemento necesario e indispensable para determinar la voluntad del pueblo y para proteger los derechos e intereses de los gobernados. Estas afirmaciones denotan la existencia de una tensión entre el respeto al derecho de cada país de establecer su propio sistema socioeconómico y político y la convicción de que debe promoverse la democracia en el mundo para garantizar los derechos humanos. Indudablemente la ONU se veía forzada a plantear ambas cosas pero no cabe duda de que impulsaría con mayor énfasis la segunda.

Con el afán de promover y fortalecer la democracia, y respondiendo a la demanda realizada en la primera Conferencia Internacional de las Democracias Nuevas o Restauradas celebrada en Manila en 1988, las Naciones Unidas empezaron en los noventa a prestar

asistencia electoral y apoyo para continuar y consolidar el proceso de democratización en los Estados que lo solicitaban. Una vez que la ONU asumió un rol abierto por lograr la democratización en los países, ya no era problemático señalar explícitamente la existencia de “lazos indisolubles entre los principios consagrados en la declaración Universal de los Derechos Humanos y los fundamentos de toda sociedad democrática”.⁵⁸ Asimismo, el contexto histórico de finalización de la Guerra Fría posibilitó que esta organización señale que las grandes transformaciones que se estaban produciendo en el plano internacional provocaban que todos los pueblos aspiren a un orden internacional basado en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en la promoción y el respeto de los derechos humanos, en la libre determinación de los pueblos, la paz, la democracia, la justicia, la igualdad, el imperio del derecho, el pluralismo, el desarrollo, el mejoramiento de los niveles de vida y la solidaridad.⁵⁹ En este sentido, las Naciones Unidas alentaron a los países que habían emprendido esfuerzos por lograr sus objetivos sociales y políticos mediante la democratización, y demandaron el apoyo y reconocimiento de la comunidad internacional para respaldar dichos procesos.⁶⁰ De igual manera, la ONU ofrecía asistencia para consolidar las nuevas democracias buscando una buena gestión pública y la formación de una cultura política democrática en los países que lo requerían.

La *Declaración del Milenio*, aprobada en 2000, dio mayor respaldo a la postura ya abiertamente democrática de las Naciones Unidas cuando los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros señalaron que la mejor forma de garantizar el derecho de vivir una vida con dignidad, libre del hambre y del temor a la violencia, la opresión o la injusticia, es contar con gobiernos democráticos y participativos basados en la voluntad popular, razón por la que no se escatimarían esfuerzos por promover la democracia y fortalecer el imperio del derecho.⁶¹

Este amplio respaldo internacional a la consecución y mantenimiento de la democracia no ignoraba la existencia de amenazas internas a la estabilidad política de las sociedades, con

⁵⁸ Resolución 50/133 de 1995.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Debe mencionarse que también se pidió similar respaldo para aquellos Estados que habían iniciado la reforma de sus economías.

⁶¹ Naciones Unidas, 2000.

lo cual se señaló a la corrupción como el principal peligro al orden democrático. Por ello en 2003 se aprobó la *Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción* y se instó a los Estados miembros a firmarla y ratificarla cuanto antes. Adicionalmente se declaró que entre los elementos esenciales de la democracia figuran el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la realización de elecciones periódicas, libres y auténticas por medio de sufragio universal y voto secreto, la existencia de un sistema pluralista de organizaciones y partidos políticos, el respeto del Estado de derecho, la separación de poderes, la independencia del poder judicial, la transparencia y responsabilidad en la administración pública y la presencia de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas.⁶²

Estos planteamientos dejan sentado el compromiso con la democracia que las Naciones Unidas hicieron explícito en la década del noventa, en la que por primera vez esta organización promovió abiertamente la democratización y la consolidación democrática de sus Estados miembros.

5.1.2 La Democracia como prioridad fundamental de la OEA

El mayor involucramiento de la OEA con la democracia propició que esta organización asumiera una promoción y defensa del sistema democrático mucho más importante que la que asumía la ONU. Esto se comprueba durante los noventa en las diversas resoluciones de la Asamblea General de los Estados Americanos que instruían al Secretario General la convocatoria inmediata al Consejo Permanente en caso de producirse hechos que interrumpieran abrupta o irregularmente el proceso político institucional democrático en cualquiera de los Estados miembros para examinar la situación y decidir medidas pertinentes.⁶³ En esta línea, a través del *Compromiso de Santiago* de 1991, se declaró el compromiso indeclinable con la defensa y promoción de la democracia representativa dentro del principio de no intervención, y en la *Declaración de Montrouis* de 1995, se

⁶² Resolución 59/201 de 2004.

⁶³ Durante la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en Québec, se estableció que cualquier alteración o ruptura institucional del orden democrático en un Estado del hemisferio, constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas.

señaló que “el fortalecimiento, el ejercicio efectivo y la consolidación de la democracia constituyen la prioridad fundamental para las Américas”.

En criterio de la OEA, la democracia es el único sistema político que garantiza el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho, a la vez que salvaguarda la diversidad cultural, el pluralismo, el respeto de los derechos de las minorías y la paz en y entre las naciones. Adicionalmente, esta organización incorpora el criterio de que la democracia y el desarrollo se refuerzan mutuamente, con lo que democracia, derechos humanos y desarrollo económico forman un trío de elementos interdependientes. Por ello diversas resoluciones encomiendan que la Organización de Estados Americanos oriente mayores esfuerzos hacia la promoción de las prácticas y los valores democráticos y hacia el fortalecimiento social y económico de los regímenes democráticos ya establecidos.

De la misma manera que las Naciones Unidas, la OEA reconoció que la corrupción debilita la democracia y socava la legitimidad de gobiernos e instituciones, por lo cual planteó combatirla mediante cooperación técnica en el ámbito de la modernización del Estado dirigida a transparentar la gestión pública y asegurar la sanción de los responsables. Asimismo, se señaló la necesidad de desarrollar las capacidades de los gobiernos regionales y locales, de impulsar una más activa participación de la sociedad civil y de mejorar los sistemas de administración de justicia.⁶⁴ Adicionalmente, y con el objetivo de fortalecer los mecanismos democráticos en el hemisferio, se empezó a analizar la implicaciones de una profundización democrática dirigida a promover una democracia participativa, puesto que ella consolidaría los valores democráticos y la solidaridad.

Todo el respaldo a la democracia brindado por la OEA fue expresado en la *Carta Democrática Interamericana* aprobada en 2001, que estableció que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas, que el fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario, y que promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia. Asimismo, se señala que los elementos esenciales de la democracia participativa son: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y a su ejercicio con

⁶⁴ Resoluciones 1401 de 1996 y 1551 de 1998.

sujeción al estado de derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos.

Estos planteamientos nos muestran que la OEA asumió una posición más firme en defensa de la democracia y una reflexión más profunda en torno a los mecanismos necesarios para fortalecerla que las Naciones Unidas. Sin embargo, se debe considerar un elemento adicional referente a la profundización democrática que abordan ambas organizaciones: la inclusión democrática y el reconocimiento de los pueblos indígenas.

5.1.3 La consideración de los pueblos indígenas en la ONU y la OEA

A partir de los noventa se empieza a ver que la problemática indígena merece una atención aparte en las consideraciones relativas a los derechos humanos, la democracia y el desarrollo. Así, a inicios de esta década, las Naciones Unidas deciden impulsar la solución de los problemas con los que se enfrentan las comunidades indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud, y a reconocer el valor y la diversidad de sus culturas y formas de organización social, asumiendo que la promoción y la protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, contribuyen a la estabilidad política y social y enriquecen el patrimonio cultural de la sociedad en su conjunto, por lo que instan a los gobiernos a facilitar la plena participación de estos grupos en todos los aspectos de la vida política, económica, social, religiosa y cultural de sus países y en el progreso y el desarrollo económico.

La mayor atención destinada a estos pueblos hizo que en 1991 entre en vigor la *Convención sobre Poblaciones Indígenas*, que se declare 1993 como *Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo* y que a partir de 1994 se proclame el *Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas*, declaraciones con las que se buscaba que en el transcurso de la década del noventa se mejore la situación económica, social y cultural de estos grupos sociales respetando plenamente sus características distintivas y sus propias iniciativas. Para lograr este fin, se sugirió que los gobiernos alienten la mayor participación

de las poblaciones indígenas en la planificación y ejecución de los proyectos que les conciernen, y que se busquen medios para dar a estas poblaciones más responsabilidad en sus propios asuntos y una voz efectiva en la adopción de decisiones en cuestiones que les atañen. Adicionalmente se reafirmó la obligación de los Estados de cuidar que las personas pertenecientes a estas minorías puedan ejercer plena y efectivamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna y en condiciones de total igualdad ante la ley.

Finalmente, debe señalarse que en la Declaración del Milenio, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Naciones Unidas afirmaron que los seres humanos se deben respetar mutuamente, en toda su diversidad de creencias culturales e idiomas, que no se deben temer ni reprimir las diferencias dentro de las sociedades ni entre éstas sino, al contrario, deben apreciarse como preciados bienes de la humanidad, y que en consecuencia se debe promover activamente una cultura de paz y dialogo entre todas las civilizaciones reconociendo el valor y diversidad de las distintas identidades, culturas y formas de organización social.

La OEA, por su parte, en la Declaración de Montrouis de 1995, planteó que en la diversidad étnica y cultural radica una de las mayores potencialidades del hemisferio, que los pueblos de América deben luchar contra el racismo y la xenofobia, y que se debe

de toda forma de discriminación, especialmente la de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en la Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.

Estos planteamientos nos muestran que el objetivo de fortalecer y consolidar las democracias que persiguen la ONU y la OEA no pasa por alto (como sucedía en el pasado) el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de muchos países y el derecho de los pueblos indígenas de participar en todos los ámbitos de la vida social. De esta forma, la problemática indígena ha logrado insertarse en la agenda de la profundización democrática.

5.2 Los cambios en el componente económico del discurso del Orden Mundial

En el capítulo II se vio que ante la crisis económica de finales del setenta y principios del ochenta, el FMI y el BM replantearon los roles para los que habían sido creados y comenzaron a promover reformas económicas principalmente en los países que estaban experimentando severas dificultades económicas. Así, el FMI se convirtió en la institución que avalaba la concesión de nuevos créditos a los Estados con problemas de deuda y el Banco Mundial se encargó de otorgar préstamos para ajuste estructural global y sectorial con el fin de reestablecer el crecimiento de estas economías. El involucramiento de ambos organismos con el proceso de ajuste generó la percepción de que éstos perseguían objetivos comunes (dirigidos a restaurar la capacidad de pago de deuda de los países) y realizaban recomendaciones idénticas. En los ochenta esta percepción no estaba muy alejada de la realidad puesto que, como se ha visto, los planteamiento de ambas instituciones eran muy similares y el objetivo visible que perseguían, al menos en el mediano plazo, era la implementación de un modelo de economía de mercado.

Durante la década del noventa, y una vez superada la recesión económica mundial que había provocado la crisis, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial volvieron a diferenciarse en sus objetivos y planteamientos. El FMI, que había nacido con la responsabilidad de prevenir problemas de balanza de pagos a través del suministro de créditos de corto plazo, se volvió a concentrar en mantener en orden las cuentas fiscales de los Estados y, debido al creciente flujo y movilidad de capitales a nivel mundial, en

anticipar posibles crisis financieras que tengan efectos de contagio peligrosos para la economía mundial (en este sentido es conocida la inflexibilidad del Fondo en temas como el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente). Por su parte, el Banco Mundial fue paulatinamente dejando de lado las consideraciones asociadas a los programas de ajuste estructural y se enfocó en problemas propios del desarrollo.

5.2.1 La centralidad de la disciplina fiscal en los planteamientos del FMI

En 1997, el FMI señalaba que la economía mundial disfrutaba del cuarto episodio de expansión y crecimiento desde 1970, un episodio que se caracterizaba por ser más estable y sostenido que los anteriores al estar respaldado por el crecimiento con baja inflación de los Estados Unidos e Inglaterra, por la recuperación de Europa occidental y por las tendencias de un crecimiento sólido en los países en desarrollo (particularmente en China y en la mayoría de los países asiáticos). Además, se esperaba que este ritmo de crecimiento continué en la siguiente década debido a que estaban ausentes los signos de tensión y desbalance que habían provocado las crisis anteriores. El control de la inflación global, la reducción de los déficits fiscales, la estabilidad de los tipos de cambio entre las principales monedas, la apertura de nuevos mercados y el incremento de la capacidad productiva en los países en desarrollo y el estímulo al comercio mundial, permitían ver el futuro con bastante optimismo. Sin embargo, se advertía que la crisis mexicana de 1994 y las presiones financieras que afectaban al sudeste asiático recordaban la importancia de la disciplina macroeconómica y del sostenimiento de sectores financieros sólidos (para lo que podía ser necesaria una reforma del sector financiero), lo cual, a su vez, subrayaba la necesidad de emprender reformas de segunda generación dirigidas a consolidar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento.

La crisis asiática de 1997 y sus sucesivas ondas de contagio en Rusia y Brasil provocaron la reducción del crecimiento económico mundial y, en muchos países, el inicio de un periodo recesivo. El FMI, si bien había observado la necesidad de emprender reformas financieras en algunos de los países en los que se originó la crisis, no anticipó la magnitud del riesgo que implicaba la expansión desregulada de los mercados financieros emergentes, episodio que exhibió la necesidad de una constante evaluación de los flujos de capital del sector

privado (los que a juicio de esta institución son el motor de la economía mundial), tarea a la que este organismo se propuso asignar prioridad en el futuro.

El Fondo señaló que los países pueden prevenir la proliferación de este tipo de crisis a través de la disciplina fiscal y monetaria, de evitar grandes desbalances externos, de evadir los riesgos que implican mantener un tipo de cambio fijo e impedir la sobrevaluación de éste, de consolidar el sistema financiero, de mejorar los sistemas regulatorios y de profundizar las reformas estructurales, las cuáles serían esenciales para restaurar la dinámica económica en el largo plazo ante eventuales shocks externos. Adicionalmente, y desde un punto de vista internacional, el FMI consideró esencial prescindir de medidas defensivas, como la depreciación o la protección comercial, que, si bien en el corto plazo podrían aliviar las presiones fiscales y financieras en un país determinado, en el largo plazo podrían comprometer su propio bienestar.

Estos planteamientos muestran que el FMI, a lo largo de los noventa y de los años que lleva esta década, varió muy poco su discurso, puesto que la disciplina fiscal, que implica evitar incrementos en el gasto público, sigue siendo su principal preocupación. El razonamiento es que si se controla el déficit fiscal se puede garantizar al menos la estabilidad económica. El crecimiento, por su parte, sigue siendo encomendado a la continuación y profundización del proceso de reformas iniciado en los ochenta y noventa (que se afirma debe concentrarse en la reforma institucional) y al entorno favorable que la apertura económica puede explotar.

5.2.2 Las nuevas preocupaciones del Banco Mundial

El Banco Mundial, que durante los ochenta postulaba que la intervención estatal debía estar dirigida sólo a crear un entorno macroeconómico estable, en los noventa empieza a revisar su postura a partir de aceptar la idea de que la intervención del Estado podía ser un factor de desarrollo. Asimismo, fue paulatinamente superando su concentración en el proceso de ajuste estructural para volver a plantear temas relacionados con el desarrollo de largo plazo.

En el Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1991 el BM afirmó que la interacción entre el Estado y el mercado es central para el desarrollo y que la dicotomía intervención *versus*

laissez faire es una falacia puesto que a pesar de que los mercados competitivos son la mejor manera de organizar eficientemente la producción y de distribuir los bienes y servicios, éstos no operan en el vacío debido a que requieren de un marco legal y regulatorio que sólo los gobiernos pueden proveer. Adicionalmente, según el Banco existen algunas tareas, como la inversión en infraestructura y la provisión de servicios esenciales a los pobres, que el mercado falla en realizar y que requieren la acción del Estado. Así, tanto el Estado como el mercado tendrían roles irremplazables y su trabajo coordinado podría generar resultados espectaculares. Bajo estas premisas, el BM señala que existe cada vez un mayor consenso a favor de un “enfoque favorable al mercado” (market-friendly approach).

El Banco Mundial mantuvo a lo largo de los noventa y posteriormente que la integración a los flujos de bienes, servicios y capital por medio de la apertura económica brinda enormes beneficios al promover la competencia y eficiencia, pero añadió que esas medidas no son en sí mismas suficientes para el bienestar, razón por la que el Estado debería no simplemente actuar cuando el mercado falle, sino tener un rol activo en la definición y protección de los derechos de propiedad, en la provisión de sistemas legales, judiciales y regulatorios efectivos, en la inversión en capital humano (educación, salud, nutrición) y físico (carreteras, sistemas de irrigación) y en la protección del medio ambiente. Sin embargo, aclara que esto no significa que el Estado incremente sus gastos y genere déficits que pudieran dar origen a nuevos procesos inflacionarios. Asimismo, y al igual que en años anteriores, el BM continuó planteando que un sistema de precios desregulado tiene mejores posibilidades de promover el crecimiento que uno distorsionado y que un entorno macroeconómico estable es uno de los más importantes bienes públicos que el Estado puede proporcionar.

El enfoque favorable al mercado señaló que debe realizarse cuidadosamente la división de tareas entre el Estado y el sector privado, dejando libre al mercado en aquellas áreas en las que puede desenvolver sin problemas, por lo que era recomendable privatizar muchas de las empresas públicas. Esto no significaba que se deseaba un Estado minimalista, sino al contrario, se sostenía la necesidad de un Estado eficiente que juegue un rol facilitador y complementario de la actividad privada, por lo que se afirmó que era imperioso fortalecer

las instituciones públicas para mejorar la calidad de los servicios del Estado e implementar una distribución del ingreso en favor de los más pobres.

El enfoque que el BM adoptó para abordar los desafíos del desarrollo en el siglo XXI⁶⁵ añadió, a los planteamientos anteriores, que no hay una política capaz, por sí sola, de impulsar el desarrollo y que el progreso depende de un sinnúmero de factores concretos, por lo que es preciso adoptar un enfoque integral que deje de lado las fórmulas mágicas que supuestamente aplican en todos los lugares y épocas. Adicionalmente, sostuvo que los gobiernos tenían que descender al nivel de las regiones y ciudades y dar la posibilidad de que el pueblo participe en la adopción de las decisiones que le afectan para encaminar un desarrollo eficaz.

En los primeros años de este siglo el Banco Mundial abandonó como prioridad el tratamiento de los problemas asociados con la gestión económica y se concentró en las tareas que inciden sobre el desarrollo y el bienestar a largo plazo. Bajo esta nueva perspectiva, señaló que una de las causas que impiden reducir la pobreza aun en condiciones de crecimiento económico es que las instituciones estatales, las normas, valores y costumbres sociales excluyen a las mujeres, a los grupos étnicos y a los sectores más empobrecidos, por lo que urge potenciar a estas poblaciones y adoptar políticas orientadas a eliminar las barreras culturales, sociales, políticas y económicas que impiden su participación en el proceso de toma de decisiones y en la supervisión de los servicios públicos, lo que contribuirá a ampliar sus oportunidades para alcanzar el bienestar. En este camino, se afirma la necesidad de contar con instituciones transparentes, con mecanismos de rendición de cuentas y de descentralización de los recursos financieros.

Otros temas abordados en esta nueva aproximación al problema del desarrollo son el desarrollo sostenible, la creación de instituciones que contribuyan al desarrollo, el conocimiento y la equidad, todos ellos analizados con el objetivo de proporcionar oportunidades equitativas de progreso para todos.

⁶⁵ Este enfoque está contenido en el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1999-2000.

5.3 La persistencia de la lucha contra las drogas

Los planteamientos en la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas no sufrieron modificaciones importantes desde los primeros años de la década del ochenta hasta el presente. Al respecto, la ONU continuó afirmando que la demanda, la producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas plantean una grave amenaza a toda la humanidad, dañando las instituciones democráticas y las estructuras socioeconómicas y políticas de las sociedades afectadas, y poniendo en peligro la estabilidad, la seguridad nacional, la soberanía y el desarrollo sostenible de los Estados, por lo que demandó la intensificación de la cooperación internacional y la acción concertada entre los Estados como base fundamental para enfrentar este problema. Sin embargo, hizo explícito el señalamiento de que esta lucha debe llevarse a cabo en forma plenamente acorde con los principios establecidos en la Carta de la Naciones Unidas, en particular el respeto de la soberanía y la integridad territorial de los Estados, y los principios de no injerencia en los asuntos internos de éstos y de la no utilización de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Además se señaló que esta amenaza debe enfrentarse respetando la identidad cultural de los pueblos y su derecho a determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y sus objetivos de procurar su desarrollo económico y social.

Reafirmando el principio de responsabilidad compartida de la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, las Naciones Unidas determinaron las siguientes prioridades para enfrentar este problema: reducción de la demanda, tratamiento y reinserción social de drogadictos, erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, desarrollo rural integrado, establecimiento de programas complementarios en las esferas del empleo, la salud, la vivienda y la educación, aumento de las oportunidades de comercio e inversión incluida la cooperación internacional para facilitar la comercialización de los cultivos de sustitución, eliminación del tráfico ilícito, interdicción, supervisión y control de las sustancias precursoras, de los productos químicos esenciales y del blanqueo de dinero. Adicionalmente, la ONU instó a la comunidad internacional a fortalecer la cooperación económica y técnica a los gobiernos que soliciten

apoyo en los programas de sustitución de cultivos ilícitos con respeto absoluto de la - jurisdicción y soberanía nacionales y de las tradiciones culturales de sus pueblos.

Con el fin de intensificar esta lucha, las Naciones Unidas aprobaron en 1988 la *Convención contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas*, instrumento que se agregó al marco internacional de fiscalización de drogas conformado por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, por el Protocolo de 1972 de Modificación de esta Convención, y por el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. Asimismo, se declaró que de 1991 a 2000 se celebraría el Decenio de las Naciones Unidas contra el Uso Indebido de Drogas.

De forma similar, la OEA señaló en la Declaración de Montrouis de 1995 que la producción, el consumo y el tráfico ilícito de drogas representan una amenaza para las instituciones democráticas y la salud y el bienestar de los ciudadanos, por lo que declaró la necesidad de intensificar la cooperación entre los Estados miembros para enfrentar este problema en el hemisferio. Asimismo, en la *Estrategia Antidrogas en el Hemisferio*, esta organización reconoció que el desarrollo alternativo es un componente esencial para generar y promover opciones económicas lícitas, viables y sostenibles que posibiliten la superación de los factores que llevan a la oferta ilícita de drogas.

De esta forma, a la fecha existe un consenso de que la lucha contra las drogas es una responsabilidad que involucra a todos los Estados y que requiere del apoyo económico a aquellos países que deben enfrentar problemas de sustitución de cultivos y de reorientación de importantes actividades económicas.

CAPITULO VI

ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS POLÍTICOS EN BOLIVIA

A continuación se analizará lo hasta aquí expuesto en términos del modelo de análisis presentado en el primer capítulo. Recordemos que allí se asumió que los actores políticos están conscientes que para impulsar las políticas de su interés deben tener la capacidad de acceder al poder del Estado (constituyéndose en gobierno) o influir en él, en función de lo cual desarrollan diversas estrategias dirigidas a tal fin, las mismas que pueden considerar los procesos electorales (en el caso de los partidos) o ignorarlos (en el caso de las organizaciones sociales). Considerando el acceso electoral al poder, se concluyó que en unas elecciones en las que se enfrentan el partido gobernante y un partido opositor, este último triunfará si su nivel de interpelación discursiva compensa tanto los incrementos en el ingreso que hubieron durante el periodo que gobernó el otro partido como el grado de interpelación discursiva de éste, asumiendo que ambos respetan el marco institucional del sistema político y valoran la ayuda internacional que puedan tener producto de su apego a las reglas de juego a nivel internacional.

De forma similar, en una contienda electoral en la que se enfrentan el partido gobernante y un partido opositor anti-sistema, este último se alzará con la victoria si su grado de interpelación discursiva es capaz de compensar los incrementos en el ingreso existentes en el periodo de gobierno que finaliza, el grado de interpelación discursiva de éste, la valoración de los electores por el sistema político y la importancia que tenga para éstos el apoyo y ayuda económica internacional.

Por último, si los electores tuvieran que elegir solamente entre un partido opositor y un partido opositor anti-sistema, para que este último resulte vencedor su grado de interpelación discursiva debe compensar el nivel de interpelación discursiva del partido opositor, la valoración por el sistema político y la necesidad socialmente percibida de la importancia de la ayuda internacional.

De este razonamiento se deduce que el componente discursivo es parte fundamental en la estrategia de los partidos para acceder al poder. A través de su discurso el partido opositor intenta diferenciarse del partido gobernante mostrando como un retroceso los resultados

económicos que deja la gestión de éste y proponiendo alternativas que, no obstante, respetan las reglas de juego prevalecientes a nivel político y económico. De forma similar, es decir, discursivamente, el partido opositor anti-sistema se presenta al electorado como la única opción distinta, por lo que procede a atacar los resultados económicos de la gestión del partido gobernante, el desgaste del sistema político (del que forman parte el partido de gobierno y el partido opositor) y la injerencia externa en el país, proponiendo alternativas que alteran las reglas de juego políticas y/o económicas.

Finalmente, se consideró la estrategia con la que las organizaciones sociales (sindicatos y organizaciones campesinas) actúan en el ámbito político intentando influir en las políticas que el gobierno impulsa, y se concluyó que ellas, para tener éxito, debían articular una retórica discursiva distinta (y hasta opuesta) al discurso oficial, establecer una estructura organizativa representativa en la que sus miembros se sientan más representados que la que ofrece el sistema político, intentar incrementar su número de miembros y renovar su repertorio de confrontación con la finalidad de obtener mayor capacidad de presión para hacer frente a la represión del gobierno. Así también se destacó que en la medida en que el discurso de las organizaciones interpele a la población en general, ésta ganará mayor fuerza.

Dado que la UDP había desaparecido, en las elecciones de 1985 no existió un partido gobernante claramente identificado contra el que los demás partidos compitan. Si bien el MIR y el MNRI habían formado parte del gobierno y se presentaban a las elecciones, las divisiones y retiros que hubo al interior de éste permitían que estos dos partidos deslinden cualquier responsabilidad sobre el desempeño gubernamental. Sin embargo, la traumática experiencia que había significado el descalabro económico y político que caracterizó la gestión de Siles Zuazo se mantuvo muy presente en el ambiente electoral.

A partir de la revisión realizada en el segundo capítulo sobre las propuestas de los distintos partidos en dicha elección, se puede afirmar que MNR, ADN, MIR y MNRI eran partidos que, con algunas variantes, se ajustaban a los planteamientos contenidos en el discurso del Orden Mundial de finales de los setenta y principios de los ochenta. Ninguno de ellos postulaba alternativas contrarias a la democracia y todos proponían la aplicación de

políticas tendientes a liberar las fuerzas del mercado, aunque debe señalarse que MNR y ADN se inclinaban hacia un enfoque neoliberal ortodoxo y el MIR y MNRI intentaban combinar las políticas de mercado con medidas de tipo social. Por otro lado, se puede considerar como partidos anti-sistema al POR, FPU y MRTKL puesto que presentaban plataformas contrarias al sistema político y/o a las reglas de juego del mercado. Los dos primeros planteaban el camino al socialismo y el tercero proponía la construcción de un Estado multinacional a partir de la destrucción del Estado colonial, temas que estaban ausentes de la agenda de las organizaciones internacionales y del propio sistema político boliviano.

El triunfo de las fuerzas que se apegaban al discurso del Orden Mundial y la formación de un gobierno sólido sustentado en una coalición que garantizaba la aprobación legislativa de cualquier reforma propuesta por el ejecutivo, posibilitaron el apoyo económico y el respaldo político internacional a la gestión de Victor Paz necesarios para emprender el proceso de estabilización y ajuste de la economía y para desincentivar cualquier pretensión de desestabilización democrática, lo que propició la subordinación total de las Fuerzas Armadas y la policía al gobierno. En esta elección, el electorado mostró su preferencia por las candidaturas que proponían a la vez frenar la hiperinflación (cualquiera sean las medias que se tomen) y garantizar la continuidad democrática (aunque ello signifique un elevado nivel de autoritarismo), con lo que se puede afirmar que la valoración social por el sistema político era muy alta, no debido a la simpatía que los partidos provocaban, sino porque se identificaba a éste con la propia democracia. Estos elementos bastaron para que MNR y ADN concentran la mayor cantidad de votos y se instalen en el gobierno.

La adopción del D.S. 21060 y todas las medidas de política económica resultantes consiguieron eliminar la hiperinflación a un elevado costo social, motivo por el que la COB se convirtió en el actor político más importante que se oponía a las políticas del gobierno. Para enfrentar esta situación, la Central Obrera intentó preservar la unión de todos los sectores sociales manteniendo su discurso anticapitalista y antiimperialista de construcción del socialismo, conservando su estructura organizativa que beneficiaba a los trabajadores mineros y aplicando las mismas medidas de presión que había ejercido contra la UDP:

huelgas de actividades, huelgas de hambre, marchas en las ciudades y bloqueos carreteros, - estos últimos con la participación decisiva de los campesinos.

El proyecto político de la COB no logró interpelar a la sociedad boliviana y provocó cada vez mayor escepticismo entre los propios sectores al interior de esta organización, el mantenimiento de su estructura organizativa generó el descontento de diversos grupos, en especial de los campesinos, lo que causó que se empiecen a desobedecer las directrices emanadas del comité ejecutivo cobista, la reducción cuantitativa del proletariado minero produjo que la Central Obrera pierda fuerza para enfrentarse a la represión del gobierno, y la escasa o nula innovación en su repertorio de confrontación hizo que sus acciones sean previsibles y fácilmente intervenidas. Todo ello condujo a la derrota de la organización social más importante de la historia boliviana, situación ante la que los diversos sectores sociales optaron por aglutinarse alrededor de los *comité cívicos* y las *juntas vecinales*, organizaciones que ofrecían la posibilidad de efectuar negociaciones exitosas con el gobierno, mismo que de esta forma lograba satisfacer a los grupos organizados a través de mejorar su bienestar sin necesidad de realizar concesiones políticas. A su vez, los partidos políticos se nutrieron de dirigentes sindicales que, ante la inflexibilidad de los mineros de reformar la estructura de la COB, encontraron que el sistema político les ofrecía mayores oportunidades de progresar políticamente a partir de representar con eficacia los intereses de sus sectores.

No podría afirmarse que en la derrota de la COB jugó un papel importante la interpelación discursiva del gobierno, pero tal parece que la estabilidad económica alcanzada fue mucho más valorada que la posibilidad de construir una sociedad socialista. Asimismo, un elemento adicional en la resolución de este enfrentamiento fue la subordinación de las FFAA al gobierno, que garantizaba que el conflicto, en caso de no solucionarse por la vía del diálogo y la negociación, se resolvería por la fuerza.

Este análisis nos muestra que la Central Obrera Boliviana no supo actualizar su discurso y organización a las exigencias que el nuevo contexto democrático exigían, razón por la que no pudo vencer discursivamente al gobierno de Víctor Paz ni a los posteriores, tampoco pudo convertirse, como lo demandaban sus objetivos de poder, en una opción más

incluyente que el sistema político (que además no era de por sí muy incluyente) y nunca tuvo la capacidad de imponerse por la fuerza como lo hizo con la UDP. El resultado final fue que gracias al rotundo debilitamiento de esta organización el sistema político ganó estabilidad y los partidos gozaron finalmente del monopolio de representación política.

Con la COB neutralizada, los partidos pudieron a partir de 1989 concentrarse en profundizar las reformas, erradicar las plantaciones de coca y distribuirse el poder sin una oposición efectiva. Es así que los tres partidos tradicionales fueron capaces de gobernar hasta 2003 utilizando diversas combinaciones en términos de pactos y coaliciones. Sin embargo, la demanda de la población por alternativas políticas al MNR, ADN y MIR propiciaron el surgimiento de partidos que, atacando los patrones de conducta de la política tradicional, los insuficientes resultados generados por el neoliberalismo, el carácter excluyente y discriminatorio de las estructuras estatales y sociales, y la injerencia norteamericana en la lucha contra las drogas, se presentaban como una opción alternativa y representativa de las grandes mayorías nacionales. De esta manera surgen CONDEPA, UCS, NFR y el MAS, partidos que en determinado periodo van a ejercer una posición anti-sistema para después, los tres primeros, insertarse en la lógica de la democracia pactada, y, en el caso del Movimiento al Socialismo, inaugurar un nuevo periodo político en Bolivia.

Un patrón de conducta constante entre los partidos de las coaliciones gobernantes fue que aquellos a los que no pertenecía el presidente de turno deslindaban toda responsabilidad sobre la gestión que concluía con el fin de no ser objeto de los ataques de los partidos de la oposición en el proceso electoral próximo. Incluso, muchos de ellos rompían los pactos de gobierno pocos meses antes de las elecciones denunciando que sus propuestas no habían sido tomadas en cuenta seriamente por el principal partido del oficialismo, con lo que se puede entender que ADN no haya tenido problemas en participar consecutivamente en dos coaliciones de gobierno, de 1985 a 1989 con el MNR y de 1989 a 1993 con el MIR, que UCS haya hecho lo mismo al formar gobierno con el MNR de 1993 a 1997 y con ADN de 1997 a 2002, o que CONDEPA haya renunciado en 1991 al pacto político que llevó a la presidencia a Jaime Paz, al igual que NFR se retiró de la megacoalición en 2001 y del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003.

Entre las elecciones de 1985 y 2002 nunca el partido del presidente logró siquiera igualar el porcentaje de votos obtenido en la contienda que lo llevó al gobierno, e incluso nunca pudo mantenerse en el gobierno. Los cuadros que muestran los resultados electorales en el capítulo IV evidencian las oscilaciones en la votación de los partidos, es decir, el incremento en su porcentaje de votos luego de haberse encontrado en la oposición y su disminución después de ocupar la presidencia. Este patrón electoral es prueba de que los partidos tradicionales no habían logrado interpelar a la sociedad y no contaban, por tanto, con una base sólida de electores, lo que les incentivó a un comportamiento dirigido a mantener la estabilidad del sistema político y a eliminar todo riesgo de ingobernabilidad puesto que los partidos que hoy no eran gobierno lo serían casi con seguridad en la próxima gestión. El que un partido de la oposición llegue a la presidencia en el siguiente periodo se convirtió en un patrón recurrente elección tras elección que muestra que el partido en cuestión conseguía el caudal de votos que le permitían acceder al gobierno en virtud no de su interpelación al electorado sino del desgaste que el partido oficialista había sufrido durante su gestión de gobierno.

Si el discurso de los partidos políticos tradicionales no había logrado interpelar a la sociedad y en nuestro modelo se afirma que es efectivamente a través del discurso que los partidos intentan diferenciarse ¿qué distinguía entonces a unos partidos de otros frente al electorado? Considero que el elector promedio percibía muy pocas diferencias entre el MNR, ADN y MIR, situación de la que los políticos eran además muy conscientes, por lo cual dirigían sus esfuerzos a fortalecer el sistema político para que la valoración social de éste aumente, a recordar continuamente los peligros de la ingobernabilidad que un gobierno sin mayoría podría enfrentar, a apegarse al discurso del orden mundial para recibir ayuda y respaldo internacional y a garantizar la estabilidad económica para establecer las condiciones mínimas para el crecimiento de la economía. Es así que estos tres partidos, en sus gestiones de gobierno, impulsaron las reformas constitucionales dirigidas a adoptar un sistema mixto de elección de parlamentarios y a incorporar en la constitución el carácter multiétnico y pluricultural de la república, implementaron las reformas de segunda generación dirigidas a privatizar las empresas públicas y retirar definitivamente al Estado de la actividad económica, y privilegiaron la erradicación de plantaciones de coca en la lucha contra el narcotráfico.

En términos del modelo de análisis descrito, los incrementos en el ingreso registrados durante la gestión del partido gobernante (cualquiera sea este) no compensaban el desgaste sufrido en su ejercicio de gobierno, por lo que los partidos de la oposición tradicional no requerían realizar un gran esfuerzo para convencer al electorado de volcar su voto hacia ellos. Para esto no necesitaban interpelar a la sociedad, la que de esta forma se encontraba ante un mercado político cerrado. Esta situación fue aprovechada por CONDEPA (de 1989 a 1997), por UCS (de 1993 a 1997), por NFR (en 2002) y por el MAS (en 2002 y 2005), partidos que, a partir de atacar la democracia pactada, el modelo neoliberal y la injerencia extranjera lograron insertarse en el sistema político y pudieron obtener porcentajes importantes de representación parlamentaria que sirvieron, paradójicamente, para que los tres primeros ingresen también en la lógica de pactos, lo que le dio vida al sistema político por algunos años más a pesar del creciente rechazo de la población hacia los partidos.

Entre las elecciones de 1989 y 2002 el electorado, al concentrar sus votos en torno a los partidos tradicionales, se inclinó por la certeza de la estabilidad económica y política. Si bien el neoliberalismo no había satisfecho las expectativas creadas al momento de impulsarse las reformas y el sistema político era percibido como crónicamente corrupto y excluyente, el elector promedio valoraba las certidumbres que le proporcionaban las reglas del mercado y la gobernabilidad. Sin embargo, el apoyo creciente que experimentaban los partidos anti-sistema (que alcanzaba a casi un tercio de los electores) comenzaba a dar señales de que la democracia ya no era identificada con el sistema político, de que la población demandaba mejoras a corto plazo en sus condiciones de vida, de que se rechazaba la política de erradicación de coca y la permanente injerencia de la embajada norteamericana en los asuntos internos bolivianos, y de que se reclamaban cambios profundos en el sistema político y en la estructura del Estado.

A partir de 2000 el sistema político comenzó a erosionarse y la legitimidad de los partidos a disminuir rápidamente. La reforma del sistema de elección de parlamentarios no había conseguido acercar los partidos a la población y reducir el rechazo del que era víctimas debido a que los diputados uninominales electos no tenían incentivos a responder ante las demandas de sus electores. Al adoptarse un sistema mixto que mantenía la asignación proporcional del número de parlamentarios en el que sólo después que se determinaba la

cantidad de diputados que le correspondían a cada partido (en función al porcentaje de votos obtenidos por el candidato presidencial) se establecía cuáles de ellos serían uninominales y cuáles plurinominales, los partidos políticos conservaron el control sobre sus legisladores y el parlamento mantuvo su subordinación al ejecutivo, con lo que la población aumentó su rechazo al sistema político.⁶⁶ Por si esto no fuera poco, se estableció que el escaño parlamentario pertenecía al partido y no al legislador, es decir, si el diputado electo no obedecía las directrices del partido podía ser removido de su cargo, con lo cual los diputados uninominales no se sentían obligados a responder a las expectativas de sus electores.

El rechazo al sistema político polarizó a la población, puesto que una parte de ella mantenía sus preferencias por la estabilidad y la gobernabilidad, y otra empezó a demandar cambios profundos. Entre los cambios que a partir de 2000 empezaron a tener mayor resonancia y que no se circunscribían únicamente al sistema político, sino también al modelo económico y a la estructura del Estado, se encuentran los siguientes: la desmonopolización de la representación política de la que gozaban los partidos, una mayor participación de la sociedad en las decisiones públicas a través de mecanismos de consulta como el Referéndum, la modificación (a través de una Asamblea Constituyente) de la organización del Estado que dé lugar a las autonomías regionales y al reconocimiento de las identidades y de las formas de organización originarias, la nacionalización de las empresas capitalizadas y privatizadas, y la suspensión de la erradicación de las plantaciones de coca.

⁶⁶ Antes de la reforma electoral el sistema de asignación de escaños era estrictamente proporcional, es decir, si a un departamento le correspondían 30 diputaciones, éstas eran distribuidas de acuerdo al porcentaje de votos que los partidos obtuvieron en ese departamento. De esta forma, si un partido obtenía el 30 por ciento de los votos se le asignaban entonces 9 diputados ($30 \times 0.3 = 9$). Luego de la reforma el mecanismo señalaba que debía determinarse el número de diputados que le correspondía a un partido proporcionalmente, a este número debía restarse el número de diputados uninominales de dicho partido que habían sido electos, y el remanente era el número de diputados plurinominales que se le asignaban. Es decir, si un partido obtenía el 30 por ciento de los votos en un departamento al que le correspondían 30 diputados de los cuáles 15 eran uninominales y 15 plurinominales y además lograba que 7 de sus candidatos uninominales sean electos, el mecanismo de asignación de escaños procedía de la siguiente forma: proporcionalmente le tocaban a dicho partido 9 diputados ($30 \times 0.3 = 9$), de los cuáles debían restarse los 7 uninominales electos quedando 2 diputaciones que correspondían a los plurinominales. El problema es que al final el partido obtenía la misma cantidad de diputados. Es más, no importaba el número de diputaciones uninominales que ganara, igual le correspondían los 9 diputados que la proporción de los votos obtenidos por su candidato presidencial le permitía.

El colapso del sistema político se dio finalmente cuando los gobiernos de Banzer y Sánchez de Lozada perdieron el control sobre las Fuerzas Armadas y éstas se negaron a respaldar diversos estados de sitio. El movimiento campesino, que había logrado crecer gracias a la articulación de un discurso incluyente y a una estrategia política que combinó la acción parlamentaria con la presión social, encontró un creciente apoyo en las ciudades que le permitió poner en diversas ocasiones a estos gobiernos en situación difícil y a ceder ante sus demandas. Por primera vez, los campesinos estaban en condiciones de imponerse, sin embargo, su estrategia de llegar al gobierno no sería por la fuerza, como en el proyecto de la COB, sino por la vía electoral.

Hemos mencionado que los actores políticos buscan acceder al poder o influir en él. Tradicionalmente se espera que sean los partidos los que busquen el poder y las organizaciones sociales las que intenten influir en las decisiones que emanen del gobierno. El sistema político boliviano al resistirse a emprender cambios que realmente acerquen a los partidos a la sociedad se aisló cada vez más de la población, y los actores políticos que no formaban parte del sistema de partidos no conseguían influir en las decisiones que emanaban del poder estatal, lo que los forzó a usar los instrumentos que les brindaba el marco democrático para ingresar al ámbito electoral con el objetivo de transformar completamente los patrones y las reglas del juego político.

El Movimiento al Socialismo, que emergió precisamente de la incapacidad de las organizaciones sociales por influir en las políticas públicas, se mantuvo fuera de los marcos de la democracia pactada y logró construir un discurso alrededor del reconocimiento de las culturas originarias, de la refundación del Estado, de la incorporación de la población a la toma de decisiones (a través del Referéndum y la Asamblea Constituyente) y de la formulación de un nuevo modelo económico en el que el Estado vuelva a tener control sobre el excedente económico, discurso que sí logró interpelar al electorado. Si bien los demás partidos también habían empezado a considerar medidas tendientes a la profundización democrática y a la modificación del neoliberalismo, el desgaste del que eran víctimas ya no hacía posible su recuperación debido a que durante casi dos décadas habían mantenido posturas apegadas al discurso del Orden Mundial de la década del ochenta. Estos partidos no consiguieron actualizar oportunamente sus planteamientos y ni siquiera su

reorganización en 2005 en torno a dos nuevas fuerzas, PODEMOS y Unidad Nacional, pudo evitar su caída.

El resultado de las elecciones de 2005 muestra que el electorado ya no valoraba el funcionamiento del sistema político en torno a la Democracia Pactada, que ya no tenía esperanzas en que las reformas económicas aplicadas desde 1985 rindan los frutos prometidos, y que la ayuda económica internacional ya no era bien recibida si significaba condicionamientos en torno a la erradicación de coca y un mayor avasallamiento de la soberanía nacional. Si a ello se suma el hecho de que nunca los partidos pudieron verdaderamente interpelar a la sociedad, no es difícil comprender que la articulación de un discurso alternativo de parte de un nuevo actor anti-sistema que sí considera estas demandas haya provocado el derrumbe de todos los partidos que componían el sistema político boliviano. Sin lugar a dudas la Democracia Pactada sirvió para estabilizar el país en un contexto de permanentes golpes de estado, elecciones fallidas y gobiernos democráticos forzados a adelantar su salida, puesto que viabilizaba las negociaciones necesarias para establecer gobiernos sólidos y estables. Sin embargo, una vez que el trauma de la ingobernabilidad quedó atrás y se empezó a demandar la profundización democrática, este mecanismo, que privilegiaba el *status quo*, fue desbordado.

Tal vez podamos preguntarnos si la victoria del MAS no obedece más bien al desgaste de los partidos tradicionales en lugar de ser producto de la interpelación *masista* sobre la sociedad. Sin lugar a dudas el triunfo de Evo Morales se debe en gran parte al deterioro de los partidos tradicionales, entre los que ya se encontraban en 2002 y 2005 CONDEPA, UCS y NFR, pero el por qué afirmo que el Movimiento al Socialismo sí interpeló a la población se debe a que los temas que incorporó en su discurso son parte fundamental de la agenda política actual que no puede ser evadida.⁶⁷ Asimismo, al contrario de lo que ocurría anteriormente cuando los partidos derrotados de hoy podían ser los vencedores de la siguiente elección, todos los partidos que formaron parte del sistema político (MNR, ADN,

⁶⁷ Esto se comprueba analizando la Nacionalización de los Hidrocarburos que decretó el gobierno de Evo Morales el 1 de mayo de este año. El Decreto que dicta esta medida no establece la estatización de las empresas petroleras extranjeras ni la expropiación de sus activos, sino tan sólo una renegociación de contratos dirigida a incrementar el monto de impuestos que actualmente pagan al Estado boliviano. Sin embargo, el gobierno del MAS no podía desentenderse de la demanda social de nacionalizar todos los recursos naturales, razón por la que actualmente llama *nacionalización* a un proceso de renegociación de contratos petroleros.

MIR, CONDEPA, UCS y NFR) enfrentan a la fecha su desaparición, por lo que es improbable que, al menos en el corto plazo, puedan reorganizarse y volver a ser gobierno. Al igual que ocurrió con la COB, la falta de actualización del discurso de los partidos en Bolivia, que se mantuvieron fieles al discurso del Orden Mundial de los ochenta e intentaron reaccionar muy tarde a este desfase, propició su debilitamiento y desaparición como actores relevantes del ámbito político. Y así como la Central Obrera Boliviana se resistió a flexibilizar su estructura organizativa, el mantenimiento de un sistema político excluyente en el que, a pesar de las reformas incorporadas, los partidos no modificaron sus patrones de conducta y relacionamiento con la sociedad, fue lo que finalmente provocó su colapso.

CONCLUSIONES

Para emprender este estudio hemos partido de una definición de economía política que señala que las estrategias que despliegan los actores políticos en el ámbito nacional con el fin de tomar el poder o influir en él para impulsar las políticas que satisfagan sus intereses, toman en cuenta, dependiendo del tipo de actor en cuestión (partidos u organizaciones sociales), el contexto económico, el sistema político prevaleciente, el discurso del Orden Mundial y la capacidad de presión que poseen, estrategias en las que, a su vez, es fundamental el discurso que articulan los distintos actores políticos con el fin interpelar a la sociedad. Con esta definición se establece la doble integración Economía-Política y Relaciones Internacionales-Política Doméstica pretendida para abordar el estudio de los cambios ocurridos a nivel político y económico en Bolivia a partir de 1985 que propiciaron cambios discursivos producto de esta lucha por el poder.

El vínculo entre las Relaciones Internacionales y la Política Doméstica está dado por la correspondencia entre los cambios discursivos al interior de un país (en este caso Bolivia) y las variaciones observadas en el Discurso del Orden Mundial. Al respecto, debemos hacer notar que el discurso actual del Orden Mundial incorpora elementos relativos a la profundización democrática, la inclusión indígena, la participación de la población en las decisiones públicas y la promoción del desarrollo de largo plazo en el que Estado y mercado deben complementarse. Todos estos aspectos son considerados por el MAS en Bolivia, con lo que puede afirmarse que el discurso de esta fuerza política se halla muy cercano al discurso del Orden Mundial, lo que no implica que haya necesariamente relaciones de causalidad entre ambos. Las correspondencias existentes entre el discurso predominante en Bolivia (que sin lugar a dudas es el que articula el actual partido gobernante) y el Discurso del Orden Mundial, sabiendo que ambos han sufrido alteraciones a lo largo de las dos décadas que nos separan desde el inicio de las reformas, nos permiten asumir que se comprueba la hipótesis planteada en este trabajo.

Los partidos que formaron parte del sistema político boliviano hasta 2005 se mantuvieron apegados al Discurso del Orden Mundial de la década del ochenta que postulaba que democracia y libre mercado constituían la base de un nuevo ordenamiento universal,

desfase que provocó su desaparición debido a que sus planteamientos no correspondían ni a las exigencias que las nuevas circunstancias en Bolivia demandaban ni a lo que a nivel internacional ya se empezaba a formular en un contexto de paulatina desidentificación entre democracia y libre mercado, lo que propició el triunfo electoral de un candidato, Evo Morales, que planteaba tanto la profundización democrática a partir de la transformación de las estructuras estatales como el fin del neoliberalismo. No obstante, resalta una diferencia importante entre el discurso del MAS y el del Orden Mundial, y es el referido al ámbito de la lucha contra las drogas. Si bien el Movimiento al Socialismo se apega a lo que disponen las organizaciones internacionales en referencia a la lucha contra el narcotráfico, no acepta que ello implique la erradicación de plantaciones de coca y propugna una cruzada internacional para lograr la despenalización de la hoja de coca en los convenios internacionales en esta materia. Si acaso organismos como la ONU y la OEA admiten a futuro la diferencia entre coca y cocaína que el movimiento campesino propugna hace varios años y aceptan el cultivo de esta planta reconociendo sus propiedades medicinales a la par que continúan exigiendo una lucha sólida contra la producción y tráfico de drogas, veremos una correspondencia mucho más cercana entre ambos discursos. Por el momento, sin embargo, este tema será fuente de tensiones importantes.

Finalmente, considero interesante abordar a futuro un estudio similar al desarrollado en este trabajo de investigación que abarque varios países con el objetivo de determinar relaciones causales entre los cambios discursivos que se experimentan a nivel nacional y las variaciones en el Discurso del Orden Mundial.

BIBLIOGRAFÍA

ADN (2002) Programa de gobierno 2002-2007. Para cambiar tu vida. La Paz.

ARRIGHI, Giovanni y Beverly SILVER (2001) Caos y Orden en el Sistema Mundo Moderno. Editorial Akal, Madrid.

ATTINÀ, Fulvio (2001) El sistema político global: introducción a las relaciones internacionales. Ed. Paidós, Barcelona.

BANCO MUNDIAL (1985) Informe sobre el Desarrollo Mundial 1985. Oxford University Press, Washington D.C.

— (2000) Informe sobre el Desarrollo Mundial 1999-2000. En el umbral del siglo XXI. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.

— (2001) Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000-2001. Lucha contra la pobreza. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.

— (2002) Informe sobre el Desarrollo Mundial 2002. Instituciones para los mercados. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.

— (2003) Informe sobre el Desarrollo Mundial 2003. Desarrollo Sostenible en un mundo dinámico. Oxford University Press, Washington D.C.

— (2006) Informe sobre el Desarrollo Mundial 2006. Equidad y Desarrollo. Mayol Ediciones S.A., Bogotá.

CAPORASO, James (1997) "Across the great divide: integrating comparative and international politics", en *International Studies Quarterly* No 41.

CEDOIN (1988a) VII Congreso de la COB. Documentos y Resoluciones. La Paz.

— (1988b) III Congreso de la CSUTCB. Un congreso inconcluso. La Paz.

— (1990) El desafío de mantener la unidad (IV Congreso ordinario de la CSUTCB). Informe especial. La Paz.

— (1991) VIII Congreso de la COB. Documentos y Resoluciones. La Paz.

— (1993) V Congreso Ordinario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Documentos y Resoluciones. La Paz.

— (1992) IX Congreso de la COB. Documentos y Resoluciones. La Paz.

— (1994a) X Congreso de la COB. Documentos y Resoluciones. La Paz.

— (1994b) VI Congreso de la CSUTCB. Documentos y Resoluciones. La Paz.

— (1996a) XI Congreso: tiempos difíciles para la COB. Informe Especial. La Paz.

— (1996b) VII Congreso de la CSUTCB. Documentos y Resoluciones. La Paz.

— (1999) Informes y Documentos. VIII Congreso Ordinario Nacional de la CSUTCB. La Paz.

— (2001) IX Congreso CSUTCB. Documento inédito.

CENTER FOR INTER-AMERICAN RELATIONS (1976) The United States and Latin America: Next Steps. A second report by the Commission on United States-Latin America Relations, New York.

CIDH (varios años) Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington. [Documentos en línea]. Disponibles desde Internet en: <www.oas.org>.

COB (1954) Programa Ideológico y Estatutos de la Central Obrera Boliviana. La Paz.

— (1970) Tesis Política de la Central Obrera Boliviana. La Paz.

— (1979) Frente a la Crisis (Propuesta de Política Económica de la Central Obrera Boliviana). La Paz.

— (1983) Plan Económico y Social de Emergencia de la Central Obrera Boliviana para el Co-gobierno. La Paz.

— (1985) VI Congreso de la COB. Protocolos y tesis de la discusión política. La Paz.

CONDEPA (1989) Documentos constitutivos. Documento inédito.

— (1997) 100 Respuestas a la crisis. La Paz.

CORTE NACIONAL ELECTORAL DE BOLIVIA (2005) Boletín estadístico Nro 3. [Documento en línea]. Disponible desde Internet en: cne.org.bo.

— (2006) Corte Nacional Electoral (2006), “Elecciones generales y de prefectos 2005” <www.cne.org.bo/sirenacomp/index.aspx>

COX, Robert (1987) Production, Power and World Order. Social Forces in the making of history. Columbia University Press, New York.

— (1993) “Fuerzas Sociales, Estados y Órdenes mundiales: más allá de la teoría de las relaciones internacionales”, en Abelardo Morales (comp) Poder y Orden Mundial. FLACSO-Costa Rica.

COX, Robert y Timothy SINCLAIR (1996) Approaches to World Order. Cambridge University Press, Great Britain.

CROZIER, Michel (et.al) (1975) The crisis of Democracy. Report on the governability of democracies to the Trilateral Commission. New York University Press, New York.

DOUGHERTY, James y Robert L. PFALTZGRAFF (1993) Teorías en pugna en las relaciones internacionales. Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires.

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA (1985) Decreto Supremo 21060. La Paz.

GILPIN, Robert (1992) La economía política de las relaciones internacionales. Editorial Latinoamericana, Buenos Aires.

GUITIÁN, Manuel (1987) “Adjustment and Economic Growth: their fundamental complementarity”. En V. Corbo, M. Goldstein y M. Khan (ed) Growth Oriented Adjustment Programs, International Monetary Fund and the World Bank. Washington.

HAGGARD, Stephan y Robert KAUFMAN (1995) The Political Economy of Democratic Transitions. Princeton University Press, New Jersey.

- HARTLYN, Jonathan y Samuel MORLEY (ed) (1986) Latín American Political Economy. Financial Crisis and Political Change. Westview Press, Colorado.
- HOFFMAN, Stanley (1988) Orden Mundial o Primacía: la política exterior norteamericana desde la Guerra Fría. Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires.
- IMF (1986), Fund Supported Programs, Fiscal Policy, and Income Distribution. Occasional Paper #46. Washington D.C.
- (1997) World Economic Outlook. EMU and the World Economy. International Monetary Fund, Washington D.C.
 - (1999) World Economic Outlook. International Financial Contagion. International Monetary Fund, Washington D.C.
 - (2000) World Economic Outlook. Focus on Transition Economies. International Monetary Fund, Washington D.C.
 - (2002) Global Financial Stability Report. Market Developments and Issues. International Monetary Fund, Washington D.C.
 - (2003) Global Financial Stability Report. Market Developments and Issues. International Monetary Fund, Washington D.C.
 - (2004) Global Financial Stability Report. Market Developments and Issues. International Monetary Fund, Washington D.C.
- JACOBSEN, John (1996) "Are all politics domestic? Perspectives on the integration of Comparative Politics and International Relation Theories", en *Comparative Politics*, Vol 29, No 1.
- KUCZYNSKI, Pedro Pablo y John WILLIAMSON (comp) (2003) After the Washington Consensus: restarting growth and reform in Latin America. Institute for International Economies, Washington.
- LOZADA, Blithz y Marco SAAVEDRA (1998) Democracia, pactos y élites. Genealogía de la gobernabilidad en el neoliberalismo. UMSA, La Paz.
- LIPSET, Seymour Martin (1959) Political Man, the social bases of politics. Doubleday ed., New York.
- MANSILLA H.C.F. y Carlos TORANZO (ed) (1993) Foro político electoral. Los programas de los partidos. CEBEM-ILDIS, La Paz.
- MAS (2002) Lincamientos generales del programa de gobierno. La Paz.
- (2005) Programa de gobierno. Bolivia digna, soberana y productiva. La Paz. [Documento en línea]. Disponible desde Internet en: <www.cne.org.bo>.
- MILNER, Helen (1998) "Rationalizing politics: the emerging synthesis of international, american and comparative politics", en *International Organization* 52.
- MIP (2002) Programa de Gobierno del Movimiento Indígena Pachakuti 2002-2007. La Paz.

MIR (1985) Síntesis del Proyecto Nacional. La Paz.

— (1997) Una alianza estratégica con los bolivianos. Programa marco de gobierno. La Paz.

— (2002) Plan trabajo Bolivia para los bolivianos. Programa de gobierno 2002/2007. La Paz.

MNR (1989) Programa de gobierno. La Paz.

— (1993) El Plan de todos. La Paz.

— (2002) Plan de emergencia para salir de la crisis, derrotar la corrupción y combatir la exclusión social. La Paz.

— (2005) Un programa para el cambio: participación productiva. [Documento en línea]. Disponible desde Internet en: <www.cne.org.bo>.

MRTKL (1985) Tesis Programática. La Paz.

NACIONES UNIDAS (varios años) Resoluciones y Decisiones aprobadas por la Asamblea General. New York. [Documentos en línea]. Disponibles desde Internet en: <www.un.org>.

— (1948) Declaración Universal de los Derechos Humanos. [Documento en línea]. Disponible desde Internet en: <www.un.org>.

NFR (2002) Plan de Gobierno 2002-2007. La Paz.

OEA (1948) Carta de Organización de los Estados Americanos. [Documento en línea]. Disponible desde Internet en: <www.oas.org>.

— (1969) Convención Americana sobre Derechos Humanos. [Documento en línea]. Disponible desde Internet en: <www.oas.org>.

— (2001) Carta Democrática Interamericana. [Documento en línea]. Disponible desde Internet en: <www.oas.org>.

PODEMOS (2005) Programa de gobierno 2006-2010. [Documento en línea]. Disponible desde Internet en: <www.cne.org.bo>.

PRZEWORSKI, Adam (1991) Democracy and the Market. Political and Economic Reform in Eastern Europe and Latin America. Cambridge University Press, New York.

REPÚBLICA DE BOLIVIA (1989) Estrategia de Desarrollo Económico y Social 1989-2000. Ministerio de Planeamiento y Coordinación. La Paz.

— (1992) Estrategia Nacional de Desarrollo. Ministerio de Planeamiento y Coordinación. La Paz.

RIVERA, Silvia (2003) Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y quechwa 1900-1980. HISBOL, La Paz.

SCHAMIS, Hector (1998) The Politics of Economic Reform. Distributional coalitions and policy change in Latin America. Working paper #250, Kellogg Institute-University of Notre Dame, California.

- SCOTT, James (1990) Los dominados y el arte de la resistencia. Era, México.
- SELA (1986) El FMI, el Banco Mundial y la crisis latinoamericana. Editorial Siglo XXI, México.
- SILVERT, Kalman (et.al) (1975) The Americas in a changing world. A report of the Commission on United States-Latin America Relations. The New York Times Book Company, New York.
- SMITH, William et.al (ed) (1994) Latin American Political Economy in the Age of Neoliberal Reform. Theoretical and comparative perspectives for the 1990s. University of Miami, USA.
- STURZENEGGER, Federico y Mariano TOMASSI (ed) (1998) The Political Economy of Reform. MIT Press, Massachusetts.
- TOMASSINI, Luciano (1988) Introducción a la teoría de las relaciones internacionales. Cuadernos de Ciencias Sociales No 24, FLACSO, Costa Rica.
- TORANZO, Carlos (ed) (1989a) Los partidos políticos y sus programas económicos. Edobol, La Paz.
- (1989b) Foro Debate: Elecciones Nacionales 1989. EDOBOL, La Paz.
- TUGORES, Juan (1999), Economía Internacional: Globalización e Integración Regional, Ed. McGraw-Hill, España.
- UCS (2002) Pacto con Bolivia. Programa de gobierno 2002-2007. La Paz.
- UNIDAD NACIONAL (2005) Dar la cara por Bolivia. Acciones de gobierno 2006-2010. [Documento en línea]. Disponible desde Internet en: <www.cne.org.bo>.
- UNITED NATIONS (1961) Single Convention on narcotic drugs. [Documento en línea]. Disponible desde Internet en: <www.un.org>.
- (1966) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. [Documento en línea]. Disponible desde Internet en: <www.un.org>.
- (1966) International Covenant on Civil and Political Rights. [Documento en línea]. Disponible desde Internet en: <www.un.org>.
- (1971) Convention on Psychotropic Substances. [Documento en línea]. Disponible desde Internet en: <www.un.org>.
- (1988) Convention against illicit traffic in narcotic drugs and Psychotropic Substances. [Documento en línea]. Disponible desde Internet en: <www.un.org>.
- (1989) Indigenous and Tribal Peoples Convention. [Documento en línea]. Disponible desde Internet en: <www.un.org>.
- WORLD BANK (1981) World Development Report 1981. National and International Adjustment. Oxford University Press, Washington D.C.

- (1982) World Development Report 1982. International Development Trends, Agriculture and Economic Development. Oxford University Press, Washington D.C.
- (1983) World Development Report 1983. World Economic Recession and prospects for recovery, Management in Development. Oxford University Press, Washington D.C.
- (1984) World Development Report 1984. Recovery or Relapse in the World Economy?, Population change and Development. Oxford University Press, Washington D.C.
- (1991) World Development Report 1991. The challenge of Development. Oxford University Press, Washington D.C.
- (1997) World Development Report 1997. The State in a changing world. Oxford University Press, Washington D.C.
- (2005) World Development Indicators 2005. Washington D.C.